

INDICE

2	RESUMEN.	5
3	INTRODUCCIÓN.	6
4	CAPITULO I	10
5	EL DESPLAZAMIENTO Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO EN COMUNIDADES CAMPESINAS.	10
1.1.	Las comunidades campesinas en el Perú.	10
1.2.	Las Comunidades Campesinas en la región de Lambayeque.	14
1.3.	Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos.	17
1.3.1.	Centro poblado La Algodonera.	19
1.4.	Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos.	29
1.4.1.	Referente histórico.	29
1.4.2.	Componentes del proyecto.	30
1.4.2.1.	Transvase del agua.	31
1.4.2.2.	Centrales Hidroeléctricas.	32
1.4.2.3.	Proyecto de Irrigación del Valle de Olmos.	32
1.5.	Proyecto Especial Olmos Tinajones.	33
1.6.	Los desplazados y reasentados involuntariamente de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos.	35
1.6.1.	Proceso de Desplazamiento.	45
1.6.1.1.	Estrategias de interacción: convencimiento y sensibilización	45
1.6.1.2.	Paradigma de la compensación por afectación.	50
1.6.1.3.	Características del desalojo.	58
1.6.2.	Proceso de reasentamiento.	62
1.6.2.1.	Acondicionamiento de la nueva estructura de convivencia.	62
1.6.2.2.	Nuevas condiciones de desarrollo.	65

1.7. Metodología de la investigación.	78
1.7.1. Operacionalización de variables	80
1.7.2. Población y muestra.	82
1.7.3. Problema de Investigación.	82
1.7.4. Objeto y campo de la investigación.	86
1.7.4.1. Objeto de la investigación: Movilidad social.	86
1.7.4.2. Campo de la investigación:	86
1.7.5. Importancia de la investigación.	86
1.7.6. Objetivos de la investigación.	87
1.7.6.1. Objetivo general.	87
1.7.6.2. Objetivos específicos.	88
1.7.7. Hipótesis de investigación.	88
1.7.8. Diseño lógico de la investigación.	89
9 CAPITULO II	90
10 MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN	90
2.1. Fundamento epistemológico para el conocimiento del problema de investigación.	90
2.1.1. Teoría de la complejidad.	90
2.1.2. Teorías sobre los procesos sociales relacionados con el problema de investigación.	100
2.1.2.1. Teoría de la acumulación primitiva.	100
2.1.2.2. Teoría del estructuralismo.	104
2.1.2.3. Enfoque teórico del Desarrollo Humano desde la Política Social.	110
11 CAPITULO III	128
12 PROPUESTA PARA EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	128
3.1. Propuesta teórica.	128

3.1.1. Fundamentos.	128
3.1.1.1. Desde la Teoría de la Complejidad.	128
3.1.1.2. Desde la Teoría del Estructuralismo.	130
3.1.1.3. Teoría de la acumulación primitiva.	135
3.1.2. Los componentes de la propuesta	143
3.1.2.1. Marco normativo	143
3.1.2.2. Institucionalidad	145
3.1.2.3. Prácticas de desplazamiento y reasentamiento involuntario.	147
3.1.2.4. Prácticas de interculturalidad	148
3.2. Modelo práctico.	149
3.2.1. Marco normativo.	149
3.2.1.1. Internacional.	149
3.2.1.2. Nacional.	152
3.2.2. Institucionalidad.	154
3.2.2.1. Sistema Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente	155
3.2.2.2. Consejo Nacional de Atención inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente.	156
3.2.2.3. Comités inter-sectoriales zonales	157
3.2.2.3.1. Acciones de los comités inter-sectoriales zonales.	158
3.2.2.4. Red Nacional de Información para la Atención a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente.	159
3.2.2.5. Observatorio del Desplazamiento y Reasentamiento Involuntario	159
3.2.2.6. Fondo Nacional para la Atención Inclusiva a la Población desplazada y Reasentada Involuntariamente.	160
3.2.3. Plan Nacional de Atención Inclusiva para la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente	161

3.2.3.1. Objetivos.	161
3.2.3.2. El marco de indemnización	162
3.2.3.3. Asistencia para el restablecimiento de los medios de subsistencia	165
3.2.3.4. Presupuesto y calendario de ejecución.....	169
3.2.3.5. Consultas y participación	170
3.2.3.6. Intercambio de información	171
3.2.3.7. Promoción de la participación	172
3.2.3.8. Resolución de quejas	173
3.2.3.9. Seguimiento y evaluación	174
3.2.4.1. Reconocimiento de comunidades campesinas	177
3.2.4.2. Consentimiento libre, previo e informado de las comunidades campesinas	178
3.2.4.3. Consideraciones de los programas para las comunidades campesinas.....	179
3.2.4.4. Requerimientos de los Programas del Plan Nacional	181
3.3. Representación gráfica.	185
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN	186
RECOMENDACIONES.	186
BIBLIOGRAFÍA.	189
ANEXO N°1: registro fotográfico.	196
ANEXO N° 2: Registro documentario.	204

RESUMEN

En el proceso evolutivo de las naciones del mundo, se han construido y reconstruido diferentes tipos de estrategias (políticas, sociales y económicas principalmente) que conllevan a la consolidación del desarrollo nacional. Un desarrollo que bajo la mirada de pocos científicos sociales, no sólo produce beneficios sino también grados importantes de desorganización social. El reconocimiento de este doble efecto no se ha generalizado en los momentos más necesarios; es decir, en el diseño y planificación de los proyectos o programas de desarrollo que de alguna manera alteran estructuras sociales particulares.

La presente investigación se centra, inicialmente, en caracterizar y explicar uno de los factores de desorganización social que se genera en el proceso de ejecución de un proyecto de desarrollo, el desplazamiento y reasentamiento involuntario de poblaciones relacionadas al ámbito de las comunidades campesinas. Los efectos que genera la política de desplazamiento y reasentamiento involuntario es el objeto central del estudio; el cual, describo por medio del análisis de las implicancias de la política y su relación con las condiciones sociales de vida de la población involucrada.

Por otro lado, la población objeto de estudio tiene características particulares que obedecen al ámbito de las comunidades campesinas del departamento de Lambayeque. Contextos que además de conjugar sus particulares prácticas culturales, sociales, económicas y políticas, se adhieren características específicas de marginalidad y vulnerabilidad significantes; con lo cual, se determina las principales características del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. Sus características grafican la interacción subjetiva y objetiva de las prácticas sociales de una población determinadamente rural y la naturalidad generalizada de una política.

Palabras claves: Política de desplazamiento y reasentamiento involuntario, comunidad campesina, proyecto de desarrollo.

I. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, los proyectos de desarrollo han tomado como argumento para su ejecución, ser estrategias de intervención cuya finalidad es acelerar y dirigir el crecimiento económico y el desarrollo social de una región o del país. Ser actividades de inversión en las cuales se utilizan recursos financieros (tanto estatales, del sector privado o ambas a la vez) para crear activos de capital que producen beneficios a lo largo de un horizonte extenso. Desde un enfoque íntimamente social, estructura sus actividades en relación a la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir.

La relación entre lo conceptualmente teórico y lo teóricamente práctico difiere mucho en sus características, especialmente cuando se describe y analiza condiciones sociales generadas por efectos positivos y negativos de un objeto causante.

Entre los factores que generan efectos en determinadas poblaciones, por la ejecución de Proyectos de desarrollo, se encuentra el desplazamiento y reasentamiento involuntario. Factor que evalúa, planifica y ejecuta actividades en relación a parámetros generales de políticas particulares.

En una estimación del Banco Mundial, se resuelve que anualmente en el mundo no menos de 10 millones de personas entran en procesos de desplazamiento y reubicación involuntarios, como consecuencias de proyectos de infraestructura, sólo en los sectores de construcción de presas, desarrollo urbano y de transporte. Esto quiere decir que solamente en la década de los 90's cerca de 100 millones de personas fueron desplazadas por proyectos de desarrollo (Cernea, 1999).

A nivel de Latinoamérica, según Mejía (1999) sólo el Banco Mundial en 1995 financiaba alrededor de cien proyectos en zonas urbanas y rurales de la región de

Latinoamérica y el Caribe, que se encontraban en implementación o preparación; la mayoría de ellos enfocados en construcción y mejoras de servicios e infraestructura urbana y rural, mejoras ambientales, ordenamiento territorial y manejo de cuencas hidrográficas. Este autor, calculó que más de 100.000 personas serían desplazadas por sólo diez de estos proyectos en Argentina, Paraguay, Brasil y Colombia.

El proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario se le caracteriza por ser un fenómeno social que se encuentra tanto en el ámbito urbano como rural, a ser ejecutados sin antes consultar a las personas afectadas; quienes, en la mayoría de los casos, no poseen medios adecuados para su defensa judicial o algún tipo de representatividad; a utilizar mecanismos de hostigamiento, amenazas, violencia, represión y donde se proyecta planes de reasentamiento y compensación deficientemente planificados.

El desplazamiento y reasentamiento involuntario causado por proyectos de desarrollo, se ha iniciado en el Perú desde mediados del siglo XX; sin embargo, éste fenómeno social fue invisibilizado por el dramático desplazamiento generado por la violencia política y económica que vivió nuestro país. Es a partir del año 2004 en que, el Estado peruano, tomando de referencia a los Principios Rectores promulgó la Ley 28223, Ley sobre Desplazamiento Internos, en la cual se reconoce el estatus y la especial protección que merecen las personas que se encuentran en estas condiciones. De igual forma, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones propuso una política (PACRI) para los procesos de desplazamiento involuntarios originados por proyectos de desarrollo formulados por su sector. Sin embargo, tales iniciativas no han logrado mitigar los efectos contraproducentes que originan los proyectos de desarrollo en las poblaciones desplazadas; especialmente, en los pueblos indígenas, comunidades campesinas y minorías étnicas que se ven afectadas desproporcionalmente. Al ser grupos pertenecientes a estratos sociales políticamente marginados y desaventajados, terminando empobrecidos y olvidados.

Unos de los casos conocidos de desplazamiento y reasentamiento involuntario, en el Perú, es el de la población de la Oroya; quienes fueron desplazados por un proyecto minero; y la población del asentamiento humano El Ayllu (Lima), desplazados por el Proyecto de Ampliación del aeropuerto Jorge Chávez; en ambos casos no se han tenido en cuenta una adecuada planificación del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

En la región Lambayeque, el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario más reciente (2011) se ejecutó en la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, distrito de Olmos; a consecuencia del avance de las fases que conforman el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos o “Proyecto Olmos”, como también es llamado, implementado por el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). El “Proyecto Olmos” ha sido objeto de estudio desde diferentes puntos de análisis, dando como resultados publicaciones como “Proyecto Olmos en un territorio árido de la costa peruana” de GRADE o “Tierras comunales y conflicto con el Estado: El caso de Olmos” de CEPES, entre otras; en donde, se describe generalmente un contexto integrado por conflictos de intereses estatales, empresariales y comunales sobre la explotación o utilización de áreas que se encuentran dentro del territorio de comunidades campesinas, problemas que afectan o impiden negociaciones, agentes de represión, proyecciones de desarrollo económico o informes técnicos de infraestructura. Las referencias hacia un proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario en comunidades campesinas son superficiales. Sin embargo, los estudios como “Impactos socioambientales de reasentamiento por proyectos de desarrollo: Caso caserío de Huabal-Cajamarca por el Proyecto Olmos Tinajones” y, específicamente,

“Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos: Impactos y consecuencia” de Forum Solidaridad Perú hacen referencia sobre características en que se estaba iniciando el proceso de desplazamiento y reasentamiento.

Los efectos generados, en los comuneros olmanos, por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario del Proyecto de Irrigación e

Hidroenergético Olmos, se analiza mediante un marco generalizado de la complejidad de Edgar Morin, los parámetros interpretativos del estructuralismo de Pierre Bourdieu, la teoría de la acumulación primitiva del marxismo . Entre ambas, se conjuga la interpretación de las condiciones sociales de vida de los pobladores afectados, partiendo desde sus prácticas sociales construidas, y su interacción con las acciones prácticas de una política de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

La presente investigación, se estructura en tres capítulos. El primero, se describe el marco evolutivo en que se han desarrollado las comunidades campesinas a nivel nacional y, especialmente, las de la región Lambayeque y del distrito de Olmos; y las condiciones relacionales que caracterizaron al proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario de los comuneros objetos de estudio; además de estructurar la metodología de investigación implementada en el estudio. En el segundo capítulo, se hace mención sobre el marco teórico que ha sustentado el análisis del estudio de desplazamiento y reasentamiento involuntario; donde se refiere a la teoría de la Complejidad como el fundamento epistemológico par el conocimiento del problema de investigación; y a las teorías de la Acumulación Primitiva, Constructivismo Estructural y el enfoque de Desarrollo Humano desde la Política Social como teorías relacionadas a los procesos sociales del problema de investigación. Por último, en el capítulo tres se sustenta la propuesta para el problema de investigación, refiriendo a un Sistema Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada

Involuntariamente, un Consejo Nacional, Comités inter-sectoriales zonales y un Plan Nacional de Atención Inclusiva para la población Desplazada y Reasentada Involuntariamente.

II. CAPITULO I

2.1. El desplazamiento y reasentamiento involuntario en comunidades campesinas

En el presente apartado se describe el escenario en que se reproduce la problemática en investigación— proceso de Desplazamiento y Reasentamiento Involuntario. Desde las particularidades que ha mantenido y mantiene el contexto social de las comunidades campesinas en el Perú, en su relación institucional, organizacional, social, cultural e histórica con una sociedad mayor. Pasando por la evolución socio-histórica del proceso que originó la implementación de la política sectorial de desplazamiento y reasentamiento involuntario, implementada en los caseríos de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos. Y de igual forma, se describe las condiciones sociales de vida, particulares, de los comuneros afectados y de sus implicancias y efectos generados del proceso en estudio.

2.1.1. Las comunidades campesinas en el Perú

En un marco conceptual amplio, se puede definir a las comunidades campesinas como unidades sociales con intereses diversos sobre los que inciden de manera particular un vínculo territorial y vínculos de parentescos y residencia que configuran espacios de vida. Mantienen funciones particulares de regulación económica y social, comparten propiedades e interactúan como colectivo ante la sociedad mayor.

Entre sus particularidades se encuentran parámetros existenciales como: a) un territorio comunal usufructuado familiar y comunalmente, b) un grupo de familias que se consideran sus miembros/propietarios, c) un cuerpo de dirigentes encargados de algunas funciones internas y externas, d) otras comunidades campesinas vecinas que interactúan entre sí y e) un Estado que la reconoce y le otorga legitimidad y que regula algunas normas y funciones. Entre sus condiciones

existenciales alberga una diversidad a lo largo del territorio nacional, generada por razones históricas, geográficas, poblacionales; además de fundamentos estructurales como la organización, diversidad cultural, diversidad de tierras, de integración económica, etc.

Entre las principales evaluaciones del escenario actual de las comunidades campesinas, Ramón Pajuelo resume las principales ideas de Rodrigo Montoya en los siguientes términos: a) las comunidades enfrentan una situación de desestructuración, como resultado de un largo proceso histórico antiandino y anticomunal, en el que el impacto del Estado y la expansión mercantil capitalista han vuelto predominante una estructura agraria parcelaria contraria a la estructura de la comunidad y b) hay un proceso de diferenciación que se expresa en la existencia de comuneros ricos y pobres, en su base se encuentra la dinámica de la actividad comercial, los servicios de transporte y complementariamente en la propiedad de mayor o menos ganado y acceso a la tierra.

González (1994) amplía la visión al describir una determinación económica en la persistencia de la institución comunal, al referir que existe economía comunal campesina cuando la organización de la producción y trabajo se efectúa mediante un sistema de interrelaciones entre las familias comuneras, teniendo como resultado, para estas familias un “efecto comunidad”, es decir, un conjunto de beneficios económicos (productivo, ingresos y bienestar) superiores al de las familias campesinas individuales.

La racionalidad campesina estructura su capacidad de combinar actividades privadas y colectivas, para obtener mejores resultados. El uso privado de las tierras de cultivo durante el periodo agrícola y su uso colectivo para el pastoreo después de la cosecha, es un ejemplo de comportamiento. Sin embargo, ello no sería posible sin la existencia de la comunidad como institución económica que fija y hace cumplir las normas para el uso de recursos, tierras, pastos, agua u otra infraestructura. Dicha organización surge de la necesidad campesina de obtener

mejores y seguros resultados económicos para administrar los bienes públicos y para servir de seguro de supervivencia a través de mecanismos redistributivos.

La tabla 1, registra la existencia de 5.680 comunidades campesinas en el país, que agrupan en sus territorios a dos millones de personas, aproximadamente el 40% de la población rural total. También establece que existen 4.164 comunidades campesinas que cuentan con un título de propiedad y representan el 73.31% del total. El restante 26.69% aún no tiene título de propiedad debido a los vacíos dejados por el procedimiento de adjudicación de tierras en la Reforma Agraria y por el procedimiento de deslinde y titulación.

Tabla 1
Comunidades Campesinas del Perú y su estado de titulación

Comunidades campesinas	Con título		Sin título	
	Número	%	Número	%
5.680	4.164	73.31	1.516	26,69

Fuente: Democracia y ciudadanía, una visión desde las comunidades campesinas peruanas. De Rivera Alarcón y Eliana Lía.

Por otro lado, el debilitamiento de las comunidades campesinas en la actualidad comprende a la institución y a la identidad política comunal. Primeramente, consiste en la minimización de sus competencias y funciones estratégicas como institución territorial representativa y de concertación de los diversos grupos de interés de los comuneros(as) en la regulación del uso de los recursos naturales del territorio comunal, de la defensa de los derechos de las familias comuneras ante terceros y de la defensa de la integridad territorial frente al Estado. Por otra parte, consiste en la creciente sustitución de la identidad comunal histórica territorial por una identidad funcional rural urbana al interior de las comunidades y urbana rural, fuera de ellas, en los barrios o ciudades de las familias comuneras.

En el escenario territorial comunal se puede aún constatar lo que Portugal (1999) ya describía en los años ochenta: existencia de conflictos entre autoridades del poder nacional y las comunidades, especialmente por la jurisdicción de sus funciones; creando esferas de acción, limitada a los intereses de los agentes, que por su actividad no coordinada crean confusión, conflictos y desorden en la vida institucional de la comunidad, deteriorando el sistema de autoridad comunal en perjuicio del ordenamiento general y la posibilidad de un desarrollo armónico e integral.

Entre las demandas características que sostenían y sostienen la movilización de las comunidades campesinas, es la defensa de la tierra comunal; sin embargo ya desde el siglo XIX hasta la actualidad, casi la totalidad de tierra agrícola ha sido parcelada privadamente y forma parte de un semi-mercado.

Uno de los factores que determinan la vulnerabilidad del territorio de las comunidades campesinas, se deriva del debilitamiento del marco legal de nuestra nación, a partir de la Constitución de 1993 que elimina parcialmente el régimen protector de las anteriores, desde 1920. Adicionalmente, con la aprobación y promulgación de la Ley de Promoción de las inversiones en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas en 1995 y de la Ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, se terminó por fortalecer las tentativas de privatización individual de la tierra comunal (internamente o como objeto de venta a terceros, con menor restricción en la costa y con mayor restricción en la sierra).

En el proceso evolutivo de la privatización de las tierras comunales se han entretejido diferentes tipos de argumentos como, denominar a las tierras comunales de la costa como “eriazas”, a las que se caracteriza como tierras con déficit de agua, en buena parte son tierras con aptitud agrícola que tienen acuíferos explotables – o potenciales proyectos de irrigación financiables – y adecuados para sistemas de riego presurizado; por eso mismo es que son apetecibles de inversión

agro-exportadora en los climas atractivos de la costa norte y sur. Por lo que bajo la calificación de tierras abandonadas, el Estado pretende confiscar las tierras pertenecientes a las comunidades campesinas.

En ese marco, las comunidades campesinas afectadas o potencialmente afectadas, en alianza con los centros poblados e instituciones urbanas, han reactivado frentes de defensas del territorio, medio ambiente y de la vida. En un contexto en que la política económica y tributaria nacional privilegia los intereses del capital transnacional, funcionales a una visión estatal cortoplacista y discriminadora de los intereses rural y regionales.

2.1.2. Las Comunidades Campesinas en la región Lambayeque

Desglosando una mirada desde los espacios locales e incluso regionales, las comunidades campesinas no son en absoluto invisibles, forman parte de la vida cotidiana de las zonas rurales y, de alguna forma, de las preocupaciones de desarrollo de las autoridades locales. En estos espacios, las comunidades son un agente relevante aunque no siempre bien articulado o posicionado en el marco de las políticas y decisiones sobre la inversión pública y el desarrollo local.

En la región Lambayeque, la invisibilidad de las comunidades campesinas se hace redundante al contrastar la realidad contextual en que se desarrolla sus condiciones sociales de vida; determinados, en gran medida, por caracteres de marginalidad y vulnerabilidad. De igual forma, su presencia se reduce a un falso reconocimiento de la existencia de poblaciones que mantienen características ancestrales; tanto por la sociedad civil como organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales y académicos sociales.

En la actualidad se registra 26 comunidades campesinas oficialmente reconocidas; siendo 16 reconocidas mediante decreto supremo y 10 mediante resoluciones directorales expedidos por la Dirección Regional Agraria de

Lambayeque (Tabla 2). Bajo este escenario, se ha descrito una fragmentación entre comunidades, hay quienes se identifican con características auténticamente originarias o ancestrales de un Perú antiguo y otras que se denominan como contemporáneas o nuevas. Diferenciación que se origina en la promulgación de la Ley 24657, donde se otorga facultades de reconocimiento oficial de comunidades campesinas a las instancias regionales del Ministerio de Agricultura y con lo cual se hizo más fácil el proceso de inscripción de las mismas.

Entre las diferencias geográficas, se puede graficar la ubicación de comunidades campesinas en la costa y sierra de Lambayeque. Las primeras se encuentran dispersas en la mayoría de los distritos costeros mientras que los últimos se encuentran concentrados en los distritos de Cañaris, Inkawasi y Salas.

Las problemáticas que caracterizan a las comunidades campesinas de la costa y de la sierra de Lambayeque giran en relación a la posesión de las tierras comunales; especialmente procesos de confiscación, usurpación y negociación de las tierras y recursos naturales de las comunidades, realizadas y promovidas por el Estado Nacional, Gobierno Regional, COFOPRI, SUNARP, por proyectos de desarrollo como PEOT y PEJEZA y por autoridades corruptas de las propias comunidades; la conflictividad social que se genera por la intervención de empresas mineras que no están tomando en cuenta las costumbres, prácticas y derechos de las comunidades campesinas; procesos fraudulentos de algunas directivas comunales para facilitar la negociación de las tierras comunales; obstaculización de la SUNARP para inscribir las directivas comunales y darles su personería jurídica que necesitan para la ejecución de sus funciones en los diferentes niveles de gobierno; desplazamiento forzado de comunidades campesinas por la ejecución de grandes proyectos de irrigación y que podrían ampliarse con la explotación de recursos minerales. Adicionalmente, los comuneros ven limitada su actividad agropecuaria por la escasez de agua debido a su ubicación a los bordes de los principales valles de la región.

Tabla 2
Comunidades Campesinas de Lambayeque

N°	NOMBRE DE LA COMUNIDAD	DISTRITO	DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO
PROVINCIA DE CHICLAYO			
1	Santa Catalina de Chongoyape	Chongoyape	Resolución Suprema
2	San Pedro de Nolasco de Lagunas	Lagunas	Resolución Suprema
3	San Francisco de Mocupe	Mocupe	Resolución Suprema
4	San Pedro de Monsefú	Monsefú	Resolución Suprema
5	San Martín de Reque	Reque	Resolución Suprema
6	Santa Rosa	Santa Rosa	Resolución Suprema
PROVINCIA DE FERREÑAFE			
7	San Juan de Cañaris	Cañaris	Resolución Suprema
8	San Pablo de Incahuasi	Incahuasi	Resolución Suprema
9	Santa Lucía de Ferreñafe	Ferreñafe	Resolución Suprema
10	Tupac Amaru II de Chiñama	Cañaris	Resolución Directorial
11	Micaela Bastidas de Moyán	Incahuasi	Resolución Directorial
12	San Martín de Porras - Atumpampa	Incahuasi	Resolución Directorial
13	San Antonio de Laquipampa	Incahuasi	Resolución Directorial
14	Manuel Arévalo Cáceres	Pitipo	Resolución Directorial
15	San Isidro Labrador de Marayhuaca	Incahuasi	Resolución Directorial
16	José Carlos Mariátegui	Incahuasi	Resolución Directorial
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE			
17	San Pedro de Mórrope	Mórrope	Resolución Suprema
18	San Julián de Motupe	Motupe	Resolución Suprema
19	Tongorrape	Motupe	Resolución Suprema
20	Santo Domingo de Olmos	Olmos	Resolución Suprema
21	San Mateo de Penachi	Salas	Resolución Suprema
22	San Francisco de Asis	Salas	Resolución Suprema
23	San José	San José	Resolución Suprema
24	San Pedro de Chóchope	Chóchope	Resolución Directorial
25	Virgen Purísima Concepción	Jayanca	Resolución Directorial
26	Santa Rosa de las Salinas	Túcume	Resolución Directorial

2.1.3. Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos

a. Historia

Fuentes históricas señalan que cuando el Inca Huayna Cápac, aseguró la conquista de la zona norte del Perú, todos los pobladores de los Valles Tucmí, Xayanca, Motupi, y otros se sometieron pacíficamente a sus disposiciones, recibiendo a cambio los beneficios de la legislación incaica y con ella los caminos y canales que los pusieron en comunicación con el resto del Tahuantinsuyo.

A la llegada de los conquistadores españoles, a territorios olmanos, ya existían en estas zonas señoríos organizados políticamente en ayllus, muchos de los cuales tenían su propio dialecto. Ayllu como Guambra, Santovélico, Catón y Copiz se habían adelantado a otros aledaños en cuanto a manejo de técnicas de riego agrícola, habiéndose asentado en una buena extensión territorial de Olmos antiguo.

Familias conocidas como Chimpén, Chapilliquén, Serquén, Mio, Pupuche, Monja, Soplapuco, Arroyo, Serrato, entre otros, poblaban zonas fértiles y ricas en pastos naturales y manantiales en Ñazpe (Ñaupe), Lapilcapuc (La Pilca), Ysincape (Sincape), Puquio, Filoque y Cutirrape.

La fundación del pueblo de Santo Domingo, se produce en el tiempo de la colonia siendo Virrey del Perú, Don Francisco de Toledo. Al asumir su gobierno en 1569, dispuso a través de ordenanzas, que los indios residentes en lugares apartados tanto de la costa como de la sierra, se agrupen en una determinada zona. A esta concentración de indios, se les denominó “reducciones” y cuyo propósito era el de facilitar el cobro de tributos, así como efectuar labores de evangelización a los naturales.

En la jurisdicción olmana, existían grupos indígenas distribuidos en ayllus o parcialidades como les llamaban los españoles. Precisamente, a raíz de las

disposiciones virreinales, es que se ordena a los pobladores de las zonas de Copiz, Olmos y Santovélico agruparse en un solo pueblo que debía llamarse Santo Domingo de Olmos. La ordenanza se dio en Motupe, el martes 27 de junio de 1573, suscrita por el visitador español don Bernardino de Loayza.

Como era de conocimiento, las leyes de indios amparaban la propiedad indígena y reconocían la organización comunal. La legislación colonial, trató en lo posible de no atacar la institución, ni las costumbres de sus habitantes. Es en esas circunstancias que el Virrey Toledo, a través de un dispositivo, confirmó la posesión y propiedad a los indios de Santo Domingo de Olmos, el 13 de abril de 1578, incluyendo sus manantiales que mantenían desde tiempos inmemorables.

b. Recursos geográficos

Pertenece a la provincia de Olmos y departamento de Lambayeque. Comprende en su territorio dos sectores geográficamente diferenciados: hacia el oeste ocupando poco más de 90 por ciento del territorio, se observa gran parte de la planicie costera del departamento y hacia el este las estribaciones de la Cordillera de Los Andes. La primera comprende en gran parte de los desiertos costeros, el bosque seco de llanura y áreas dedicadas a la agricultura intensiva, donde se localizan los centros de producción agrícola y agroindustrial más importante de la comunidad.

Abarca una extensión de 895,440 hectáreas cuadradas, la cual representa el 57 por ciento de la Provincia de Lambayeque y el 38 por ciento del Departamento de Lambayeque. Olmos es predominantemente rural, siendo el área urbana apenas el 0.04 por ciento del área total.

El distrito de Olmos cuenta con 11 centros poblados menores, 4 pueblos jóvenes, 3 urbanizaciones, 1 asentamiento humano y 173 caseríos. Sin embargo de acuerdo a la nueva normatividad los centros poblados reconocidos por la

Municipalidad Provincial de Lambayeque son Mocache, El Pueblito, Insculas, Ñaupe, El puente, Corral de Arena, Capillán Central, La Estancia, Querpón, El Virrey, Calera Santa Isabela (Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Lambayeque 2011-2021).

c. Demografía.

Dentro del distrito de Olmos, se ha registrado una población total de 36,595 de habitantes; siendo el 18,440 de habitantes hombres y 18,155 mujeres. Además, cuenta con una tasa de crecimiento de 1.16 y una densidad poblacional de 6.9.

TABLA 3
Distribución de la población de Olmos

Códigos	Área urbana	Área rural	Sexo hombre	Sexo mujer	Total
Total de habitantes	9 807	26 788	18 440	18 155	36 595

Fuente: INEI, censo 2007.

2.1.3.1. Centro poblado La Algodonera

Se encuentra ubicado hacia el Sur-Oeste de la ciudad de Olmos, cercano al vértice “F” de la poligonal del Proyecto Olmos, perteneciente al Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque, aproximadamente a unos 28 kilómetros de la ciudad de Olmos.

El predio se encuentra dentro del perímetro matriz Lote N° 3 – Remanente N° 4 inscrito en la en la Partida N° 1114513 de la SUNARP – Zona Registral N° II Sede Chiclayo, a favor del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), con una extensión superficial de un área de 10.5403 Ha.

Entre la infraestructura construida, destaca 30 módulos de vivienda, un centro educativo (I.E. Ricardo Palma.), red de agua y alcantarillado (biodigestores), local comunal y pozo tubular.

Su construcción urbanística corresponde como parte del Programa de Compensación y Relocalización Involuntario (PCRI), elaborado por el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) para el saneamiento físico legal de las 38,000 ha de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos. Los pobladores afectados por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario y que constituyen el centro poblado mencionado, pertenecen a los caseríos de La Algodonera, Pan de Azúcar, Vinguar Grande y Abrigos de Pañala.

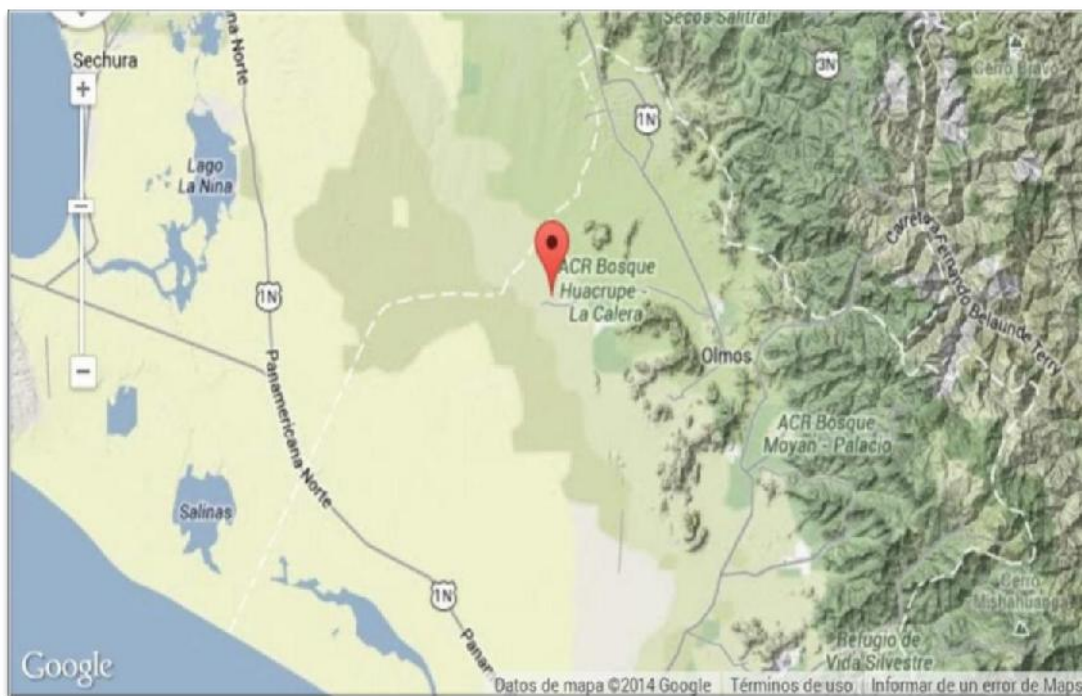


Figura 1. Ubicación geográfica del Centro Poblado La Algodonera

Hasta el momento de la investigación, está conformada por 37 jefes de familia, 31 parejas de esposos y 89 hijos(as) menores; resultando una población total de 157 personas.

Tabla 4
Comuneros desplazados y reasentados en La Algodonera

N°	COMUNEROS POSESIONARIOS	SECTOR
1	Ursinio Asencio Tineo y Orfelinda Cobos Berna	La Algodonera
2	José Manuel Barrios Cruz y Natalia Crisanto Cusque	
3	Félix Riojas Ferroñán y Teresa Sánchez de Riojas	
4	Felipe Barrios Flores	
5	Héctor Augusto Montalván Mio	
6	Alejandro Riojas Ferroñán	
7	Proceso Inoñán Ventura y María Rosa Sandoval Santistebán	Abrigos de Pañala
8	Alberto Inoñán Ventura y Eulogia Ventura Coronado	
9	Francisco Inoñán Ventura y Paulo Llontop Inoñán	
10	Rómulo Inoñán Inoñán	
11	Orlando Inoñán Ventura y Rosa Nelly Cajusol Santisteban	
12	Modesto Monja Soplapuco y Elida More Orda	
13	Natividad Bances Ventura y Plácida Cajusol Llauce	
14	José del Carmen Bances Ventura y Asunciona Martínez Montalván	
15	Pablo Bances Cajusol y Sacramento Acosta Inoñán	
16	Alberto Rázuri León	
17	Gabriel Inoñán Valdera	
18	Pablo Sánchez More	Azúcar
19	Luciano Mio Pupuche y Reydelinda Peña Córdova Pan de	
20	Juan Alberto Valladares Santa María	
21	Juan Elís Mio Chunga e Irene Monja Arroyo	

22	Pedro Pablo Monja Soplapuco y Yolanda Arroyo More	
23	Juan Monja Arroyo y Eufemia Barrios Ascencio	
24	Narciso More Monja y Rosa Cruz Roque	
25	Félix Monja More	
26	Domingo More Monja	
27	Vicenta Monja Soplapuco	
28	María Julia Chunga Mio	
29	José Domingo Mio Pupuche e Isabel Sánchez Benites	
30	Ceferino Sánchez Monja y Adelaida Benites Monja	
31	Julio Cobeñas Mayanga	
32	Ramos Cobeñas Mayanga	
33	Luis Cobeñas Arroyo	
34	María Adelaida Sánchez Benites	
35	Santos Inoñán Santamaría	
36	Juana Rosa Odar More	
37	Arturo Cobeña Mayanga y Rumalda More Odar	Vinguar
38	Hipólito Sánchez More y Alejandrina Pasos Hernández	Grande
39	Julio Nunura Benites y Violeta More Sánchez	

Las familias residentes del centro poblado “La Algodonera” forman parte de una evolución histórica que describe los escenarios del hábita rural de las comunidades campesinas del norte del Perú. Entre sus características particulares, que ayudan al entendimiento del objeto de investigación, se describen en los siguientes apartados.

a. Formas de convivencia.

Diferentes científicos sociales han descrito en sus investigaciones las formas como los pobladores del antiguo Perú convivían; entre ellas resalta, en aspectos

generales, el término de “poblaciones dispersas”. Característica determinada por factores geográficos, ambientales, productivos, costumbres, entre otros.

Los comuneros de Vinguar Grande, Abrigos de Pañala, La Algodonera y Pan de Azúcar vivían en forma disgregada entre ellos. En la mayoría de los casos, se caracterizaba por pequeñas concentraciones de personas con parentesco familiar que los separaba de otras por medio o un kilómetro de distancia; y a la vez, mantenían un mismo punto de unión e interacción entre las familias, las norias. Igualmente, los caseríos se separaban por áreas de pastoreo que tienen una amplitud de 100 ha.

Según lo señalado por los entrevistados, la condición de vivir dispersos y alejados de determinados centros poblados ha contribuido a generar estados relativos de tranquilidad y libertad en los comuneros. Sin embargo, es evidente que su dispersión y relativo aislamiento ha limitado al Estado a cumplir con satisfacer las necesidades básicas de educación, salud, agua y desagüe y programas de asistencia social; lo cual, contribuye a un estado de marginalidad y vulnerabilidad según la perspectiva de algunos estándares de desarrollo humano.

Por otro lado, las familias desplazadas y reasentadas en La Algodonera se agrupaban alrededor de las viviendas de los familiares más ancianos o viejos, en tanto que estos, suelen proporcionar los terrenos donde su descendencia irá a convivir y formar su propia familia y, además, permite que estos tengan acceso a uno de los recursos esenciales para sobrevivir en el medio, el agua, por medio de las norias.

Entendiendo que la población afectada por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario se ha desarrollado en el ámbito de la zona rural, se deduce y corrobora que el tipo de familia característica de la población es, mayoritariamente, las familias extensas. Es decir, en un determinado espacio geográfico, perteneciente a un solo posesionario, se puede ubicar a más de una

familia nuclear que interaccionan entre ellos para lograr un mismo nivel de desarrollo.

Los hombres o jefes de hogar se encargan, regularmente, de las actividades productivas; como es la ganadería y la agricultura en pequeña escala. Todos los días madrugan para llevar el ganado a pastear, mientras las mujeres hacen limpieza a los corrales de los animales, de la casa y cuidan de los hijos. Las hijas menores o madres se encargan de hacer el desayuno para que los hijos menores lleven los alimentos al lugar donde se encuentran los jefes de hogar pasteando a los animales. De igual forma, los hijos hombres menores se encargan de cortar leña para las actividades culinarias del hogar y en cuando tienen una edad determinada, acompañan a sus padres en el trabajo de campo; y las hijas se encargan de ayudar a la madre en actividades como cuidado de los hijos menores y/o de los más ancianos, limpieza del hogar y en el cuidado de las huertas familiares.

Las familias comuneras se prestaban ayuda de diferentes maneras; entre ellas, en el cuidado del ganado. Cuando alguna familia perdía parte de su ganado, las familias vecinas ayudan en la búsqueda de los mismos hasta que sean encontrados; compartían el agua que generaba las pocas norias existentes, tanto para el consumo humano como para el ganado; compartían las zonas de pastoreo; sus medios de transporte para movilizarse a la ciudad y comprar sus alimentos o para transportar al algún enfermo; se ayudaban en la construcción de las viviendas, de las norias, cercos perimétricos y corrales.

Los hombres y las mujeres tenían roles importantes en la comunidad, se complementaban unos entre otros; haciendo de la convivencia una estructura de actividades compartidas que se determinaba a las condiciones sociales de vida. Características socio-culturales reconocidos históricamente e instruidas a las generaciones próximas; con la intención de proporcionar los instrumentos necesarios para sobrevivir.

b. Nivel de instrucción

Entre las particularidades de las poblaciones que ahora habitan en el centro urbano La Algodonera, se pudo constatar que el nivel de instrucción de los jefes de familias es extremadamente bajo. Del total de encuestados, sólo el 9% logró concluir satisfactoriamente su secundaria y el 61% no tiene grado de instrucción secundario. En el caso de las mujeres encuestadas, el 50% no cuenta con grado de instrucción y el 25% no culminó su primaria; deduciendo que el mayor nivel de analfabetismo se encuentra en el género femenino (Tabla 5).

Tabla 5
Grado de instrucción educativa

CÓDIGO	HOMBRES		MUJERES		TOTAL	
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
No cuenta con grado de instrucción ²		11	2	50	4	17
Con primaria incompleta 9		47	1	25	10	44
Con primaria completa 6		32	1	25	7	30
Secundaria completa 2		11	0	0	2	9
Total 19		100	4	100	23	100

Esto se debe a los niveles de priorización de los comuneros en el desarrollo cotidiano de sus vidas; en donde, se prioriza las actividades relacionadas a la producción de corto plazo. Para su entender, la educación no es un instrumento de desarrollo para sus condiciones sociales de vida inmediatas y, por lo cual, no debe tener una priorización importante. Sin embargo, se cree que son los hombres quienes deben de tener una mayor formación educativa en comparación con las mujeres, entendiendo a los hombres como agentes de mayor producción y que

tienden a relacionarse externamente a la comunidad y a las mujeres, agentes que desarrollan actividades internas a la comunidad y de menor importancia.

Por otro lado, otro elemento a considerar son los medios que se requieren para acceder al servicio de educación. El vivir en zonas alejadas requiere de un costo económico importante para poder llegar a los centros educativos; además, el exponerse a los peligros de transitar por campos extensos, desolados y oscuros.

c. Características de las viviendas

Las características estructurales de las viviendas han sido esencialmente rústicas, construidas con materiales y recursos que se encuentran en lugares cercanos al ámbito de desarrollo. Entre ellos destaca el uso de parantes, vigas, umbreras y marcos de madera de algarrobo, utilizado como estructura de soporte para las viviendas. Las paredes se constituyen por hileras de varillas amarradas con soguillas o con alambres y fijas a los parantes y las vigas. De igual forma, el techo se construye con calaminas o material sintético.

El compartimiento de las viviendas se compone básicamente por dormitorios y sala comedor, adheridos en espacios conexos a la cocina, cuartos para los instrumentos de trabajo y los corrales para la crianza de aves menores; en espacios más lejanos se encuentran los corrales para el ganado y la noria que abastece de agua a las familias. Formando de esta manera, una estructura amplia en donde se desenvuelve la convivencia familiar.

d. Actividad productiva ganadera.

Desde los primeros comuneros que poblaron las zonas de Olmos y Mórrope, han tenido como principal actividad productiva la crianza de ganado caprino y vacuno, como recursos que sirven para satisfacer las necesidades familiares. La realidad pasada no está disociada de la realidad productiva de los comuneros actualmente desplazados y reasentados involuntariamente. Una de sus principales actividades productoras es la crianza de ganado caprino.

Tabla 6
Comuneros dedicados a la actividad ganadera

Código	Hombres		Mujeres		Total	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Con ganado	18	95	3	75	21	92
Sin ganado	1	5	1	25	2	8
Total	100	100	100	100	100	100

Como se observa en la Tabla 6, el 92% de los comuneros se dedicaba a la crianza de ganado caprino y solo un 8% no era compatible con esta actividad. La importante representación numérica de éste dinamismo se debe al conocimiento práctico que tienen los comuneros en la conservación y reproducción del ganado, los recursos que su ámbito natural les proporciona, las condiciones fisiológicas de la especie para vivir en la zona y la tradición del trabajo familiar.

El ganado por tradición es herencia familiar; es decir, los padres o abuelos obsequian parte de su ganado a los hijos (as), desde que estos son pequeños, para que asimilen las actividades relacionadas a producción ganadera. Cuanto los

hijos alcanzan su adultez y forman su familia, llevan consigo su ganado como instrumento de sustento familiar y, con ello, reproducen su principal actividad productiva.

De igual forma, se demuestra que alrededor del 30% de la población encuestada ha poseído entre 201 a 344 unidades de ganado caprino y el 26% entre 101 a 200 unidades. Lo cual, corrobora la importancia de la actividad ganadera en los comuneros antes de ser desplazados y reubicados en el centro poblado de La Algodonera.

Tabla 7
Cantidad de ganado que se poseía

CÓDIGO	FRECUENCIA	%
0-50	7	30
51-100	3	13
101-150	4	17
151-200	2	9
201-344	7	30
Total	23	100

La actividad ganadera genera subproductos que los comuneros comercializan y consumen; entre ellas, se encuentra la leche, cuajada y el cuero de los animales. Productos y subproductos comercializados, en un 78,3%, por los comuneros en los mercados de Olmos y, el 17,4%, en la ciudad de Chiclayo. Proporcionando recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades, según las declaración de los comuneros.

e. Actividad productiva de carbón.

Es natural que la extracción de leña sea una actividad habitual en las comunidades campesinas; teniendo en cuenta que, es su principal recurso natural generador de fuego para la cocción de sus alimentos. Sin embargo, se ha adherido a su extracción, la comercialización de la leña en forma de carbón; lo cual, ha estado generando deforestación del hábitat, recurso principal para el sustento de su primordial actividad productiva, la ganadería.

La producción y comercialización de carbón es una actividad productiva secundaria en los comuneros; en donde, toma relevancia en épocas de escases del pasto para la producción ganadera, a consecuencia de la falta de lluvia en la zona. Además de ser una actividad no muy rentable para su producción; entendiendo que la ganancia por producir cincuenta kilos de carbón genera un promedio de diez soles y por ser una actividad ilegal, lo producido puede ser incautado sin generar las ganancias.

2.1.4. Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos

2.1.4.1. Referente histórico

El Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos es la propuesta final de diferentes aportes técnicos; entre ellos se destaca, inicialmente, del Ing. Charles Sutton que propuso el Proyecto de Olmos y, posteriormente, de Manuel Mesones, Antúnez de Mayolo y Lisandro Mercado con el aporte del trasvase de las aguas del río Huancabamba de la vertiente del Atlántico a la del Pacífico y el factor energético. Sus inicios se remontan a 1924, durante el gobierno del presidente Leguía.

En los diferentes gobiernos siguientes el proyecto fue reiteradamente pospuesto a causa de diferentes factores, especialmente económico. Sin embargo,

durante el gobierno de Alberto Fujimori se determina que la inversión privada sería el factor concluyente para la ejecución del proyecto; para lo cual, se condiciona que las tierras a irrigar serían privadas, pero su obstáculo se encontraba en que el extenso territorio a irrigar pertenecía a la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos. Con el fin de ejecutar el proyecto desde la inversión privada, en 1998, el gobierno trata de negociar con los directivos comunales para que les cediera 60 mil ha. A cambio de regularizar sus títulos de propiedad y la devolución de 12 mil ha irrigadas, pero al recibir una respuesta negativa, mediante Decreto Supremo 01-99-AG se confisca 111, 656 ha de tierras de la comunidad, bajo el argumento de ser tierras eriazas.

Además, se inicia una modificación del marco legal para adecuar la incorporación de la inversión privada en diferentes áreas, programas o proyectos de desarrollo. Específicamente, con el Decreto Legislativo 674, Ley de Promoción de la Inversión en las Empresas del Estado, se declara de interés nacional la promoción de la inversión privada.

Por último, durante el gobierno de Alejandro Toledo y como presidente de la región de Lambayeque Yehude Simon, el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos se puso en concurso público internacional. El 22 de Julio del 2004 el Gobierno Regional de Lambayeque suscribió el Contrato de Concesión para el componente de Transvase con la empresa Concesionaria Transvase Olmos. Seis años después, el 11 de junio del 2010, con la representación del presidente Alan García Pérez y la presidenta de la región Nery Saldarriaga, se firma el contrato de Concesión con H2Olmos S.A. para el componente de irrigación del proyecto.

2.1.4.2. Componentes del proyecto

En los objetivos principales del Proyecto Olmos, como también es llamado, se le caracteriza como el factor que convertirá a la Región de Lambayeque en un nuevo polo de desarrollo económico basado en una primera fase, en el crecimiento

agroexportador por la incorporación de 43,500 hectáreas de tierra a las fronteras agrícolas. Para lo cual, se diseña estratégicamente tres componentes para la ejecución del proyecto y son los siguientes.

2.1.4.2.1. Transvase del agua.

Se trata de trasladar las aguas del río Huancabamba hacia Olmos, mediante un túnel trasandino que tiene 19.4 km y un diámetro de 4.8 m, así como la construcción de un Embalse (Represa Limón). Durante el mes de junio del 2003, se inició el proceso de concesión para la primera fase; es decir, la edificación del túnel trasandino y otras obras para trasvasar las aguas del río Huancabamba. Posteriormente, el 22 de julio del 2004 el Gobierno Peruano por medio del Gobierno Regional de Lambayeque se suscribe el Contrato de Concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de Trasvase del Proyecto Olmos con la empresa Concesionaria Trasvase Olmos S.A.- CTO y constructora Norberto Odebrecht S.A (CNO); siendo ambas parte del Grupo Económico Odebrecht, de procedencia Brasileña.

En el mes de diciembre del 2004 se aprobó la Ley 28453, Ley de Expropiación de las áreas de terrenos para la ejecución de las obras de la primera etapa del proyecto; y la ley 2854, Ley que precisa la Denominación e Incorporación al Dominio del Estado, las áreas donde se construirá las obras del Proyecto Olmos.

Por otro lado, el 22 de marzo del 2006, el concedente y el concesionario suscribieron el Acta de Entrega de Control del Proyecto con lo cual el 23 de marzo del mismo año se dio inicio al plazo de 48 meses para la ejecución de las obras. Entre las obras que la concesionaria está obligada a cumplir en el proceso de ejecución del proyecto, son: Túnel trasandino, La Presa Limón, La bocatoma temporal, La bocatoma definitiva, El túnel de desvío, El aliviadero, La purga y otras obras menores.

2.1.4.2.2. Centrales Hidroeléctricas

Esta fase la constituye la construcción de dos centrales hidroeléctricas que funcionarían con el agua trasvasada del río Huancabamba, con una proyección energética de 5,000 Gwh anuales. Para el Comité de Grandes Proyectos de Lambayeque, esto permitiría el equilibrio del sistema energético del país, pues se estaría hablando de una capacidad igual de producción energética de la hidroeléctrica del río Mantaro que beneficia a todo el país. Los recursos hídricos provienen de cuatro afluentes de los ríos Tabaconas y Manchara, tributarias del río Huancabamba en sus recursos bajos, aguas abajo del eje Limón (Yerma, Cañariaco, Quismache y Chorro).

2.1.4.2.3. Proyecto de Irrigación del Valle de Olmos

El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) ha delimitado un terreno total de 114 mil hectáreas destinadas a la ampliación de la frontera agrícola de la región de la Lambayeque. Dividiendo el proceso en dos etapas, la primera se ha establecido un área de 38 mil hectáreas que han sido subastadas y vendidas mediante de una subasta internacional en dos fases. Posteriormente la implementación de las áreas a ser irrigadas mediante infraestructura. Adicionalmente, se indica que se beneficiará con 5000 hectáreas del Valle Viejo de Olmos para el dominio de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos distrito Olmos.

2.1.5. Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT)

En el escenario contextual de estudio se puede observar diferentes actores sociales que determinan el proceso natural del fenómeno en investigación. Entre ellas, a nivel nacional resalta la participación del Ministerio de Agricultura al ser

quien proporciona los recursos económicos para el saneamiento físico-legal de las hectáreas subastadas. A nivel regional, el agente social importante a mencionar, es el Proyecto Especial Olmos Tinajones; quien resalta en el estudio por ser quien ha diseñado, planificado y ejecutado el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), desde el 4 de julio del 2003 es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque (GRL), constituye una Unidad Ejecutora Presupuestal que cuenta con autonomía de gestión: técnica, económica, financiera y administrativa. Es responsable de la supervisión, ejecución, mantenimiento y operación de las obras de infraestructura que componen el proyecto de irrigación.

El PEOT depende jerárquica y funcionalmente de la Presidencia del Gobierno Regional, y está representado por un Consejo Directivo liderado por un Presidente designado por el mismo Presidente Regional. Entre los objetivos generales resaltan los siguientes:

- a.** Elaborar proyectos de desarrollo sostenible, que comprendan la elaboración de estudios, ejecución y supervisión de obras de los sistemas hidro-energético y de irrigación en el ámbito de la Región Lambayeque, con el objeto de trasvasar aguas de la vertiente del Atlántico a la vertiente del Pacífico; regularlas, aprovecharlas energéticamente y distribuir las en los valles de influencia como Cascajal, Olmos, Motupe, La leche, Chancay – Lambayeque y Zaña, implantando nuevas tecnologías para su manejo, control y supervisión. Articular los beneficios provenientes de la operación de los sistemas de irrigación con portafolios o bancos de proyectos agros industriales y de agro exportación en su zona de influencia.
- b.** Realizar directamente, vía concesión o mediante convenios los trabajos de operación y mantenimiento, de las obras de trasvase, regulación, riego y

drenaje de los sistemas Olmos y Tinajones y efectuar directa o indirectamente las actividades de control y supervisión de dichos trabajos para una mejor administración de los recursos hídricos bajo cualquier modalidad que garantice eficiencia y rentabilidad.

- c. Contribuir, apoyar y promover el desarrollo armónico e integral de las áreas seleccionadas en el ámbito de su jurisdicción, y otras que le encarguen el Gobierno Regional de Lambayeque.

Por otro lado, con la Ordenanza Regional N° 02006-GR-LAM/CR, el Gobierno Regional de Lambayeque autorizó al PEOT la implementación y ejecución de un Plan de Compensación y Relocalización Involuntario (PCRI), para las personas que ocupan los predios inmuebles urbanos y rurales donde se ejecuta la subasta de 38.000 hectáreas, como primera etapa del proyecto.

En consecuencia, de conformidad con las normas, el PEOT está facultado para realizar el saneamiento físico legal de las tierras que están dentro de influencia del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, para ello dicha entidad deberá realizar dentro del marco legal vigente las acciones necesarias a fin de cumplir con recuperar las tierras que por Ley N°212 le corresponde al Estado, con el objetivo de llevar a cabo la subasta pública de las tierras del Proyecto señalado.

2.1.6. Los desplazados y reasentados involuntariamente de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos

2.1.6.1. Plan de Compensación y Relocalización Involuntario (PCRI)

La Ordenanza Regional N° 026/2006-GR-LAMB/CR establece que para la ejecución del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, se requerirá afectar

los predios inmuebles urbanos y rurales de pobladores, que usualmente radican en la zona de influencia del Proyecto; en la mayor parte de los casos, se alterarán formas de vida, vivienda, trabajo, relaciones sociales como son la familia, la educación primaria y secundaria, prácticas religiosas y culturales, entre otros, por tanto resulta necesario la implementación y ejecución de un Plan de Compensación y Relocalización Involuntario (PCRI) que permita mitigar los efectos negativos del impacto social del Proyecto, el mismo que debe constituir una oportunidad de desarrollo.

Que, según información obtenida en campo por el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), se ha logrado identificar el número de predios inmuebles urbanos y rurales que se encuentran en la zona de influencia del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, así como se ha identificado a la población que será beneficiada con el PCRI (Tabla 8).

Se señala que en tal sentido resulta necesario establecer los lineamientos o directrices para la elaboración y aplicación de Planes de Compensación y Relocalización Involuntario en la ejecución del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, a ser ejecutado por el PEOT y que tengan como fin asegurar que la población afectada por la realización de la mencionada Obra reciba una compensación justa y soluciones adecuadas a la situación generada por ésta, incluyendo recomendaciones de cómo deberá manejarse desde las primeras etapas de la preparación del proyecto, vale decir, desde la etapa de Estudio de Factibilidad y en el Estudio Definitivo, las soluciones a los diversos problemas de la población objetiva; previniendo los costos y los plazos que se requerirán. En efecto, la realización de obras de infraestructura y de servicios públicos, como el Proyecto Olmos, en sus etapas de operación, generarán impactos favorables a la población dentro y fuera de su ámbito de influencia, en el periodo de construcción se producirán efectos negativos de no tomarse las medidas pertinentes, a fin de compensar a las personas que se verán obligadas a abandonar sus viviendas y predios; y, cuyo daños o perjuicios no sea cubiertos por la indemnización

justipreciada y la compensación a que hace referencia la Ley N° 27117 “Ley General de Expropiaciones”.

Tabla 8
Número de predios inmuebles pertenecientes a la zona de influencia del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT)

PRIMERA ETAPA	N° DE PROPIETARIOS Y/O POSESIONARIOS	N° DE PREDIOS URBANOS Y RURALES
Primera Fase/1° Concesión Presa Limón - Canteras - Obras Conexas		
Embalse Limón / Area de inundación	52	79
Sub total	165	345
	217	424
Segunda Fase - I / 2° Concesión Central(es) Hidroeléctrica(s)		
Segunda Fase - II / 3° Concesión Emblase Olmos		
Conducto Central de Riego	56	66
Sub Total	33	39
	89	105
TOTAL	401	536

La Ordenanza Regional plantea alternativas de solución, a fin de lograr revertir los perjuicios que se ocasionarían por la ejecución del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, de tal manera que la situación socioeconómica “con ejecución de obra” de la población, sea similar o mejor a la que tenía a la situación “sin ejecución de obra”. Para tal efecto, la presente norma contempla la implementación de un Programa de Compensación y/o Relocalización

Poblacional, basado en los siguientes principios:

- a. La ejecución de las Obras del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos debe evitar o minimizar la afectación de viviendas, predios agrícolas y otras infraestructuras públicas y privadas, así como la afectación de costumbres, creencias y prácticas sociales.
- b. Procurar por todos los medios, asegurar que los agentes sociales afectados sean debidamente indemnizados, propiciando mejorar sus condiciones socioeconómicas, así como promover actividades económicas que coadyuven a una mejora adecuada de sus ingresos.

2.1.6.1.1. Directrices para la elaboración y aplicación de Planes de Compensación y Relocalización Involuntario (PCRI) para el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos.

En el Título preliminar de los principios, objetivos y ámbito de aplicación se establecen los siguientes artículos:

Artículo I.- Principios

- I.1. Minimizar los desplazamientos de población** por los efectos que ello produce en la forma de vida de la población.
- I.2. Considerar la Relocalización como una oportunidad de desarrollo sostenible:** Las acciones deben dirigirse a la reposición física de las pérdidas, reconstitución de actividades agropecuarias, agrícolas y rehabilitación de las condiciones de vida de las familias afectadas.
- I.3. Isomería y Equidad Social:** Todas las familias afectadas por el proyecto independientemente de su condición legal, será objeto de programas de compensación, y/o reubicación y rehabilitación.

- I.4. Soluciones Diferenciadas:** el Plan de Compensación y Relocalización ofrecerá soluciones diferenciadas compatibles con los diferentes niveles de afectación y la diversidad socioeconómica de la población objetiva.
- I.5. Los planes de Relocalización deben tener en cuenta a la población de acogida:** Las comunidades de acogida que reciben a los desplazados deberán participar también en la planificación y ejecución del programa de Relocalización y se le ofrecerá asistencia para mejorar la integración de los dos grupos y reducir el riesgo de conflicto.
- I.6. Fecha de Corte:** Se establecerá una fecha de límite a partir de la cual no se considerará más afectados, normalmente coincide con el censo elaborado para identificar a las personas que tendrán derecho a compensación teniendo en cuenta y el cronograma del proyecto.
- I.7. Participación:** Se asegurará la participación de la población afectada en las diferentes fases del proyecto en lo que respecta a la Relocalización y la compensación a través de la organización de los Comités de Gestión Compartida.
- I.8. Derechos de la población afectada:** Se reconocen como derechos de la población afectada: (1) conocer su situación de afectación y los detalles relativos a la magnitud de la afectación; (2) tener saneado su derecho de propiedad de tal forma que pueda intervenir en el proceso de venta por trato directo y conocer los procedimientos relativos a la compensación por pérdida y a la reubicación y rehabilitación social; (3) diferir de los avalúos y tasaciones de sus bienes; y (4) recibir el pago por su predio y haberse reubicado antes del inicio de las obras.

- I.9. Garantía de Recursos:** Se debe contar con los recursos suficientes para cubrir los costos de compensación, reubicación, rehabilitación y administrativos.
- I.10. Articulación Interinstitucional:** La ejecución del PCRI requiere del trabajo conjunto de la Empresa Concesionaria Traspase Olmos S.A., el Gobierno Regional de Lambayeque o la entidad que lo represente y la coordinación interinstitucional entre varias entidades públicas COFOPRI, PETT, Superintendencia de Bienes Nacionales, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, CONATA., y demás instituciones públicas involucradas en la ejecución de dichas obras.
- I.11. Incluir el costo de Relocalización en el Presupuesto institucional del Proyecto Especial Olmos Tinajones:** La inclusión del costo de la implementación y ejecución de los PCRI, en el presupuesto del PEOT, resulta necesario para que dichos planes se lleven a cabo de forma coordinada con las actividades de construcción.

Artículo II.- Objetivos

II.1. Objetivo General

- Contribuir al Plan de Manejo Ambiental de la zona donde se ejecutará las Obras del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, entregado en concesión al sector privado a través del Contrato para la construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Traspase, celebrado con fecha 22 de Julio del año 2004 y modificado mediante un Primer y Segundo Addendum, a fin de mitigar los impactos ambientales negativos sobre la población afectada.

II.2. Objetivos Específicos

- a. Identificar y establecer las condiciones socioeconómicas actuales de los principales centros poblados que serán afectados, así como hacer referencia a las opiniones que tienen los afectados respecto de la ejecución de las Obras del Proyecto Olmos.
- b. Plantear las alternativas de restaurar y/o compensar las pérdidas de viviendas, terrenos de cultivo e infraestructura social de la población afectada, y su posible Relocalización en áreas adecuadas, para minimizar las alteraciones perjudiciales en sus modos de vida; considerando las oportunidades de trabajo que se puedan brindar, acceso a los recursos naturales y servicios públicos.
- c. Elaborar un presupuesto para compensar y/o reubicar a la población que será afectada por las futuras Obras, considerando cada una de las alternativas planteadas.

Artículo III.- Ámbito de Aplicación

El ámbito de aplicación de la presente Ley comprende a todos los pobladores que residen en las zonas que se encuentran en el ámbito de influencia de la ejecución del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, entregado en Concesión al Sector Privado conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 059-96-PCM y Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 060-96-PCM.

En relación **De los programas de compensación y relocalización involuntario**, se establece lo siguiente:

Artículo 1°.- Objetivo de la norma

El objetivo de la presente Ley es establecer la implementación de Planes de Compensación y Relocalización Involuntario en la ejecución del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, entregado en concesión al sector privado, que contempla Programas alternativos, orientados a proveer de sistemas alternativos de vivienda y satisfacción de necesidades básicas, así como proveer de medios alternativos que sean igualmente productivos, para que los pobladores afectados con la ejecución de las obras concesionadas puedan proseguir con su estilo de vida y productividad económica manteniendo un nivel similar o mejor al que dicha población lleva hasta antes de la ejecución de las obras.

Artículo 2°.- Acciones del Plan de Compensación y Relocalización involuntario (PCRI).

Las acciones para la ejecución e implementación de los Planes de Compensación y Relocalización Involuntario

- a. Se identificará la población directamente afectada, caracterizándola en los aspectos socio-económicos, calidad de vida y sus aspiraciones mediante un censo socio-económico.
- b. Compensar las pérdidas al costo total de reposición previo a su traslado actual.
- c. Asistir técnicamente en el traslado y apoyar a la población beneficiaria durante el periodo de transición en el sitio de Relocalización facilitando así su inserción en la población huésped.
- d. Asistir técnicamente a la población beneficiaria en sus esfuerzos por mejorar la capacidad de generar ingresos, los niveles de producción o por lo menos restablecerlos y mejorar su calidad de vida.
- e. Constituir el Comité de Gestión para estimular la participación de la comunidad afectada en la planificación e implementación de las soluciones planteadas. Se debe establecer normas de organización social apropiadas y las instituciones sociales y culturales de los afectados y de sus huéspedes deben ser apoyadas y utilizadas lo más posible.

- f. Calcular e incluir en el presupuesto institucional del PEOT todos los costos de compensación y/o Relocalización y rehabilitación.
- g. Será necesario involucrar con acciones específicas a la población de mujeres, ya que este grupo tiende a ser mayormente vulnerable.

Artículo 3°.- Programas del Plan de Compensación y Relocalización Involuntario (PCRI).

Para la aplicación del PCRI se deberán convertir las opciones trabajadas con la población afectada en Programas estructuradas. Los programas se ejecutarán en función de las condiciones de la población afectada y sus necesidades, para cuyo efecto se optará por:

3.1. Programa 1: Regularización de la Tenencia de la tierra o el saneamiento de la propiedad y/o el reconocimiento de la posesión, los casos más frecuentes son: predios con propietarios ausentes o no habidos, predios precarios, predios con in-matriculaciones, en litigio, con sucesiones intestadas, predios con gravámenes, con tracto por transferencia, etc.

3.2. Programa 2: Regularización de la propiedad urbana o el saneamiento de la propiedad y/o el reconocimiento de la posesión, los casos más frecuentes son: predios con propietarios ausentes o no habidos, predios precarios, en litigio, con sucesiones intestadas, predios con gravámenes, con tracto por transferencia, etc.

3.3. Programa 4: Programa de Indemnización Asistida cuyo objetivo es que la indemnización que se paga a personas desplazadas por obras públicas sea utilizada de manera óptima.

3.4. Programa 5: Rehabilitación de Remanentes Urbanos dirigida a casos de afectaciones parciales de predios urbanos con área remanente factible,

es decir, área que permita la permanencia de las familias que ocupan los predios o la continuidad del uso económico del predio.

3.5. Programa 6: Rehabilitación de Remanentes Rurales cuyo objetivo es reubicar viviendas, cultivos e infraestructura en el remanente del lote rural, siempre y cuando el tamaño del remanente permita la continuidad de las actividades productivas.

3.6. Programa 2: Adquisición de áreas por trato directo con la aplicación de la Ley N° 27117 “Ley General de Expropiaciones”, se posibilita que el Proyecto Especial Olmos Tinajones, adquiera directamente de los propietarios los predios que requiere el Proyecto.

3.7. Programa 3: Adquisición de Áreas por Aplicación de la Ley de Expropiaciones cuyo objetivo es la transferencia forzada del derecho de propiedad de particulares a favor del Estado mediante la aplicación de la Ley General de Expropiaciones – Ley N° 27117.

3.8. Programa 7: Programa de Asistencia Técnica Agropecuaria: El ingreso de los agricultores que viven y/o trabajan en estos predios podría disminuir si el área afectada está siendo utilizada para la agricultura o la ganadería. Este programa promoverá la innovación en las prácticas agropecuarias, el uso adecuado de fertilizantes, el buen manejo de los productos cosechados, el uso de semillas certificadas, la formación de organizaciones de productores para facilitar la comercialización, el riego tecnificado, el uso racional del agua, el mejoramiento de los sistemas de control de calidad, etc.

3.9. Programa 8: Programa de Apoyo para la Generación de Ingresos: La población objetivo son los jefes de hogar a ser reubicados por causa del

proyecto y que están desempleados o tienen bajos ingresos. Se evaluará la pertinencia de dar la preferencia a mujeres, en el caso de las jefas de hogar.

3.10. Programa 9: Programa Habilitación del terreno y Construcción de Módulos: A fin de llevar a cabo la habilitación del terreno que servirá para la reubicación de los afectados y sobre el cual se construirán de los módulos será necesario llevar a cabo coordinaciones y convenios con entidades como las Municipalidades locales, las empresas de Luz, la empresa que proveen de agua, el Banco de Materiales, la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, etc.

3.11. Programa 10: Programa Relocalización involuntario en el que se elaborará el calendario de traslado, estrategias y asistencia; medidas de transición a corto plazo en cuanto al mantenimiento, organización de la comunidad, atención de salud, asistencia de autoconstrucción, etc.

Artículo 4°.- Ejecución de los Planes de Compensación y Relocalización Involuntario.

Los planes de Compensación y Relocalización Involuntario – PCRI, será ejecutado por el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT.

El proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario implementado en la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos estuvo diseñado y planificado para ser implementado según lo establecido en la Ordenanza Regional N° 026/2006-GR-LAMB/CR; lo cual debió direccionar técnicamente el proceso en estudio y determinar el nivel de mitigación de efectos producidos por el Proyecto.

2.1.6.2. Proceso de Desplazamiento

2.1.6.2.1. Estrategias de interacción: convencimiento y sensibilización

Regularmente los procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario, estructurados en planes o programas, tienden iniciar su implementación bajo estrategias de sensibilización y convencimiento a la población a ser afectada, para lograr niveles importantes de cooperación ante el proceso inminente. La eficiencia en la ejecución de éstas estrategias iniciales, determinan las características que enmarcan la relación de interrelaciones implícitas entre funcionarios estatales y comuneros a ser afectados. Para algunos autores, su importancia radica en ser una etapa en donde se visibiliza y, a la vez, articula los intereses y necesidades de los agentes sociales intervinientes; con lo cual, se genera las condiciones para mitigar los efectos del desplazamiento y reasentamiento involuntario.

En el presente apartado, refiere las condiciones en que se desarrolló las iniciales interacciones entre los funcionarios del PEOT y los habitantes de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, afectados por el proceso en estudio.

Los comuneros que habitaban en los caseríos de Pan de Azúcar, Vingar Grande, Abrigos de Pañala y La Algodonera, pertenecientes a la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, toman inicialmente conocimiento que serían parte de una población a ser desplazada forzosamente en el año 2005; según los encuestados, mediante la información proporcionada por comuneros vecinos del centro distrital de Olmos (en un 78%), autoridades no comunales (en un 13%) y por autoridades comunales (en un 8.7%). La información regularmente se proveía en los mercados y en la plaza central del distrito; cuando en los fines de semanas, los comuneros dejaban sus viviendas y viajaban, de 2 a 3 horas, al centro de la ciudad para adquirir los suministros familiares y de sus animales. Lo regularmente

informado, redundaba en la generalidad de que “serían desalojados de sus viviendas por estar ubicados en las tierras del Estado y donde se dará el Proyecto Olmos”.

Uno de los factores a resaltar en la Tabla 9, es que entre los primeros medios que proporcionan información a los comuneros sobre el proceso que los afectará, no se visibiliza la participación de los funcionarios del PEOT y en un muy bajo nivel, la de las autoridades de la directiva comunal gobernante. Lo cual, para los comuneros, ha significado cierto grado de complicidad de las autoridades locales y funcionarios del Estado para que éste proceso no sea visibilizado en sus verdaderas dimensiones tanto a nivel local, distrital o regionalmente; y con ello, se genera una desconfianza inicial.

Tabla 9
Conocimiento inicial del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR:	FRECUENCIA	%
Funcionarios del PEOT	0	0.0
Autoridades comunales	2	8.7
Autoridades no comunales	3	13.0
Comuneros	18	78.3
Otros	0	0.0
TOTAL	23	100

Es en los meses finales del año 2007 que inician las primeras relaciones entre los funcionarios del PEOT y los comuneros a ser desplazados. Según narran

las declaraciones de los funcionarios del PEOT, los funcionarios del Estado se acercaron a las viviendas de los comuneros para informales que serían partícipes del Plan de Compensación y Relocalización Involuntaria (PCRI), orientado al apoyo ambiental, social, cultural y económico de las familias ubicadas en el área de ejecución de obras del Proyecto Olmos; desarrollando programas y proyectos orientados a compensar pérdidas físicas por el desalojo, fomentar actividades agropecuarias y a mejorar sus condiciones de vida. Entre los beneficios por desalojo se encuentran nuevas viviendas con infraestructura moderna, compensación por bienes afectados, trabajo para los miembros de las familias en las obras del Proyecto Olmos, entre otras.

En esta primera etapa, entre los factores a considerar, no solo es el contenido de la información, sino también la metodología utilizada para informar y sensibilizar a la población afectada. En las declaraciones de la comunera Yolanda Arroyo More: *“Los funcionarios llegaron a entrevistar a mi esposo diciéndole que nosotros teníamos que salir de nuestras tierras y ser reubicados...ellos llamaban a mi esposo para conversar con él, y yo salía también ahí para escuchar que cosa decían. A mí me decían “oye Yolanda, ponte pa’lla, deja a tu esposo que voy a hablar con él”. Yo le dije, “No señor yo también soy viviente aquí y tengo derecho a escuchar”*. Esto es una muestra de la forma como concibieron los afectados, en especial las mujeres, la etapa de información y sensibilización implementada por los profesionales del PEOT. En donde se describe una exclusión hacia la mujer, al darle una prioridad al hombre (jefe de familia) para ser informado e iniciar con los tratos para el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

En relación a la proporción de la información, se observa que el 73.9% de los comuneros no llegaron a entender los factores causales que determinaban su desplazamiento y reubicación, siendo el 52.9% representado por hombres y el 47.1% por mujeres; es decir, existe un nivel mayoritario de la población que no entendía el porqué de su afectación (Tabla 10).

Tabla 10
Entendimiento de las causas o motivos del desplazamiento y reasentamiento involuntario

CÓDIGO	HOMBRES		MUJERES		TOTAL	
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
Entendieron	4	30.8	2	20	6	26.1
No entendieron	9	69.2	8	80	17	73.9
TOTAL	13	100	10	100	23	100

En mucho de los casos, la pregunta anterior se respondía bajo la generalidad que las causas del desalojo y reubicación se darían para la construcción del Proyecto Olmos; sin mencionar las particularidades o importancias que conllevaron a la ejecución no sólo del Proyecto Olmos, sino del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario; por ejemplo, el decreto legislativo, convertido en ley, que permite expropiarlos terrenos a la Comunidad Campesinas de Olmos a favor del Estado peruano, los convenios establecidos entre la directiva comunal y los funcionarios del Estado para facilitar el desplazamiento y reasentamiento involuntario, el marco normativo que protege sus derechos en este tipo de procesos, la ampliación de la frontera agrícola, el modo de diseñar e implementar el plan de desplazamiento y reasentamiento involuntario a ser aplicado por el PEOT, los efectos negativos a su estructura de vida por la implementación del proceso en estudio, entre otros.

Por otro lado, según declaraciones de los funcionarios del PEOT, sus profesionales informaron a los comuneros a ser afectados sobre la importancia del Proyecto Olmos, en qué consistía el proceso de desplazamiento y reubicación involuntario, cómo los beneficiaría y que tiempo duraría el proceso. Sin embargo, lo explicado no fue entendido en proporciones adecuadas por parte de los comuneros y los funcionarios del PEOT no visibilizaron dicho problema.

De igual forma, entre los factores que se diseñaron, estratégicamente, para contribuir al desarrollo integral de los comuneros a ser afectados y generar su cooperación en el proceso, se encuentran los beneficios propuestos por los funcionarios del Estado, entre ellos se encuentran: nuevas viviendas, infraestructura educativa moderna, servicio básico de agua de calidad, desagüe con sistema de biodigestión, energía eléctrica, local comunal, una compensación por bienes afectados y programas de desarrollo local; es decir, se mejoraría las condiciones de vida de la población afectada. Todas las actividades enmarcadas en el Plan de Compensación y Relocalización Involuntario (PCRI), aprobado por Ordenanza Regional N°026/2006-GR-LAMB/CR, disponiendo su implementación y ejecución para las personas que ocupan los predios inmuebles urbanos y rurales donde se ejecuta la subasta de 38.000 hectáreas, como primera etapa del proyecto.

Sin embargo, es necesario mencionar que inicialmente muchos de los beneficios a otorgar no estaban suscritos en documentos que precisaran su cumplimiento; lo único que se pudo evidenciar, documentariamente, es la compensación económica como beneficio ante la afectación de bienes. Lo cual, generó determinada desconfianza en los comuneros para el cumplimiento de los demás beneficios, aun cuando eran partícipes de determinadas iniciativas que generaría su cumplimiento; por ejemplo: la ubicación del nuevo lugar donde serían reubicados, el diseño de las viviendas, entre otros.

A medida que el tiempo transcurría, en los medios de comunicación regionales se vertían declaraciones, por representantes de la concesionaria Odebrecht, que “la subasta de las tierras de Olmos aún no se pueden efectuar, en tanto que el Estado no cumple con su labor de saneamiento físico-legal de estas”.

Con lo cual, se evidenciaba la presión del sector privado hacia los funcionarios del PEOT para apresurar el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

Al establecerse la fecha límite para la primera subasta (fijada el 09 de diciembre del 2011) de las tierras de la Comunidad Campesina de Olmos, se inician las actitudes prepotentes, hostiles y amenazantes por los empleados del PEOT para con los comuneros habitantes de la poligonal. Según las declaraciones de los afectados, como por ejemplo de José Domingo Mio Pupuche: *“Nos decían que teníamos que aceptar si o si lo que nos querían dar por los daños... y que no podíamos reclamar nada por que podíamos perder todo y no nos darían ningún beneficio; ni plata, ni casa, ni trabajo, nada”*; los comuneros estaban siendo obligados a aceptar el monto económico por afectación de bienes, establecidos unilateralmente por los funcionarios estatales, mediante la amenaza de no recibir ningún beneficio por parte del Estado si no aceptan las condiciones y propuestas establecidas.

Adicionalmente, se advierte que las valorizaciones de afectación de bienes por parte del Estado han sido justas y no tienen por qué ser objeto de reclamos, y de presentarse algún reclamo no se tomarán en cuenta, entendiendo que el Estado es quien tiene la última palabra y no está sujeto a reclamos. De igual forma, se procederá a desalojar a todas las familias que ocupan las hectáreas a subastar, así no estén de acuerdo.

2.1.6.2.2. Paradigma de la compensación por afectación

Las experiencias en la ejecución de programas o planes de desplazamiento y reasentamiento involuntario en comunidades campesinas o nativas han demostrado que las compensaciones por afectación estaban reducidas a componentes económicos, obviando los impactos en las estructuras sociales, culturales y políticas. Lo cual, genera que los afectados se vean obligados a reasentarse en idénticas o, incluso, peores condiciones de precariedad e ilegalidad. Un nuevo paradigma, establece directrices para elaborar un programa de compensación por desplazamiento y reasentamiento involuntario, bajo el criterio de mejorar las condiciones sociales de vida de los comuneros o nativos afectados, por

encima de los niveles previos. Considerando la recuperación del dinamismo de sus estructuras sociales, económicas, culturales y políticas.

Las condiciones en que se desarrolló el proceso de compensación por afectación del desplazamiento y reasentamiento involuntario de los comuneros de Olmos, se describe, desde la perspectiva principal de los afectos y de agentes intervinientes. Así, el comunero Felipe Barrios Flores manifestó lo siguiente: *“No estábamos seguros de querer salir, es que lo que nos decían solo era de boca, nada en papeles. Y lo que nos querían dar era muy poco para nosotros, nuestras cosas valían más”*.

Después de la primera etapa de convencimiento y sensibilización, es recurrente encontrar declaraciones como la del comunero Felipe Barrios Flores.; en donde, no sólo se muestra la desconfianza para el cumplimiento de los beneficios a otorgar, sino además, la disconformidad con el valor económico de las compensaciones de afectación por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. En relación a lo último, la disconformidad inicia cuando los funcionarios del PEOT designan a una institución independiente (CONATA) a tasar (evaluar) los bienes que serían afectados – específicamente; viviendas, norias, corrales de animales, mejoramiento de terrenos agrícolas, entre otros – por el proceso, sin tener en cuenta la participación de los comuneros propietarios; es decir, en la valorización de los bienes no se tomó en cuenta la percepción u opinión de las personas a ser afectadas, sino únicamente se les limitó a ser informados del valor económico que les correspondería por su afectación. Adicionalmente, en la valorización de afectación de bienes no se estaba considerando las hectáreas pertenecientes a las familias comuneras, en donde regularmente desarrollaban sus actividades productivas y de convivencia, y que, igualmente, serían afectadas por el desplazamiento y reasentamiento involuntario.

Desde la perspectiva de los comuneros, las viviendas, cercos, corrales, norias, mejoramiento de las tierras productivas y todos los bienes a ser afectados,

habían sido contruidos con materiales de la zona, que bajo trabajo de selección y mejoramiento han terminado por ser parte de la infraestructura de su hábita y la base material para el desarrollo de su estructura social . Por ejemplo, las familias comuneras podían pasarse semanas buscando el mejor algarrobo y, aún más, para cortarlo, transportarlo y, finalmente, transformarlo en parantes, vigas, cumbreras y marcos, y así cimentar las viviendas donde convivirían con su familia; lo cual, no sólo simboliza la relación fuerza de trabajo familiar-comunal y ámbito de desarrollo, sino la construcción simbólica de pertenencia por factores materiales hacia un espacio geográfico determinado.

En la interiorización propia de los comuneros, veían al Estado – representado por Proyecto Especial Olmos Tinajones – como un ente superior que poseía los recursos necesarios para imponer sus condiciones y, con lo cual, no se podía interceder para lograr mayores beneficios. Y además, consideraban que siendo familias sin una adecuada formación educativa, organización local, representatividad comunal y sin recursos económicos, no podían proteger sus intereses y derechos comunales. Resultado de la perspectiva anterior, las familias comuneras recrean el temor de poder perder todo sus bienes y propiedades comunales, sin recibir ningún beneficio a cambio; ante ello, individualmente terminaron por firmar un documento (acta de justiprecio), en cuando se acepta recibir la compensación económica por afectación de bienes, interpuesta por los técnicos del PEOT, y dan el consentimiento de ser desalojados de sus viviendas y ceder la posesión de sus hectáreas productivas al Proyecto Olmos.

Según el informe de los funcionarios del PEOT, en el año 2010 se logró compensar a 30 comuneros posesionarios de la poligonal antigua y en el año 2011 a 5 más, haciendo un total de 35 beneficiarios. Hasta febrero del 2012, faltaba por compensar a la señora María Adelaida Sánchez Benites y al señor Hugo Sánchez Pupuche; adicionalmente, a un comunero se le aplico el Decreto de Urgencia N°049-2009, que declaró de necesidad pública la ejecución de las obras de irrigación y la intangibilidad de los terrenos que conforman el Proyecto Especial de

Irrigación e Hidroenergético Olmos, y se inició proceso de evaluación a dos casos para determinar la aplicación o no de la compensación. Los poseionarios beneficiados por los justiprecios, describen la metodología de convencimiento, utilizada por los empleados del PEOT, como la estrategia “de convencer a unos para obligar a todos”; es decir, primeramente se encargaban de convencer a un grupo minoritario de comuneros – mediante la promesa de recibir mayores beneficios que los comuneros que aún no firman –, para después convencer a los demás comuneros a recibir lo ofrecido o ser los únicos que perderán sus bienes, posesiones y beneficios. Lo cual, se puede contrastar en informes emitidos por funcionarios del PEOT, señalándose que primeramente 7 comuneros fueron quienes firmaron la acta de justiprecio (1/10/2010), posteriormente 4 comuneros (16/11/2010), luego 6 (17/11/2010), días después 8 (19/11/2010) y finalmente 5 comuneros terminaron por aceptar (7/12/2010). Los montos económicos dispuestos como compensación, muestran variaciones significantes. Entre ellos, se dispuso un pago máximo total de 50, 547 y un mínimo de 623 nuevos soles (Tabla 11).

El 30 de noviembre del 2012 se presentó ante el despacho del Gerente General del PEOT, Francisco Gayoso Zeballos, un documento donde se esbozaba los criterios y argumentos que se debió tomar en cuenta para valorizar los bienes afectados y, a la vez, una valorización alternativa, desde la perspectiva de las familias de comuneras. Entre los argumentos presentados, se menciona lo siguiente: “Los criterios que generalmente usan algunos profesionales o personas de la ciudad es que los bienes rústicos son muy baratos porque se los tiene a la mano o lo que se necesita es simplemente caminar un poco y obtenerlos con lo cual nuestro tiempo no se valora, los recursos obtenidos son gratis pues están en el campo y como no son de fábrica entonces su valor es poco. Recordamos las discusiones sobre algunos materiales contruidos como los horcones pues para algunos es cuestión de salir a la esquina y de unos cuantos hachazos ya lo tenemos. La realidad es diferente pues hay que andar seleccionando el árbol adecuado, luego hay que conversar con el comunero poseionario, tirar horas y horas de hacha porque son maderos muy duros. Luego sacarle la rama, adecuarlo

para que funcione como tal y transportarlo al lugar. Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuántas distancias.

Tabla 11
Compensación de bienes para la población de La Algodonera

Nº	PAGO TOTAL	Nº	PAGO TOTAL	Nº	PAGO TOTAL
1	1,006	14	2,420	27	2,219
2	30,257	15	28,014	28	42,150
3	43,441	16	00	29	32,346
4	13,527	17	23,548	30	623
5	00	18	12,886	31	28,865
6	00	19	32,052	32	5279
7	13,251	20	11,021	33	3139
8	50,547	21	29,326	34	4,43
9	48,781	22	2,560	35	978
10	25,617	23	12,070	36	30,965
11	1,153	24	1,547	37	27,920
12	34,935	25	10,960	38	22,641
13	27,573	26	8,564	39	27,883

Algo parecido pasa con la construcción de norias que es muy trabajoso, de alto peligro para la gente y que se necesita una mano de obra calificada, experta y sin miedos para un trabajo de esta naturaleza. Los derrumbes son frecuentes, los materiales hay que traerlos desde el pueblo y todo ello encarece la obra. El trabajo de excavar norias lleva el gran peligro de no hallar agua suficiente o choca con una vena de agua salada que echa a perder todo el trabajo. Por ello cuando se tiene una noria ya instalada, con agua suficiente, es generar vida para varias familias y de allí el gran valor que tiene para los comuneros y familias de esta zona. Por ello destruir una noria es quitar la posibilidad de vida a los animales y a las personas.”

Lo antes referido, describe la concepción que tienen los comuneros sobre la forma de pensar de los “foráneos” en relación a ellos; entendiéndolo, como una simplicidad de minimizar las acciones propias de su desarrollo comunal, desde lo material hasta la relación intrínseca del hombre y la naturaleza. Por añadidura, se grafica la complejidad de las acciones requeridas para obtener un bien último, la necesidad de recrearlas para lograr el bienestar comunal, la relación de dependencia para con su medio natural y la convivencia particular de su comunidad. Con lo cual, se percibe que los factores iniciales terminaron por resolver la defectuosidad de la valorización de los bienes a ser afectados y, los segundos, argumentos necesarios para reformular una inicial valorización.

En la Tabla 12, se observa en forma numérica la percepción de los comuneros anteriormente descrita. Con lo cual, se ratifica gráficamente el descontento de los comuneros ante la valorización económica otorgada como compensación de afectación. Además, se precisa una valorización diferencial, entre lo otorgado por PEOT y propuesto como alternativa, muy significativa; llegando a un nivel máximo de 68,630 y un promedio de 15 a 30 mil nuevos soles. Es por ello que, se infiere claramente una diferenciación extrema en la percepción para la valorización de los bienes a ser afectados – entre los funcionarios del PEOT y los comuneros – y, posiblemente, en las demás etapas del Plan de Compensación y Relocalización Involuntaria.

Tabla 12
Compensación del PEOT y valorización alternativa de los comuneros

	COMUNERO POSESIONARIO	COMPENSACIÓN DEL PEOT	VALORIZACIÓN ALTERNATIVA	VALOR DIFERENCIAL
Sector La Algodonera				
1	Ursinio Asencio Tineo y Orfelinda Cobos Berna	1,020	12,000	10,980
2	José Manuel Barrios Cruz y Natalia Crisanto Cusque.	30,257	94,000	63,743
3	Felipe Barrios Flores	13,527	29,400	15,873
Sector Pan de Azúcar				
4	Pablo Sánchez More	32,052	71,000	38,980
5	Luciano Mío Pupuche y Reydelinda Peña Córdova	11,021	45,540	34,519
6	Juan Elías Mío Chunga e Irene Monja Arroyo	2,560	35,360	32,800
7	Pedro Pablo Monja Soplapuco y Yolanda Arroyo More.	12,070	24,300	12,230
8	Juan Monja Arroyo y Eufemia Barrios Ascencio.	1,547	4,160	2,613
9	José Domingo Mío Pupuche e Isabel Sánchez Benites	623	3,600	2,977
10	Ceferino Sánchez Monja y Adelaida Benites Monja	28,865	63,450	34,585
11	Julio Cobeñas Arroyo	5279	9,600	4,321
12	Ramos Cobeñas Mayanga	5279	9,600	4,321
13	Luis Cobeñas Arroyo	4437	11,400	6,963
14	Chunga Mío Julia	32,346	71,300	38,954
15	María Adelaida Sánchez Benites.	978	5,000	4,022
Sector Vingar Grande.				
16	Juana Rosa Odar More	30965	69,300	38,335
17	Arturo Cobeñas Mayanga y Rumalda More Odar	27,920	73,000	45,080
18	Julio Nunura Benites y Violeta More Sánchez	27,883	69,850	41,967
19	Lorenzo Sánchez Monja	1,500	4,650	3,150
Sector Abrigos de Pañala				

20	Narcizo More y Rosa Cruz	10,960	12,250	1,290
	Roque			
21	Félix More Monja	8,564	17,900	9,336
22	Domingo More Monja	2,219	5,200	2,981
23	Vicenta Monja Soplopuco	42,150	111,080	68,930
24	Félix Riojas Farroñan	43,000	51,700	8,700

Una de las características a resaltar en la etapa de compensación de afectación, es el criterio de los funcionarios del PEOT de no tomar en cuenta la posesión de las parcelas o hectáreas de las familias comuneras a ser afectadas, como bienes a ser compensados. El argumento sustentado para no compensar tierras o hectáreas productivas, es mediante la Ley N° 27172 del 15.09.1999, se dio fuerza de Ley al Decreto Supremo N° 017-99-AG, en el cual se modificó la denominación del Proyecto Especial Olmos y, a su vez, se incorporó en el dominio del Estado las tierras eriazas identificadas dentro del ámbito de influencia del referido proyecto. En atención a esto y, especialmente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 27172, el Estado es el propietario de las tierras. Así, para ejercer tal derecho, el PEOT está realizando el saneamiento y la recuperación de las tierras ocupadas por muchos años por personas que se han dedicado pacíficamente a la pequeña y mediana ganadería y a la agricultura.

Además añaden, que la población de La Algodonera no fue beneficiada por un proceso de expropiación de acuerdo a Ley, porque no pudieron acreditar la propiedad de las tierras que ocupan en la zona de influencia del PEIHO. Motivo por el cual mediante la Ordenanza Regional N° 026/2006-GR-LAMB/CR, el

Gobierno Regional de Lambayeque autorizó la implementación y ejecución de un Plan de Compensación y Relocalización, para mitigar los daños.

Sin embargo, es necesario señalar que en el ámbito de las Comunidades Campesinas sus recursos territoriales no se distribuyen bajo título privado, sino son cedidos bajo la categoría de “certificado de posesión comunal”. Siendo la parcela

de título personal y de sucesión familiar, de duración indefinida mientras el titular se mantenga como comunero y con mención especial a que la titular de dominio es la comunidad campesina. Esto es un factor no tomado en cuenta para el proceso de compensación de los bienes a ser afectados.

El considerará la valorización de los bienes como aspectos materiales rústicos-terminados, sin tener en cuenta la fuerza de trabajo adherente para su utilización última – determinado por las particularidades de la zona – y los factores simbólicos de estos; termino dando como resultado un monto económico menor a lo estimado por los comuneros a ser afectados; además de no recibir la información y las prácticas de sensibilización adecuada para con el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, se resolvió por ende, una clara oposición al proceso de ser desplazados.

2.1.6.2.3. Características del desalojo

Después de otorgarse a los comuneros la compensación económica por afectación de bienes, bajo las características anteriormente descritas; los funcionarios del PEOT advierten que en el más mínimo plazo deben de abandonar sus viviendas y posesiones para ser reubicados en el nuevo centro poblado y, así, poder proceder con la primera etapa de subasta de las 38,000 hectáreas. Sin embargo, a causa de la disconformidad con la modalidad procedida para su desalojo, decidieron no deshabitar sus viviendas y parcelas hasta que se certifique el cumplimiento de los beneficios ofrecidos por los funcionarios del Estado.

En pleno clima conflictivo; en donde, los funcionarios no aceptaban ser partícipes de un trato adicional a lo ya establecido inicialmente y los comuneros con la negativa de no abandonar sus posesiones; intervienen agentes externos – Instituto de Desarrollo Regional, estudiantes universitarios de sociología de la UNPRG, FEDECCAL y Defensoría del Pueblo – que contribuyen a establecer un nuevo acuerdo entre las partes.

El 28.11.2011, firman los funcionarios del PEOT, la Junta de Administración Local de la Algodonera (JAL) (representantes comunales) y representantes de la CCSDO, nuevos acuerdos que garantizarían un adecuado desarrollo de las condiciones sociales de vida de la población a ser desplazada y reasentada involuntariamente. Los cuales, se mencionan a continuación:

- a.** Entregar los documentos finales de posesión y propiedad de los 27 módulos a los comuneros que forman parte de la JAL.
- b.** Construir 3 módulos adicionales en el más breve plazo.
- c.** Entregar 13 lotes de viviendas para los comuneros identificados tanto por el PEOT, como por la JAL.
- d.** El PEOT se compromete a resolver los problemas técnicos o de gestión de los servicios de agua y desagüe.
- e.** Considera atendible el pedido de potabilización del agua solicitado por los comuneros.
- f.** Iniciar los trámites para el alumbrado eléctrico.
- g.** Entrega a la JAL de 144 Ha totalmente saneadas.
- h.** Compromiso de rescatar las 44 Ha en posesión de A. Rázuri.
- i.** La JAL solicita la instalación de un pozo tubular.
- j.** Conformación de un centro poblado comunal La Algodonera, elaboración de estatutos e inscribirlos en Registros Públicos.
- k.** Revalorización de la compensación recibida.
- l.** Instalación de un biohuerto comunal de 4 Ha.
- m.** Promoción de proyectos para mejorar la atención de salud, educación, y programas sociales.
- n.** El PEOT gestionará la prioridad para los comuneros posesionarios en los puestos de trabajo de obras de construcción de H2OImos.

Al día siguiente de haberse firmado los acuerdos, el 29.11.2011, se registra una de las primeras acciones de desalojo forzado dirigida por empleados del

PEOT. Defensoría del Pueblo de Lambayeque, en su expediente N° 3998-2011, describe lo siguiente: “El 29.11.2011, se recibió la comunicación telefónica de un grupo de moradores que estaba en posesión de las tierras de influencia del PEIHO. Se comunicó que estaban siendo desalojados por la fuerza por el personal contratado por el PEOT y que serían reubicados en La Algodonera.”; con lo cual, queda evidenciado una primera denuncia por actos de violencia contra los comuneros poseionarios.

En el recuento de los hechos por parte de los comuneros, se puede encontrar la siguiente declaración hecha por el comunero Domingo More Monja:

“El 29 de noviembre del 2011, llegaron tres camionetas del PEOT con 4 policías, llegaron a las 9 am. Llegaron, pasaron a la noria, la enterraron, y en los corrales, tumbaron la leña y la casa toda la derrumbaron”.

En las declaraciones iniciales del comunero Domingo More Monja se puede inferir que la presencia policial obedece al cumplimiento de un mandato judicial que ordena la ejecución de desalojo; sin embargo, como lo señala la Defensoría del Pueblo de Lambayeque, no existió mandato judicial alguno y, además, no se respetó el procedimiento legal establecido por el decreto de urgencia N° 049-2009. Adicionalmente, se describe los bienes directamente afectados en la acción propia del desalojo; que vienen a ser las viviendas, norias, cercos y corrales.

De igual forma, en las declaraciones de la señora Santa María: *“Cuando regresé ya hallado todo destruido mi casa, ya habían derribado el horcón, el torno, las vigas de la noria y todo metido ahí, y lo que quedó le habían echado candela a todo. No nos dejaron nada, sin cocina, ni comida y agua para tomar. Mis hijos totalmente asustados de lo que veían, llorando”*; se describe que los desalojos se efectuaron cuando los jefes de familias no se encontraban en las viviendas, pues estos se hallaban trabajando en el campo y, en muchos de los casos, las personas encontradas eran menores de edad, mujeres en gestación o ancianos; es decir, personas que por sus condiciones no podían laborar en el campo. Y entre las características señaladas del proceso, se evidencia el grado de enañamiento para

con los bienes de los comuneros, el no prestar las garantías básicas de vida para momentos posteriores al desalojo y la exposición de la salud integral de menores de edad, mujeres y ancianos.

Las impresiones del proceso de desalojo no solo fueron por parte de los comuneros adultos, sino de igual forma, por los niños y niñas que observaron la violenta forma en que fueron destruidas sus viviendas y propiedades, de forma general.

Además, se describe las limitaciones o problemas que aquejaron a las familias comuneros después de ejecutarse el desalojo forzado. Entre ellas, la falta de medios y recursos para trasladarse al nuevo centro poblado o algún otro lugar donde poder resguardarse de la inclemencia del clima; lo cual, los obligó a pernoctar en la intemperie y, a la vez, poner en riesgo la seguridad integral de los más vulnerables de la familia (niños, mujeres y ancianos).

La declaración de Rosa Cruz Roque: *“No sabía a dónde irnos, a la Algodonera no podíamos ir a pie, estaba lejos... Nos fuimos debajo de un sapote y ahí hemos dormido y cocinado, agua no teníamos. Nos botaron. Nos sacaron fuera, no vieron donde nos íbamos”*; describe la característica del proceso de desalojo forzado, desde la perspectiva de los comuneros, la cual es corroborada por declaraciones de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque, en el oficio N0462013-DP/OP-LAMB dirigida al Presidente Regional de Lambayeque (Ing. Humberto Acuña Peralta), en donde se manifestó que: “El personal encargado de la recuperación de las tierras de influencia del proyecto, sin orden judicial, empleó medios de fuerza que originaron actos de violencia contra los poseedores asentados en las zonas de proyecto. Como consecuencia de ello, lamentablemente, se produjo con violencia el cierre de norias, desmontaje de viviendas, quema de cercos y, en algunos casos, violencia física contra la población. Se debe resaltar que, para el saneamiento de tierras, no se empleó el procedimiento legal establecido en el decreto de urgencia N° 049-2009.”

Estos nuevos acontecimientos generaron relaciones conflictivas, desencuentros de intereses, necesidades y emociones, entre funcionarios del PEOT y comuneros desplazados. Por lo cual, se puede evidenciar tres momentos en esta etapa del proceso de desplazamiento; en primer lugar, se puede describir un periodo (de Agosto a Diciembre del 2011) protagonizado por el PEOT –con la elaboración e implementación inicial del PCRI –que concluye con el desalojo violento y reiterado de los comuneros habitantes de la zona de influencia. En un segundo periodo, el protagonismo se da por parte de los comuneros desplazados; quienes se articulan con organizaciones externas a la comunidad campesinas (FEDECCAL, INDER, UNPRG, Defensoría del Pueblo y posteriormente con Amnistía Internacional-sección Perú) para posicionar su problemática en la agenda local, regional y nacional, con el objetivo de proporcionar las alternativas de solución. Por último, se evidencia un periodo en donde los funcionarios del PEOT se niegan a proporcionar los espacios de dialogo necesarios para atender los requerimientos de los dirigentes comunales.

2.1.6.3. Proceso de reasentamiento

2.1.6.3.1. Acondicionamiento de la nueva estructura de convivencia

La acción práctica de reasentar a una población determinada, constituye la etapa donde se ejecutan las estrategias de reconstrucción planificada de la organización social, cultural, económica y política de la población desplazada. Para lo cual, se debió de comprender el complejo conjunto de reglas, valores, flujos internos de información, incentivos y las relaciones estructurales de la organización poblacional, para su aplicación.

Para el caso específico de estudio, se registraron características condicionales que determinaron los niveles de afectación por el proceso de reasentamiento involuntario en los comuneros de Olmos. Iniciando desde la intervención de los comuneros en el diseño del nuevo centro poblado, las

condiciones en que se instalaron en sus correspondientes viviendas y el proceso de adaptación a su nueva hábita.

Una de las estrategias más representativas del PCRI fue la construcción de un nuevo centro poblado, denominado La Algodonera. En ésta nueva área se tenía proyectado reubicar a las familias que serían desplazadas de la poligonal antigua. Inicialmente proyectado para 27 módulos (posteriormente a 39) de viviendas, edificados con material noble y que consta con una sala comedor, una cocina, tres dormitorios, un baño, jardín, lavandería y corral. Estos módulos contarían con agua potable y biodigestores. Además, el centro poblado contaría con centro educativo primario y un local comunal.

La ubicación (a 35 Km del pueblo de Olmos) y construcción de La Algodonera estuvo prevista por una serie de reuniones de concertación entre los comuneros y los funcionarios del PEOT. Inicialmente, se trabajó en la elección de la ubicación del nuevo centro poblado y, posteriormente, en el diseño de las viviendas. Es menester señalar que no todos los comuneros fueron partícipes de las reuniones para ubicar y diseñar el nuevo centro poblado; en tanto que, no todos estaban de acuerdo con los procedimientos utilizados para la compensación de la afectación.

La peculiaridad de encontrarse de acuerdo o no con el proceso de desplazamiento o desalojo involuntario, fue determinante para caracterizar las condiciones de su reasentamiento involuntario en La Algodonera; específicamente, la instalación y ordenamiento de las familias comuneras en las viviendas disponibles. A una pequeña minoría, el PEOT dispuso un medio de transporte (camioneta) a las familias comuneras que desalojaron pacíficamente sus propiedades; para que puedan trasladar sus bienes materiales, ganado y familia al nuevo centro poblado. Sin embargo, a las familias desplazadas forzosamente, bajo su precariedad económica y su situación de vulnerabilidad circunstancial, estuvieron obligadas a cubrir los gastos de transporte.

Teniendo en cuenta lo alejado, agreste y desolado de la ubicación de las propiedades desalojadas; los comuneros no podían tener acceso rápido a un medio de transporte, con lo cual, se prolongaba su condición de vulnerabilidad circunstancial. Las consecuencias registradas son: menores de edad enfermos con gripe e infecciones gastrointestinales, pérdida de bienes materiales y de un número importante de ganado caprino y aves de corral.

Posterior a la instalación y ordenamiento de las familias comuneras en el nuevo centro poblado, surge la etapa de adaptación a las nuevas condiciones sociales de desarrollo. La comunera María Adelaida Sánchez Benites manifiesta lo siguiente: *“Llegamos el 19 de noviembre pero una semana después todo era algo extraño igual. No nos acostumbramos a estar tan encerrados, nuestros hijos peor se enfermaron. Las casas están bien pero que pues sino podemos hacer nada aquí, ¿para que la quieres?...No podemos ni dormir en las noches por el calor que está en la casa y en la tarde tenemos que comer afuera”*. Lo manifestado por esta comunera es una muestra de la concepción de los comuneros ante la nueva condición social de desarrollo generado por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. Una concepción que describe una disconformidad, primeramente, con las nuevas características geográficas de la zona; al encontrar una reducción mínima del espacio y recursos para desarrollarse familiar y comunalmente. Entendiendo que sus actividades productivas, de convivencia y de desarrollo en general estaban determinadas por las condiciones geográficas y/o medio ambientales extensas.

En segundo lugar, se evidencia que la infraestructura moderna del nuevo centro poblado no era suficiente para generar condiciones de desarrollo y, con ello, un clima de bienestar en la población reasentada; además de tener deficiencia en su diseño, como por ejemplo: no estar acondicionada para un clima altamente caluroso, no contar con los ambientes necesarios para las actividades habituales de los comuneros (por ejemplo, no contar con corrales donde guardar al ganado y aves, no contar con cuartos para los herramientas de trabajo, entre otros) y

presentar deficiencias en algunas partes de la construcción (grietas en las paredes de las viviendas, deficiencias en la conexión del sistema potable que causaba la filtración del agua, deficiencias en la conexión del sistema de los biodigestores que ocasionaban la filtración de los desechos, entre otras).

Los entrevistados narran esencialmente los cambios generados en su modelo de convivencia, actividades productivas y en la calidad de vida de las familias comuneras. Una de las características importantes del modelo de convivencia de los comuneros, es que se trataban de familias extensas; es decir, se podía encontrar en una sola vivienda abuelos, hijos, hermanos, nietos, sobrinos o tíos; con roles específicos para que cada miembro contribuya con el desarrollo familiar y comunal; sin embargo con el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, las familias extensas se transformaron en familias nucleares; al reconocerse únicamente los beneficios por afectación a los titulares de los bienes y no a familiares, aun cuando estos se benefician directa o indirectamente.

El nuevo modelo de convivencia de las familias nucleares reduce sus estrategias y opciones de desarrollo en sus particulares condiciones de vida, en comparación con el modelo anterior; considerando a los miembros familiares y a las familias como una red social de soporte interaccional de autosostenimiento.

2.1.6.3.2. Nuevas condiciones de desarrollo

Las condiciones sociales de vida sufren una alteración en la dinámica de sus estructuras, ante el desarrollo del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. La caracterización de las nuevas condiciones sociales de vida sirve para estimar los niveles de afectación generados por el proceso en estudio, la eficiencia de las estrategias de mitigación implementadas y para evaluar nuevas alternativas ante condiciones sociales desfavorables para los afectados. En la presente investigación se evalúa las nuevas condiciones sociales de vida de los

comuneros de Olmos, mediante la descripción y comparación de componentes característicos de las condiciones de vida anteriores y posteriores a la implementación del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. La estructuración de los componentes de las condiciones sociales de vida de los comuneros campesinos, se presenta de la siguiente manera:

a. Enajenación de hectáreas:

Uno de los principales efectos del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario en comunidades campesinas o indígenas o nativas, es la pérdida de las hectáreas familiares y/o comunales; lo cual, significa suprimir el fundamento principal sobre el que la gente construye sus sistemas productivos, su sistema de comercio y sustento.

En la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos se suele dar en posesión, a sus comuneros, una determinada extensión de hectáreas o parcelas para el desarrollo de sus actividades productivas. La extensión de las hectáreas estaba determinado por las condiciones de las mismas, la actividad productiva a implementarse en ellas y al número de miembros de la familia a ocuparlas; de lo cual, se puede deducir que a un mayor número de hectáreas cedidas en posesión, se da una mayor relación de dependencia entre éstas y las condiciones sociales de vida de los comuneros.

En el caso específico de los comuneros objeto de estudio, las asignaciones se registraban en un mínimo de 16 hectáreas y un máximo de 160 (ver Tabla 13), las que estaban certificadas bajo el nombre de los jefes de familia. Evidenciando que la posesión de hectáreas fue una característica trascendental en la dinámica estructural de la comunidad; al proporcionarle el espacio geográfico necesario para el desarrollo de su bienestar. De igual forma, en el cuadro N°12, se grafica a la posesión de parcelas o hectáreas en un 73% de la población total y registra un total de 1106 hectáreas, sólo en comuneros encuestados. Sin embargo, el PEOT no

reconoció indemnización por esta propiedad o posesión de las hectáreas (por razones descritas en capítulos anteriores) que estaban bajo dominio personal y/o familiar.

Tabla 13
Cantidad de hectáreas por comunero

NOMBRE Y APELLIDOS	CANTIDAD	
	Frecuencia	%
1 Benito Barrios Ascencio	0	0
2 José Manuel Barrios Cruz	160	14
3 Felipe Barrios Flores	16	1
4 Eugenio Chávez Sánchez	0	0
5 Julia Chunga Mío	50	5
6 Julio Cobeñas Arroyo	40	4
7 Luis Cobeñas Arroyo	30	3
8 Ramos Cobeñas Arroyo	40	4
9 Julio Cobeñas Mayanga	40	4
10 Jesús Cobeñas More	0	0
11 Santos Flores Tantarico	0	0
12 María Isabel Merino Sánchez	0	0
13 Juan Elías Mío Chunga	80	7
14 Juan Pablo Mío More	0	0
15 José Domingo Mío Pupuche	50	5
16 Luciano Mío Pupuche	50	5
17 Juan Monja Arroyo	40	4
18 Lorenza Milagros Monja Arroyo	30	3
19 Pedro Pablo Monja Soplapuco	80	7
20 Vicenta Monja Soplapuco	140	13
21 Félix More Monja	100	9
22 Narciso More Monja	80	7
23 Domingo More Monja	80	7
TOTAL	1106	100

En las condiciones sociales de vida actuales, se puede observar que la posesión de hectáreas por comunero se ha reducido a 500 m², utilizados para la construcción de sus módulos de vivienda, y a 144 Hás., que serían asignados en la modalidad de huerto comunal. Es decir, se ha reducido a su mínima expresión el componente de posesión de hectáreas y, con ello, se genera una relación degenerativa de estas nuevas posesiones con las dinámicas estructurales de vida de los comuneros y con los niveles de producción económica de las familias comuneras. A consecuencia, los afectados siguen ocupando clandestinamente sus anteriores hectáreas de tierras para desarrollar sus actividades productivas; como estrategia de sobrevivencia ante las nuevas condiciones de vida.

Es necesario mencionar que, la asignación de 144 Ha para los comuneros reasentados no fue una propuesta inicial, sino es lo que cedieron los funcionarios del PEOT ante la persistencia de los afectados de que se les proporcionen 189 Ha para desarrollar sus actividades productivas. Además, lo finalmente acordado pudo ser cedido dos años después de haberse ejecutado el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, generando condiciones de vulnerabilidad de las familias comuneras al no poseer legalmente su principal medio de producción económica.

b. Degeneración de las actividades productivas

Uno de los principales factores que caracterizan la multidimensionalidad de las condiciones sociales de vida de una población, es la estructura de reproducción económica. La afectación en éste factor por la implementación del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, no solo altera los recursos económicos generados para el sostenimiento de las condiciones de vida, sino además, tiene efectos en los medios generadores de recursos; ocasionando una total o parcial modificación de las condiciones sociales de vida de la población.

La población de La Algodonera ha registrado haber tenido como actividad productiva principal a la ganadería; lo cual, se evidencia al tener en cuenta el número de comuneros dedicados a la actividad (ver Tabla 6) y la cantidad de ganado que generaba la misma (ver Tabla 7).

Las estrategias peculiares que se utilizaban para el desarrollo de la actividad ganadera en los desiertos agrestes de Olmos, fueron interrumpidos espontáneamente por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario; generando un impacto considerable en el ganado, especialmente el caprino. La declaración de la comunera Julia Chunga Mío: *“Los que más han sufrido de esto, es nuestro ganado. Teníamos muchos en nuestras tierras, para que coman y se criaran, pero ya aquí nada se puede hacer de eso. Se nos mueren o pierden de a poquito y con eso ya no tenemos cómo para comer, ni vender se puede”*; demuestra que su productividad ganadera ha sido afectada por el proceso de desplazamiento, causando la pérdida y/o muerte de sus especies de cría; lo cual, ha disminuido su capacidad para proveer recursos alimenticios a la familia comunal.

De igual forma, en la Tabla 14 se cuantifica la afectación a la principal actividad productiva, señalando que del total de ganado que tenían los encuestados (2140 cabezas de ganado) se produjo una pérdida del 79.3%, que representa a 1697 cabezas de ganado. Además, se estima una pérdida económica que puede sobrepasar unos 20 mil nuevos soles por comunero. Finalmente, se registra que si no se hubiera implementado el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, se hubiera reproducido el ganado en un 85.8% del total que existían.

En las entrevistas se pudo comprobar que el impacto en la actividad ganadera se produjo en tres momentos diferentes; el primero, se da cuando reciben el ultimato de que serían sometidos al proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario y, a consecuencia, dejaron de reproducir al ganado e iniciar con su venta. El segundo impacto, se produce después de haberse

enterrado las norias, quemado los cercos y destruido los corrales; al generar, la escases de agua y la falta de los ambientes donde resguardarlos del clima y depredadores naturales, causan la enfermedad y posterior muerte del ganado. Y finalmente, el impacto último que sufrieron, es cuando al trasladarse al nuevo centro poblado sufrieron el robo de su ganado por abigeos de la zona.

Tabla 14
Cuantificación de la afectación de la actividad ganadera

NOMBRES Y APELLIDOS	CANTIDAD ANTES		CANTIDAD DESPUÉS		CANTIDAD QUE		VALORI ZACIÓN
	DEL PROCESO		DEL PROCESO DEBERÍAN		TENER DISMIN		POR <u>UCIÓN</u> Soles (S/.)
	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	
1 Benito Barrios	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0
2 Ascencio José Manuel Barrios	30	1.4	20	0.93	80	3.7	4800
3 Cruz Felipe Barrios Flores	78	3.6	17	0.79	233	10.9	13980
4 Eugenio Chávez Sánchez	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0
5 Julia Chunga Mío Julio Cobeñas	140	6.5	60	2.80	340	15.9	20400
6 Arroyo Luis Cobeñas Arroyo	40	1.9	12	0.56	128	6.0	7680
7 Ramos Cobeñas Arroyo	30	1.4	12	0.56	88	4.1	5280
8 Julio Cobeñas Mayanga	83	3.9	15	0.70	205	9.6	12300
9 Jesús Cobeñas More Santos Flores	113	5.3	30	1.40	270	12.6	16200
10 Tantarico María Isabel Merino	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0
11 Sánchez Juan Elías Mío	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0
12 Chunga	275	12.9	23	1.07	277	12.9	16620

14 Juan Pablo Mío More	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0
José Domingo Mío	25	1.2	0	0.00	90	4.2	5400
15 Pupuche							
Luciano Mío	324	15.1	21	0.98	379	17.7	22740
16 Pupuche							
17 Juan Monja Arroyo	110	5.1	12	0.56	308	14.4	18480
Lorenza Milagros	30	1.4	25	1.17	75	3.5	4500
18 Monja Arroyo							
Pedro Pablo Monja	200	9.3	19	0.89	381	17.8	22860
19 Soplapuco							
Vicenta Monja	200	9.3	40	1.87	360	16.8	21600
20 Soplapuco							
21 Félix More Monja	220	10.3	93	4.35	307	14.3	18420
22 Narciso More Monja	204	9.5	38	1.78	362	16.9	21720
23 Domingo More Monja	38	1.8	6	0.28	94	4.4	
							5640
TOTAL	2140	100	443	20.70	3977	185.8	238620

Un impacto previsto en futuro inmediato, es cuando los comuneros reasentados dejen de ocupar clandestinamente las hectáreas que anteriormente les pertenecía, para el desarrollo de su actividad productiva; se eliminaría realmente el acceso al recurso que sostiene su debilitada estructura económica.

La declaración de la comunera Rosa Mio Monje: *“Yo tengo 14 años y ahorita no tenemos trabajo. Aquí nomás a lo que nos dedicamos es a la casa y ahorita para salir a trabajar está lejos. Mi papá sale temprano y llega en la noche, para trabajar allá en donde vivíamos antes, porque no hay trabajo, no se puede vivir”*; evidencia que los recursos materiales generados en el nuevo centro poblado, no permite desempeñar su principal actividad productiva; ocasionando el desempleo de la mayoría de los miembros de la familia. Siendo los jefes de familia u hombres en general, los únicos que puedan recrear su principal actividad productiva, al tener la capacidad de desplazarse amplias distancias para llegar a sus antiguas posesiones territoriales.

De lo manifestado por Alejandro Rojas Ferroñán: *“Hemos tenido otras fuentes de trabajo antes, como decir nuestras crías. Allá en mi noria, yo mantenía*

90 vacas, 70 cabras, 35 ovejos, tenía mis pieajenos sueltos en el campo. Pero hoy día como ya no lo tenemos, por lo que nos destruyeron, ya nos hemos dedicado al carbón; porque ya no tenemos cómo vivir”, es importante resaltar la implementación de nuevas estrategias para generar una productividad económica en las familias comuneras. La actividad extractiva de leña y, especialmente, la producción de carbón, no es más una actividad secundaria o terciaria; sino una de las principales estrategias de sobrevivencia ante las nuevas condiciones degenerativas de la actividad ganadera. Además, se registra una mayor importancia en la extracción de un tubérculo llamado “Yuca de monte”, que sirve de alimento para las familias y para el ganado.

Por parte de los funcionarios del PEOT, según lo que se registra en el oficio N° 209-2013-GR.LAMB/PEOT-GG con fecha del 09/08/2013, se estaban implementando como estrategia de mitigación de efectos en la producción económica de los comuneros desplazados y reasentados involuntariamente, las siguientes estrategias:

- a. Capacitación para el empleo: se venía coordinando con el Programa JOVENES A LA OBRA a fin de poder efectivizar la capacitación ofrecida a los jóvenes del caserío. En el caso específico de las mujeres, se implementó la capacitación en corte y confección; en donde, el aporte del PEOT se limitaba a monitorear la asistencia de las alumnas y al pago del profesional capacitador.
- b. Huerto comunal: se estaba por reiniciar las obras, a la espera que la empresa NETAFIM apruebe el anexo del Convenio con el PEOT que considera el cambio de equipo y de materiales, para una mejor implementación del mismo. Además, refiere que se ha previsto de la presencia policial en vista del perjuicio que causó a la obra, el señor Héctor Montalbán, quien ilegalmente ha pretendido apropiarse del área del Huerto Comunal.

Lo referido anteriormente, es un informe remitido por el PEOT a las oficinas de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque, de lo cual, se interpreta que ha dos años después de implementarse el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario en los comuneros objeto de estudio, se estaba recién coordinando y/o gestionando estrategias de mitigación de efectos en las áreas mencionadas. Estrategias con componentes y características diferentes a las actividades productivas que habitualmente desarrollaban los comuneros antes de ser desplazados; es decir, se trataba de formar nuevas capacidades y potencialidades en los comuneros para que adopten nuevas estrategias de reproducción económica.

c. Pérdida de la residencia.

La pérdida de alojamiento tiende a ser sólo temporal para las personas reubicadas. Pero su afectación es una consecuencia permanente; entendiéndolo en un sentido cultural más amplio, la pérdida de la casa de una familia de campesinos o indígenas representa la pérdida de un espacio cultural que tiende a producir alienación y privación de estatus.

En las declaraciones de los comuneros desplazados y reasentados involuntariamente, como por ejemplo de la comunera Lorenza Milagros Monja Arroyo: *“Mi casa de Pan de azúcar ha sido así pues de baritas y palitos, embarrados de barro; pero nosotros la teníamos con el sudor de nuestra frente, a como hemos podido. Llegábamos a abrigarnos con nuestros hijos, a compartir lo que teníamos en familia”*; se describe un sentimiento de pertenencia a las peculiares condiciones de la infraestructura antes habitada, consideradas un bien material que al ser construido con recursos de la zona y con el trabajo de todos los miembros de la familia, representa la interrelación entre el hábitat comunal, hábitat familiar y el modo de convivencia de las familias comuneras; además de ser el espacio en donde se reprodujo sus condiciones sociales de vida iniciales, la evolución constante de una forma de vida.

La infraestructura moderna de las nuevas viviendas habitadas no generaría sentimientos de pertenencia en los comuneros, al no mantener características relaciones similares con su hábitat familiar anterior y, principalmente, por no representar su condición de comunero campesino. Este último se debe a que el área de reasentamiento tiene como denominación de uso ser un “predio urbano” y de propiedad de la entidad pública Proyecto Especial Olmos Tinajones; es decir, el nuevo centro poblado donde se reasienta los comuneros campesinos tiene características urbanas y esta enajenado de la propiedad comunal para ser propiedad privada; con lo que se debilita el estatus de comunero campesino.

La entrega de documentos finales de posesión y propiedad de los módulos entregados a los habitantes de La Algodonera, fue uno de los principales acuerdos en que se comprometieron los funcionarios del PEOT a cumplir en una brevedad de tiempo. Sin embargo, dos años y medio después de implementarse el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, sigue siendo un acuerdo incumplido por parte de los funcionarios públicos; ocasionando en los comuneros inseguridad en la tenencia de sus nuevas viviendas y el miedo de poder ser desalojados en cualquier momento por no ser tener documentos que acrediten su propiedad.

d. Riesgo de salubridad

Cuando las condiciones sociales de vida de una población son alteradas por el desplazamiento y reasentamiento, se genera un desequilibrio en el sistema de salubridad de la comunidad; a consecuencia de un estrés psicosocial por el proceso implementado, la convivencia con nuevos vectores contaminantes que aumentan la vulnerabilidad para contraer epidemias y/o enfermedades, y el riesgo en la seguridad alimentaria (Tabla 15).

Tabla 15
Riesgo en la salubridad comunal después del proceso de Desplazamiento y Reasentamiento I

Algún familiar enfermó después del proceso de D y RI						Algún familiar no enfermó después del TOTAL proceso de D y RI			
Dolor de cabeza		Infecciones gastrointestinales		Otros					
Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%	Frecuencia	%
3	13.0	8	34.8	1	4.3	11	47.8	23	100

Después de producirse el reasentamiento de los comuneros campesinos en el centro poblado de La Algodonera; se presentaron diferentes tipos de malestares en la salud de la población. Según registra la Tabla 15, del total de encuestados, el 52.2% tuvo algún familiar enfermo después del proceso implementado; de los cuales, el 34.8% presentó infecciones gastrointestinales y el 13% dolor de cabeza.

De las causas específicas que debilitaron la salud integral de las familias comuneras, sólo se registraron tres de ellas. La primera, se evidencia en el informe de la Unidad de Saneamiento Básico de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, dirigido a la Defensoría del Pueblo de Lambayeque (Oficio N° 29602012-GR.LAM/GERESA-DESA); donde se señala que el resultado de análisis de agua residual de la localidad de La Algodonera, no cumple con la calidad estipulada en la normativa vigente; a lo cual, se añade la falta de instrumentos que usualmente se utilizaba para procesar el agua de consumo familiar, por haber sido destruidos durante el proceso de desalojo forzoso.

En segundo lugar, se tiene como causa a la inseguridad alimentaria; ocasionada por la pérdida del 79.3% del ganado, que se utilizaba principalmente para el consumo familiar, y además una pérdida económica en promedio de 20 mil nuevos soles por familia (Ver Tabla 14). Estos recursos proporcionaban los

suministros necesarios para el consumo de proteínas y calorías requeridos para el crecimiento, la producción de defensa natural y para participar en las actividades productivas. Finalmente, se tiene como causa al estrés emocional de los comuneros; el cual, alcanzó su mayor nivel cuando se produjeron los actos violentos del desalojo forzado y por las nuevas condiciones de vulnerabilidad que se presentaban por la falta de trabajo y/o de recursos que sirvieran para sustentar las principales necesidades de las familias; tal como lo describe la comunera

Vicenta Monja Soplapuco en su declaración: *“Nosotros les decíamos que paren, que nuestros hijos estaban ahí, que no podían hacer eso con nuestras cosas. Pero nada. Seguían y hasta más lo hacían. Solo nos quedó llorar y así nos quedamos... Ya en el nuevo lugar, recordábamos nuestras vidas de antes y nos poníamos tristes. Ahora nos preguntamos ¿qué será de nosotros sin trabajo y qué comer?”*

Por su parte, los funcionarios del PEOT han realizado 4 campañas de salud; la primera para incorporar a las familias al Sistema Integral de Salud (SIS); la segunda fue contra los insectos ponzoñosos; y las dos últimas campañas fueron de vacunación contra la hepatitis, el tétano y la influenza, haciendo entrega de medicamentos a los comuneros que participaron en la campaña. Estas campañas se realizaron con el apoyo de la Posta Médica de La Noria y el Centro de Salud de Olmos. Además de estar coordinando la ejecución del Proyecto de Inversión Pública (PIP) denominado “Instalación de los servicios de Atención Integral del Centro de Vigilancia Comunal La Algodonera”.

También se ha realizado una limpieza en el caserío: barrido de calles, recolección y eliminación de basura, con la participación de la población, directivos de la JAAS, JAL y la APAFA.

Las campañas de salud y limpieza fueron realizadas en los meses finales del año 2012 y la coordinación de la ejecución del PIP en los meses finales del 2013; por solicitudes reiteradas de la Junta de Administración Local de La Algodonera (JAL).

e. Afectación en los derechos humanos.

En el país no existe un catastro actualizado que limite la práctica usual de tramitar y obtener títulos de dominio sobre tierras eriazas de propiedad privada, sin que medie proceso de expropiación, bastando alegar la naturaleza de las mismas y el derecho del Estado a su dominio, privándose de manera arbitraria el derecho a la propiedad de un particular o de una comunidad indígena o nativa o campesina (siendo el caso de estudio), sin recurrir a los procesos que exigen la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El artículo 55° de la Constitución señala que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, los mismos que versan sobre el derecho a la propiedad y al uso de bienes, recogidos en los artículos 11 y 12 de la Convención Americana sobre derechos humanos, los artículos 17, 22, y 25 de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los artículos 11 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así mismo los derechos relacionados a la prevención de la salud y al bienestar contenidos en los artículos 11 y 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Frente a tales normas, la Ley N° 27172 que incorporó al dominio del Estado las tierras eriazas identificadas dentro del referido ámbito de influencia, de una extensión de 111, 656.00 hectáreas determinadas por la poligonal cerrada, señaló claramente que se debe dejar a salvo el derecho de propiedad a terceros. En dicha Ley se recoge el derecho a la propiedad dentro de los alcances del Código Civil, sin tener en cuenta su connotación colectiva y cultural contraviniendo a lo señalado anteriormente, por los diversos órganos de control del sistema internacional de derechos humanos que han precisado que la propiedad comunal es una propiedad *sui generis*, debido a que se tiene que tener en cuenta su connotación colectiva, cultural y de relación con la sobrevivencia de los pueblos campesinos y su cultura.

Incluso, la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso *Awas Tngni*, párrafo 151, reconoció que la sola posesión en base a sus propias costumbres, constituyen razón suficiente para que el Estado reconozca y proteja el derecho a la propiedad. Por otro lado, la intervención de las fuerza del orden para desplazar a la fuerza a las personas a consecuencia de la implementación de proyectos de desarrollo ha de constituir una amenaza al derecho a la vida, protegido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 3). El derecho al sustento se ve amenazado por la pérdida del alojamiento y los medios de vida –plantaciones, ganados, pesca, comercio u otros— cuando la gente se ve desplazada de su lugar habitual de residencia y sus tierras ancestrales.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, advierte también que merece ser atendido la necesidad de establecer directrices para el proceso de desalojo a fin de mitigar los daños y el sufrimiento desmesurado que provoca. La adopción de esas directrices se debe claramente al reconocimiento de las consecuencias negativas de ese proceso para los seres humanos, para la asignación de suficientes recursos para la justa indemnización y reintegración de los afectados, que deben poder aprovechar el proceso de desarrollo de modo sostenible. Como mínimo no debe ser peor que la anterior al traslado.

Dada esta premisa, lo que se reclama es básicamente que al desarrollar los reubicados la actividad agropecuaria, debe ser motivo por el cual se implementen proyectos de desarrollo con características similares a sus condiciones productivas anteriores; además de generar recursos para el auto-sostenimiento comunal.

Otro aspecto de análisis, es el aspecto presupuestal que ha sido un problema fundamental por los funcionarios del PEOT; toda vez que en el mes de agosto del 2010 el gobierno nacional otorgó una partida de 10 millones de nuevos soles al PEOT para atender necesidades variadas, siendo sólo una parte de este dinero destinado al pago de compensaciones y a financiar la construcción del nuevo centro poblado.

2.1.7. Metodología de la investigación.

En la presente investigación se recurrirá a la utilización del diseño mixto, en su clasificación de Diseño Anidado o Incrustado de Modelo Dominante (DIAC). Por lo cual, se pasa a coleccionar simultáneamente datos cualitativos y cuantitativos, con la predominancia del método cuantitativo en la guía del proyecto de investigación. Los datos coleccionados por ambos métodos son comparados y mezclados en la fase de análisis.

La fase o nivel en que se desarrolla la estrategia de investigación mixta es en la clasificación de la muestra, elaboración de instrumentos de investigación e interpretación de resultados.

Las unidades de observación se constituyen por las familias comuneras, de la Comunidad Campesina Santo Domingo Olmos, sometidas al proceso de Desplazamiento y Reasentamiento Involuntario (DyRI) por parte del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). El muestreo probabilístico se define teóricamente en el estudio como unidades domésticas –como lo define el Constructivista estructuralista de Bordin a sus objetos de estudio. —; de quienes se describirá y analizará sus condiciones sociales de vida anteriores y posteriores a la implementación del proceso de Desplazamiento y Reasentamiento Involuntario. Además, se interpretará las características e implicancias de la Política de Desplazamiento y Reasentamiento Involuntario, implementado por el PEOT en la Comunidad de Olmos. La metodología implementada tiene como objetivo lograr una visión más completa y holística del problema de estudio; es decir, obtener la fortaleza del análisis cuantitativo y cualitativo. Adicionalmente, beneficiarse de perspectivas que provienen de diferentes tipos de datos dentro de la indagación.

2.1.7.1. Operacionalización de variables

VARIABLES	DIMENSIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIÓN OPERATIVA	DIMENSIONES	INDICADORES	SUB INDICADORES
POLITICA DE DESPLAZAMIENTO y REASENTAMIENTO	Orientaciones generales que propone el Estado para trasladar obligatoriamente a una persona, familia, grupo o comunidad, con el fin de ejecutar algún proyecto de interés nacional.	Normas o dispositivos legales que regulan el proceso de desplazamiento y reasentamiento de una persona, familia, grupo o comunidad determinada; bajo programas sociales que reestructuren las condiciones de vida de los afectados.	Fundamento	Epistemológico	Complejidad
				Sociológico	Acumulación primitiva
					Estructuralismo
			Modelo legal e institucional	Legal	Tratados internacionales (Convenio 169 de la OIT)
					La constitución política y legislación del Perú
					Normatividad de las comunidades campesinas del Perú
				Organizativo/institucional	Instituciones y organizaciones del sector público encargados de la ejecución de la política.
					Políticas operacionales del BM, BID y otras organizaciones relacionadas
			Consideraciones contextuales de diagnóstico	Condiciones socioeconómicas	Condiciones sociales de vida
					condiciones económicas
				Prácticas sociales	Modos de convivencia
					Organización comunal
			Prácticas y efectos	Modalidad de intervención	Cosmovisión local
					Prácticas de convencimiento
					Mitigación y compensación de efectos
					Práctica de desplazamiento
					Práctica de reasentamiento
				Impacto de intervención	Desequilibrio en la estructura social
					Desequilibrio en la estructura de relaciones
					Desequilibrio estructura sociocultural

DESARROLLO HUMANO	Es definido como el proceso de ampliación de las posibilidades de elegir de los individuos que tiene como objetivo expandir la gama de oportunidades abiertas a las personas para vivir una vida saludable, creativa y con los medios adecuados para desenvolverse en su entorno social.	El desarrollo humano es el desarrollo que posibilita a la gente a tomar acciones para ayudarse a ellos mismos. Esto implica que las estrategias de desarrollo comienzan con las aspiraciones y necesidades de la gente pobre y se concentran en las instituciones de apoyo (incluyendo a los mercados) que son incluyentes no solo para aquellos con dinero y poder, sino también para los pobres y marginados.	Objetos de influencia	Capacidad para logra el desarrollo	Aumento de habilidades
					Aumento de oportunidades
					Agencia activa de la población
				Política Social del Bienestar	Acción social
					Distribución de responsabilidades
					Sistema de protección
				Comunidad	
				Participación	
				Desarrollo	
			Evaluación del Desarrollo Humano	Institucionalidad	Protección
					Previsión
					Asistencia
				Política social general	Orden social concreto
					Promoción de oportunidades
				Política social específica	Satisfacción de necesidades
			Fundamentos teóricos	Epistemológicos	Complejidad
				Sociológicos	Enfoque de capacidades básicas
Enfoque de Desarrollo humano sostenible					

2.1.7.2. Población y muestra

Se estima que la población total afectada por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, originado por la ejecución del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, son 39 familias. La muestra de nuestra población es de 23 familias.

Población total: 39 familias

Nivel de confianza: 95%

Error: 15%

P: 3%

Q: 5%

Muestra: 17 familias

Muestra ajustadas: 23 familias

2.1.7.3. Problema de Investigación

En una estimación del Banco Mundial, se resuelve que anualmente en el mundo no menos de 10 millones de personas entran en procesos de desplazamiento y reubicación involuntarios, como consecuencias de proyectos de infraestructura, sólo en los sectores de construcción de presas, desarrollo urbano y de transporte. Es decir, que en la década de los 90's cerca de 100 millones de personas fueron desplazadas por proyectos de desarrollo (Cernea, 1999).

A nivel de Latinoamérica, según Mejía (1999) sólo el Banco Mundial en 1995 financiaba alrededor de cien proyectos en zonas urbanas y rurales de la región de Latinoamérica y el Caribe, que se encontraban en implementación o preparación; la mayoría de ellos enfocados en construcción y mejoras de servicios e infraestructura urbana y rural, mejoras ambientales, ordenamiento territorial y manejo de cuencas hidrográficas. Este autor, calculó que más de 100.000

personas serían desplazadas por sólo diez de estos proyectos en Argentina, Paraguay, Brasil y Colombia.

Además, se le caracteriza por ser un fenómeno social que se encuentra tanto en el ámbito urbano como rural, a ser ejecutados sin antes consultar a las personas afectadas; quienes, en la mayoría de los casos, no poseen medios adecuados para su defensa judicial o algún tipo de representatividad; a utilizar mecanismos de hostigamiento, amenazas, violencia, represión y donde se proyecta planes de reasentamiento y compensación deficientemente planificados. Es curioso que en las ciudades que más se han desarrollado en los últimos años; como Buenos Aires, Córdoba, Bariloche, Curitiba, Sao Pablo, Lima, Bogotá, México DF entre otros; los desalojos individuales y masivos sean habituales.

El desplazamiento y reasentamiento involuntario causado por proyectos de desarrollo, se ha iniciado en el Perú desde mediados del siglo XX; sin embargo, éste fenómeno social fue invisibilizado por el dramático desplazamiento generado por la violencia política y económica que vivió nuestro país. Es a partir del año 2004 que, el Estado peruano, tomando de referencia a los Principios Rectores promulgó la Ley 28223, Ley sobre Desplazamiento Internos, en la cual se reconoce el estatus y la especial protección que merecen las personas que se encuentran en estas condiciones. De igual forma, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones propuso una política (PACRI) para los procesos de desplazamiento involuntarios originados por proyectos de desarrollo formulados por su sector. Sin embargo, tales iniciativas no han logrado mitigar los efectos contraproducentes que originan los proyectos de desarrollo en las poblaciones desplazadas; especialmente, en los pueblos indígenas, comunidades campesinas y minorías étnicas que se ven afectadas desproporcionalmente. Al ser grupos pertenecientes a estratos sociales políticamente marginados y desaventajados, terminando empobrecidos y olvidados.

Uno de los casos conocidos de desplazamiento y reasentamiento involuntario, en Perú, es el de la población de la Oroya; quienes fueron desplazados por un proyecto minero; y la población del asentamiento humano el Ayllu (Lima), desplazados por el Proyecto de Ampliación del aeropuerto Jorge Chávez; en ambos casos no se han tenido en cuenta una adecuada planificación del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

En la región Lambayeque, el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario más reciente (2011) se ejecutó en la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, distrito de Olmos, a consecuencia del avance de las faces que constituyen el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos o Proyecto Olmos, como también es llamado.

Los funcionarios del Proyecto Espacial Olmos Tinajones ¹ (PEOT) elaboraron y ejecutaron estrategias para el saneamiento físico de 38,000 hectáreas de la Comunidad Campesina de Olmos; dentro del cual, se encontraron los pobladores de los caseríos de Pan de Azúcar, Vingular Grande, Abrigos de Pañalá y La Algodonera.

Las relaciones entre los funcionarios del PEOT y la población afectada, inicia en el año 2007. Inicialmente, el diálogo y el buen trato es característico en los funcionarios del Estado hacia los afectados; pero a medida que las obras de infraestructura avanzan y la premura por la subasta de las tierras aumentan, los funcionarios del PEOT tratan de forzar los resultados esperados de éste proceso, el convencimiento de la población para ser desplazada “voluntariamente”.

El PEOT elaboró un Programa de Compensación y Relocalización Involuntario (PCRI) para el proceso de desplazamiento involuntario. Sin embargo, el proceso se caracterizó por su carácter violento, por tratar de imponer

¹ Órgano responsable de la supervisión, ejecución, mantenimiento y operación de las obras de infraestructura que compone el Proyecto Olmos.

condiciones a las familias candidatas a ser desplazadas, como por ejemplo: no reconocer un pago por la posesión de tierras, otorgar una compensación mínima por los bienes e infraestructura afectada, los beneficios otorgados sólo se les darán a los jefes de familia, el monto monetario otorgado como compensación no será sometido a negociación, las ofertas de trabajos y de tierras agrícolas serán otorgados después de su desplazamiento, entre otros. De igual forma, los funcionarios del PEOT procedieron a destruir sus viviendas, quemar sus cercos, enterrar sus norias (única fuente de agua), sin importar que dentro de las viviendas se encontraran niños, mujeres y ancianos. Esta población fue reasentada en un centro poblado construido por el PEOT, llamado La Algodonera; el cual, cuenta con 27 viviendas, una casa comunal, un centro educativo, un tanque elevado y un sistema de biodigestores para cada casa. Sin embargo, al poco tiempo de habitar la infraestructura de las viviendas mostró signos de deterioro, en todos los aspectos.

Del contexto antes descrito, se puede deducir la existencia de dos procesos en el desarrollo del fenómeno social de Desplazamiento y reasentamiento involuntario, a consecuencia de la ejecución de proyectos de desarrollo. Primero, el Desarraigo de la organización social existente; entendiendo que el traslado o reubicación no es en sí el fenómeno contextual—el hecho traumático que generará en decaimiento de la calidad de vida de una población—, más bien es su efecto en las estructuras de vida económica y social de la población afectada. La característica fundamental del desalojo involuntario es que origina un profundo y repentino desarraigo de los modelos existentes de organización social y, el cual, se reproduce en varios niveles: los sistemas de producción se desmantelan, se dispersan los grupos de parentescos, desarticulación de las vitales redes sociales informales que proporcionan ayuda mutua, interrupción y desorganización de los mercados locales, los sistemas tradicionales de autoridad y administración suelen perder sus líderes, alteración en el vínculo físico y psicológico con el pasado, alteración en la identidad cultural de la población, entre otros.

El segundo proceso es el reasentamiento como la reconstrucción planificada de la organización económica de la población afectada. En el plano económico, los proyectos de desplazamiento y reasentamiento cuya planificación fue deficiente en general no restablecieron, ni mucho menos mejoraron, la situación económica de la población desplazada, causando de esta forma su empobrecimiento. En el plano social, ha quedado constancia de que el desplazamiento traumatizó a las poblaciones afectadas, perturbó sus hábitos de relaciones y apoyo social y menoscabó sus mecanismos de autosuficiencia.

A consecuencia de este fenómeno, se presenta al empobrecimiento como uno de los resultados más negativos generados; el cual, se reproduce a medida que pasa el tiempo. En términos generales, el proceso de empobrecimiento que provoca el desalojo involuntario tiene a lugar a través de siete consecuencias esenciales: carencia de tierras, pérdida del hogar, desempleo, marginación, inseguridad alimentaria, morbilidad y mortalidad, desarticulación social².

2.1.7.4. Objeto y campo de la investigación

2.1.7.4.1. Objeto de la investigación: Movilidad social.

2.1.7.4.2. Campo de la investigación: Política social.

2.1.7.5. Importancia de la investigación

Es evidente que el desarrollo económico de nuestro país se está originando por la implementación de diferentes proyectos de desarrollo; los cuales, generan diferentes niveles de impacto en contextos particulares o generales, de su implementación.

² M. Cernea, Reasentamiento de población y estudios sociales.

Regularmente la implementación de proyectos de desarrollo tienen como ubicación la zona Norte y Sur de nuestro país; en donde, las condiciones sociales de vida son características de una variedad amplia de comunidades campesinas u originarias que habitan en zonas con recursos naturales importantes. Poblaciones que al ser afectadas por la implementación de proyectos de desarrollo, en muchos de los casos, maximizan su marginalidad y vulnerabilidad social, política y económica; es decir, su calidad de vida disminuye en relación a la implementación de proyectos de desarrollo que no identifican y planifican adecuadamente los niveles de impactos proporcionales a determinadas poblaciones.

Los proyectos de desarrollo que originan impactos en comunidades campesinas por medio del desplazamiento y reasentamiento involuntario, es el objeto de interés en la presente investigación. Su importancia radica en la comprensión de cómo un proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, generado por un proyecto de desarrollo, afecta las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas e institucionales de una comunidad campesina; y cómo a partir de esta comprensión se puede establecer parámetros generales para la creación o mejoramiento de una política de desplazamiento y reasentamiento involuntario aplicable en comunidades campesinas.

De este modo, contribuir no sólo a visibilizar un problema recurrente en el modelo de desarrollo de nuestro país; sino, principalmente, contribuir a generar el desarrollo integral de las poblaciones étnicas u originarias que viven en condiciones sociales de vida particulares; a partir de un contexto, en donde se vea, a los proyectos de desarrollo como una oportunidad de bienestar y no como un problema.

2.1.7.6. Objetivos de la investigación

2.1.7.6.1. Objetivo general

- Proponer un modelo de política social de desplazamiento y reasentamiento involuntario, aplicándose en contextos de comunidades campesinas, para contribuir a su particular proceso de desarrollo humano.

2.1.7.6.2. Objetivos específicos

- Diagnosticar las condiciones sociales de vida antes de la implementación del proceso de desplazamiento de los pobladores de La Algodonera, perteneciente a la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos.
- Identificar las condiciones sociales de vida generadas por el proceso de reasentamiento involuntario de los pobladores de La Algodonera, perteneciente a la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos.
- Determinar las particularidades del impacto en las estructuras sociales de vida de los comuneros campesinos de Olmos, por la implementación del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, ejecutado por el Proyecto Especial Olmos Tinajones.
- Fundamentar teóricamente la propuesta del modelo de política social de desplazamiento y reasentamiento involuntario, aplicándose en contextos de comunidades campesinas, para contribuir a su particular proceso de desarrollo humano.
- Diseñar la propuesta del modelo de política social de desplazamiento y reasentamiento involuntario, aplicándose en contextos de comunidades campesinas, para contribuir a su particular proceso de desarrollo humano.

2.1.7.7. Hipótesis de investigación

Si se propone un modelo de política social para impulsar el desarrollo en grupos humanos de desplazados y reasentados como consecuencia de la

implementación de proyectos de desarrollo social, implementado en el contexto de comunidades campesinas; basado en la teoría de la Complejidad de Edgar Morin, el Constructivismo Estructuralista de Pierre Bourdieu, la teoría de la Acumulación primitiva del marxismo y el Enfoque teórico del Desarrollo humano desde la Política social del PNUD, entonces es posible contribuir con el desarrollo humano de las poblaciones afectadas.

2.1.7.8. Diseño lógico de la investigación

Para la construcción del escenario contextual en que se desarrolla el fenómeno de estudio, se recurre a coleccionar información directa (primaria) e indirecta (secundaria) de las unidades domésticas afectadas por el proceso de DyRI y de la entidad pública que implementó el proceso, mediante encuestas estructuradas, entrevistas semi-estructuradas, revisión de documentos (actas, certificados, solicitudes, oficios, entre otros) y observación participante. Además, se incluye informes e interpretaciones de organizaciones y/o instituciones que participaron directamente del proceso en estudio.

Las encuestas aplicadas a la población de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, afectada por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, se efectuaron en el nuevo centro poblado de La Algodonera, donde fueron reubicados. Algunas de las entrevistas se aplicaron en el lugar donde habitaban anteriormente y, además, se procedió a registrar los vestigios de sus condiciones sociales de vida anteriores al proceso mencionado y las actividades que aún se venían realizando en la zona. Para lo cual, se tuvo que convivir una semana y media con los comuneros, en el nuevo centro poblado.

Por otro lado, al encontrar la complicación de no poder acceder a entrevistar a los funcionarios y profesionales del Proyecto Especial Olmos Tinajones, para registrar su percepción sobre el fenómeno en estudio, se recurrió

a la estrategia de revisar declaraciones vertidas en los medios de comunicación, informes emitidos por sus oficinas hacía la Defensoría del Pueblo de Lambayeque y a los comuneros afectados por el proceso en estudio.

Los datos obtenidos, fueron procesados mediante instrumentos cuantitativos y cualitativos de investigación. Específicamente: Atlas Ti y SPSS20, y analizados bajo la misma proporción.

III. CAPITULO II

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Fundamento epistemológico para el conocimiento del problema de investigación

3.1.1. Teoría de la complejidad

Morín concibe a la complejidad como un tejido (*complexus*: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Es decir, se interpreta la complejidad como el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre, etc. El desplazamiento y reasentamiento involuntario de los campesinos en Olmos debe ser comprendido en su totalidad compleja, quiere decir que todos sus componentes están conformando bajo un tejido *complexus*.

De esta forma, el fenómeno social de desplazamiento y reasentamiento involuntario en comunidades campesinas describe su complejidad como objeto organizado por relaciones múltiples; primeramente desde una realidad construida históricamente de relaciones externas a las comunidades campesinas como organización o institución – con paradigmas particulares – y de interacciones internas entre elementos, acciones o individuos de las propias comunidades campesinas. Al añadir, como interpretación y análisis, el fenómeno investigado – desplazamiento y reasentamiento involuntario – se contextualiza el escenario formado por hechos, situaciones, prácticas o conocimientos; incitando a ver cómo éste modifica al contexto o como le da luz diferente. Un pensamiento de este tipo se vuelve inseparable del pensamiento de lo complejo, pues no basta con inscribir todas las cosas y hechos en un “marco” u horizonte. Se trata de buscar siempre las relaciones e inter-retro-acciones entre el fenómeno y su contexto, las

relaciones recíprocas entre el todo y las partes: cómo una modificación local repercute sobre el todo y cómo una modificación del todo repercute sobre las partes.

Porque el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, implica un fenómeno social que se genera en dos subprocesos. Primero, el Desarraigo de la organización social existente; entendiendo que el traslado o reubicación no es en sí el fenómeno contextual—el hecho traumático que generará en decaimiento de la calidad de vida de una población—, más bien es su efecto en las estructuras de vida económica, cultural y social de la población involucrada. La característica fundamental del desalojo involuntario es que origina un profundo y repentino desarraigo de los modelos existentes de organización social y, el cual, se reproduce en varios niveles: los sistemas de producción se desmantelan, se dispersan los grupos de parentescos, desarticulación de las vitales redes sociales informales que proporcionan ayuda mutua, interrupción y desorganización de los mercados locales, los sistemas tradicionales de autoridad y administración suelen perder sus líderes, alteración en el vínculo físico y psicológico con el pasado, alteración en la identidad cultural de la población, entre otros. El segundo subproceso es el reasentamiento como la reconstrucción planificada de la organización económica de la población afectada. En el plano económico, los proyectos de desplazamiento y reasentamiento cuya planificación fue deficiente en general no restablecieron, ni mucho menos mejoraron, la situación económica de la población desplazada, causando de esta forma su empobrecimiento. En el plano social, ha quedado constancia de que el desplazamiento traumatizó a las poblaciones afectadas, perturbó sus hábitos de relaciones y apoyo social y menoscabó sus mecanismos de autosuficiencia.

interacciones entre los componentes emergen los nuevos comportamientos que se manifiestan en una mayor complejidad del sistema relacional creado.

Evidentemente el paradigma epistemológico de la complejidad tiene como logro el formular principios generales que gobiernan las organizaciones de los diferentes sistemas del universo, sin importar sus manifestaciones materiales o su escala. Vamos a ver que estas leyes, o principios de organización, son aplicables a toda clase de sistemas complejos, desde el ferromagnetismo en imanes hasta la propagación de fuego en bosques, pasando por los movimientos políticos, sociales o religiosos en sistemas sociales. Sin embargo, no se debe de pensar que la existencia de estas leyes universales son las únicas construcciones teóricas que pueden reconstruir determinadas realidades contextuales, sino por el contrario existen diversos constructos que pretenden explicar o comprender las regularidades de la realidad social. Es por ello, que los principios generados por el paradigma de la complejidad utilizados en el análisis del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, quedarían invalidados si se utiliza otro enfoque epistemológico.

Lo anteriormente indicado nos permite concluir que el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario implementado en la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos pasa de ser un objeto esencial/sustancial a una noción de objeto relacional, es decir, de totalidades organizadas compuesta por elementos heterogéneos en interacción. La idea de organización remite así la idea de una totalidad relativa, no cerrada, sino abierta, histórica y contextualizada. En pocas palabras, una relación contextual compleja.

Para la complejidad, todo sistema o conglomerado social contiene las perturbaciones del ambiente que lo impacta. Es útil pensar el ambiente mismo como la suma de las perturbaciones que actúan en el sistema, pues estas son las interacciones del sistema con su medio. La diversidad de estas perturbaciones es una medida de la complejidad del ambiente. Gran parte de esas perturbaciones se

originan en sistemas que son semejantes al sistema bajo consideración y, entonces, son partes de su ambiente. En el caso de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, ella tiene que acomodarse a las perturbaciones de la sociedad mayor y esta incluye a otras comunidades, en tanto mantiene interacciones relacionales con esta. Es por ello, que se debe reconocer al proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, en la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, como la perturbación externalizada de un todo relacional; es decir como parte resultante de las interacciones relacionales de la lógica reproductiva de la sociedad mayor ante la particularidad sistémica de la comunidad campesina.

La contextualización de la evolución histórica de las comunidades campesinas en el Perú— como un todo relacionado —, ha generado la construcción de dos corrientes teóricas aparentemente antagónicas: una *campesinista* y la otra *descampesinista*. Autores, como la antropóloga venezolana A. Valdez, de la vertiente *campesinista* enfatizan la persistencia de estas formas sociales, a pesar del desarrollo del sistema capitalista, y sus posibilidades de fortalecimiento como formas de producción familiar. De igual forma, los autores con la posesión *descampesinista* acentúan sus análisis hacia los procesos de descomposición y desaparición de las formas campesinas. Estas constituyen dos posiciones teóricas divergentes, pero tal vez no contrapuestas en el análisis global de la problemática campesina, ya que una enfatiza las fuerzas internas de los campesinos que les permite sobrevivir y adaptarse a las condiciones impuestas por el sistema social mayor, mientras la otra enfatiza los efectos que producen las estructuras y la dinámica de la sociedad mayor sobre la existencia actual y futura de estos sectores sociales.

El proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario es el vector generador de quiebre simétrico del sistema auto-organizado de la Comunidad campesina Santo Domingo de Olmos, propiciado su origen en la lógica reproductiva de la sociedad mayor. Es decir, los efectos e impactos del proceso de

desplazamiento y reasentamiento involuntario al tener su iniciativa en la implementación y ejecución de un proyecto de desarrollo de interés nacional, mantienen el dinamismo de las condiciones estructurales de la sociedad peruana mayor; en donde los principios, intereses y necesidades son divergentes a la particular lógica reproductiva de la comunidad campesina. Al ser interpretado, desde un enfoque teórico descampesinista, se puede encontrar patrones que caracterizan las condiciones de esta interacción relacional; iniciando con el debilitamiento en el uso de las hectáreas o tierras comunales, débil agencia política de la comunidad y la marginalidad económico, político y social de ésta.

Si contextualizamos los patrones característicos del enfoque descampesinista en el objeto fenoménico de estudio, encontramos que la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, desde sus inicios hasta la actualidad, ha mantenido problemas para el saneamiento físico legal de las propiedades comunales, aún con la existencia de programas estatales que promovían la regularización de la propiedad colectiva y en muchos otros la individual, siendo este un trabajo sumamente técnico y solo puede realizarse solucionadas las disputas por linderos que pudieran existir sobre los terrenos. Bajo éste escenario, el estado peruano estaba intentando implementar el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, el cual supone la irrigación de miles de hectáreas comunales, aparentemente, improductivas (eriazas); priorizando como estrategia de ejecución la inversión privada— para lo cual, se necesitaba de un incentivo para la empresa privada; la privatización de las tierras comunales cumplió, en parte, este papel.—. El gobierno de Alberto Fujimori trato de convencer a la directiva comunal de ceder parte importante de sus posesiones comunales para la ejecución del proyecto Olmos, pero al recibir una respuesta negativa termino por imponer la confiscación de las tierras comunales.

De este modo, se entiende que la descampesinización de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos se externaliza o materializa mediante el

proceso relacional que ha generado el desplazamiento y reasentamiento involuntario y que, a la vez, lo determina. Pasando por la carencia de recursos

(originada por su condición de marginalidad) para hacer efectiva decisiones políticas (débil agencia política) sobre la utilización o desarrollo de sus recursos naturales (debilitamiento en el uso de las tierras comunales), por parte de la comunidad, hasta la utilización del poder social para imponer decisiones políticas sobre el modo de desarrollo humano en determinadas poblaciones, por parte de la sociedad peruana mayor (particularmente, Estado y empresa privada). Resaltando las divergencias entre el interés público y el interés privado, los derechos colectivos y los privados, acciones de protección y de vulneración, entre otros.

Estos patrones característicos son los elementos catalizadores que han favorecido o acelerado las condiciones en que se ha desarrollado el proceso de desplazamiento y reasentamiento en la comunidad de Olmos.

A menos que en el análisis del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario en la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, no se considere la evolución relacional del todo y las partes que ha generado el proceso, lo inferido anteriormente quedaría desestimado.

Usualmente, en los sistemas complejos, un estímulo sobre una parte del sistema tiene efectos en otras partes también. Esto sucede porque las partes, además de interactuar entre ellas, son interdependientes. Mientras más interdependencia hay entre las partes (ya sean por procesos específicos o generales), más complejidad hay en el sistema. Entonces posiblemente el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario en la CCSDO es la condición expresada de relaciones particulares de un sistema comunal-campesino y de las estructuras sistémicas de un país, es decir es la expresión de un todo relacionado.

Los grandes proyectos de desarrollo han traído aparejados beneficios pero también inevitables impactos negativos. No se pretende cuestionar la legitimidad de ellos, lo que si quiere es mencionar que las experiencias acumuladas de la puesta en marcha de proyectos, especialmente los hidroeléctricos, que implicaron

movilizaciones humanas involuntarias, han hecho patente el drama social para los afectados, resultado de tal proceso. Todo como resultado de una interacción directa con las particularidades de desarrollo de una población determinada. Es por esto, que se debe reconocer que el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario interacciona directamente con el modo de desarrollo humano de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, desde aspectos multidimensionalmente relacionados.

El modelo de desarrollo, aun cuando se presenta en forma simple, es una construcción compleja que encierra diagnóstico, objetivos a alcanzar y procedimientos; aunque pensando para resolver los problemas de la sociedad en particular y sus integrantes, usualmente se mueve en el terreno conceptual del sistema económico. Inicialmente la economía campesina se utilizó para analizar la racionalidad productiva de las familias campesinas, en referencia a la interacción entre sus condiciones y situaciones de reproducción (social, política y cultural), y las respuestas que daban en términos de organización, gestión y planificación de sus actividades. Sin descuidar el uso de la fuerza de trabajo familiar en la parcela y fuera de ella y en actividades extra-agropecuarias, y el intercambio de productos, por trueque y comercio, se tendió a explicar la racionalidad campesina como producto del sistema de producción de las familias. Así se entendió que la lógica de producción estaba orientada a la satisfacción de necesidades de consumo familiar y de producción de las parcelas, con particularidades sociales y culturales, y en relación con el uso predominante de la fuerza de trabajo familiar, un nivel tecnológico elemental, y una dotación escasa, en la mayoría de los casos fragmentada y dispersa, situadas en las zonas agroecológicamente pobres. Además de entenderse como un conjunto de colectivos con intereses diversos sobre los que inciden de manera particular un vínculo territorial y vínculo de parentesco y residencia que configuran espacios de vida; con un territorio usufructuado familiar y comunalmente, grupos de familias identificados comunalmente, dirigentes comunalmente, interacción entre comunidades campesinas y un, limitado, reconocimiento estatal (legitimidad institucional).

De igual forma, los procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntarios— generados por proyectos de desarrollo— aplicados en comunidades campesinas o nativas, son fenómenos que ocurre en marcos temporales significativos en términos de procesos históricos, que tienden a generar evidentes modificaciones estructurales de estos sistemas sociales. En tanto que implica, la movilización de la población para el aprovechamiento del área geográfica deshabitada o saneada físicamente y, con ello, la alteración de los modos de producción económica, de convivencia familiar y comunalmente, las redes de solidaridad, los sistemas tradicionales de autoridad, las concepciones de pertenecía, las organizaciones sociales formales e informales, entre otras. Además, de la ejecución planificada de la reestructuración del sistema social, mediante estrategias de mitigación de efectos.

Para Leopoldo B. la interacción directamente proporcional con el sistema estructural de las poblaciones afectadas, se reproduce en tres dimensiones. Primeramente, en las estrategias de supervivencia de la población afectada, un concepto que abarca muchas cosas, entre ellas, cosas tales como el mapa mental de recursos aptos para ser explotados, el conocimiento tradicional acerca de cómo explorar esos recursos y las redes sociales construidas a ese efecto. Esas estrategias son conformadas a través de los procesos ajustativos y adaptativos implementados por una población dada en el proceso de definir su “nicho adaptativo” en términos de la antropología ecológica. En segundo lugar, se encuentra los mecanismos para la apropiación simbólica del medio ambiente natural y social significados asignados a objetos y paisajes, tales como montañas, grutas, ríos, etc., y a los espacios especiales resultantes de la acción social como, por ejemplo, cementerios, lugares sagrados y sitios de culto de diferentes tipos. Y por último, el sistema de status y relaciones sociales que definen tanto la interacción efectiva entre un grupo y otros, así como su auto percepción. Este sistema incluye no solo la distribución tradicional de “poder social” entre grupos e individuos, sino también las cuotas “percibidas” de “agencia” que se atribuyen.

El proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario no solo ha de mantener una interacción con la producción material de la acción individual y colectiva de la comunidad a ser afectada, sino también con las dimensiones simbólicas o subjetivas que recrea su contexto y que determina la externalización de las acciones propias.

Esto se puede evidenciar en múltiples casos, a nivel mundial; por ejemplo, en Paraguay, la represa Yacyretá (Argentina-Paraguay), obligó a migrar a numerosas familias guaraníes de la conservativa parcialidad Mbya, que comprendía la isla de Mba`epu-Yacyretá y la tierra firme cercana; lugares que en el pasado fueron el ámbito de un asentamiento ahora eran sacralizados en la memoria colectiva. Sólo unos pocos aceptaron ser relocalizados, ya que aún antes de ser obligados a ello, abandonaron la isla por considerar que estaban siendo violadas las sagradas normas del estilo de vida que constituye el rasgo fundamental de su identificación étnica. Como consecuencia de la tenaz y centenaria voluntad de preservar su autonomía política y cultural (lo que los obligo a migrar), no figuran en las estimaciones censales de los afectados por las obras, por lo que no se los considera objeto de ningún tipo de compensación por las pérdidas sufridas. Generando finalmente, carencia de tierras productivas, pérdida del hogar, desempleo, inseguridad alimentaria, desarticulación social y morbilidad y mortalidad en adultos y niños de esta comunidad. (Bartolomé: 1983).

Los caseríos pertenecientes a la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, afectados por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, guardan modos particulares de desarrollo humano del ámbito rural. Con estructuras particulares de producción económica, de convivencia, identidad, ideología, organización e institucionalidad de la acción individual y comunal, que son modificados en relación a la ejecución de la política de desplazamiento y reasentamiento. Modificaciones generadas por la interacción de los componentes de la política con los patrones característicos de desarrollo humano de la comunidad campesina. Estas interacciones se evidencian, en parte, cuando se

describe que las familias comuneras han perdido sus viviendas, hectáreas de producción, norias, corrales, ganados y en conjugación con las limitaciones de las condiciones sociales de vida que persisten en la nueva zona de reubicación.

Es por ello que se puede concluir que el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, ejecutado en los caseríos de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, interacciona directamente y multidimensionalmente con las características particulares de desarrollo humano de ésta población. Además, las características de la interacción entre los componentes del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario con las características de desarrollo humano de las familias comunales, determinarán el nivel o grado de afectación que se generará en las condiciones sociales de vida de la población mencionada.

3.1.2. Teorías sobre los procesos sociales relacionados con el problema de investigación

El desplazamiento forzoso y/o el reasentamiento de grandes números de personas causados por la construcción de grandes represas hidroeléctricas, si bien pueden ser considerado como un fenómeno típico del siglo XX, está lejos de constituir un hecho del pasado y acumula un lamentable registro de consecuencias negativas, incluyendo la violación de los derechos humanos básicos. Mundialmente, millones de personas se han visto desplazadas de sus hogares tradicionales, sin que recibieran compensaciones adecuadas, e inclusive siendo víctimas de violencia física.

3.1.2.1. Teoría de la acumulación primitiva

La historia ha descrito al desplazamiento y reasentamiento involuntario como un fenómeno con diferentes causales, pasando desde factores naturales

(inundaciones, terremotos, sequías, etc.) hasta sociales y demográficos (guerras, sobrepoblaciones, conflictos sociales, pobreza, etc.), en donde las personas son obligadas a abandonar sus hábitos de desarrollo.

Desde una percepción marxista, Arturo Escobar concibe como mérito a Marx el haber formulado la primera teoría del desplazamiento en relación con la historia de la modernidad capitalista. Encontrando la configuración de su argumento en la teoría sobre la acumulación primitiva, exhibiéndose al desplazamiento a gran escala como el factor que desarraiga a los campesinos de sus tierras productivas, bajo la causal de una apropiación externa.

Uno de los autores que mejor interpreta las obras del marxismo es David Harvey, quien explica que en la concepción de Marx la acumulación originaria revela un rango amplio de procesos. Estos llegan a incluir la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzada de las poblaciones campesinas; generando la conversión de diversas formas de derechos de propiedad (comunales, colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes. Es decir, se da un proceso de enajenación de la propiedad comunal o colectiva mediante un proceso de mercantilización y privatización de estas, que han de conjugar su originalidad en condiciones políticas, económicas y socialmente determinadas.

Harvey diferencia como modalidad general de reproducción del capital a la acumulación por desposesión que apunta a la expansión por despojo sobre campos fronterizos a la matriz capitalista. Ya sobre ámbitos internos del capitalismo, como la privatización de tierras, servicios y bienes públicos del Estado, ya sobre ámbitos externos a él, como despojos legales o facultades de patrimonios de uso común de tribus, etnias, comunidades, cooperativas. En tal sentido, la acumulación por desposesión será el momento de la economía política propiamente dicha.

En tal sentido, las comunidades campesinas se han visto afectadas en la posesión de sus territorios, proporcionalmente, relacionada con el avance de la modernidad. El Banco Mundial (1994) estima que tan sólo en el período 1986-93, entre 90 y 100 millones de personas fueron desplazadas en asociación con proyectos de desarrollo y que aproximadamente diez millones se ven involucradas en tal situación anualmente. Tan sólo en China, el número de personas desplazadas por represas es estimado en más de 10 millones para el período 1950-89. En la India post independiente, al menos 14 millones de personas han sido desplazadas por represas entre 1950-80 (Leopoldo: 1985). Las previsiones señalan que en las próximas décadas más y más sociedades de agricultores ribereños o, específicamente, del ámbito campesinado, que se relacionan con tierras altamente productivas, se verán afectadas por nuevos embalses o proyectos de desarrollo que conlleven a la concentración de tierras.

El proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, implementado en los caseríos de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos por parte del Proyecto Especial Olmos Tinajones, posiblemente sea parte de la lógica reproductiva de la acumulación de capitales o acumulación originaria; considerando un análisis general, donde las tierras posesionadas por los comuneros son confiscadas por el Estado peruano (enajenadas) con el fin de integrarlas al conjunto de hectáreas que serán subastadas y privatizadas ante instituciones o personas jurídicamente existentes, externas a la comunidad; como parte de la ejecución del Programa de desarrollo denominado Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos. Para lo cual, se ha requerido desarraigar a los campesinos de sus tierras productivas (saneamiento físico legal) mediante el acondicionamiento de los factores legales (decreto supremo 017-99-AG, modificaciones constitucionales para incentivar la inversión privada, entre otros), políticos y sociales; minimizando el derecho a bienes comunales ante el derecho de propiedad exclusiva.



Figura 3. Teoría de la acumulación primitiva

Estos factores nos permiten describir la lógica reproductiva de la acumulación, de porcentajes significativos, de capitales a consecuencia del debilitamiento de los derechos de auto determinación de las comunidades campesinas para con sus recursos naturales, la enajenación de estos y la afectación desmedida de sus estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, al menor costo y tiempo posible.

El despojo del patrimonio de uso común de la población de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, mediante un proceso de mercantilización y privatización de estas, se conjugo su originalidad en las condiciones desprovistas de lo político, económico y sociales en la población afectada ante la implementación de un proceso externo. Entendiendo que el 92% de la población no tenía estudios secundarios concluidos, no contaban con el respaldo de la directiva comunal, no tenían una organización jurídicamente reconocida, no contaban con recursos económicos, una débil capacidad para relacionarse externamente de la comunidad, entre otras cosas; fueron unas de las variantes del

escenario social que contribuyeron a la imposición de las disposiciones de un marco económico político externo a las estructuras comunales.

3.1.2.2. Teoría del Constructivismo Estructural

El análisis del desplazamiento y reasentamiento involuntario deben de ser concebidos como un proceso social y no como fenómeno aislado y singular; proyectado en un espacio temporal determinado, donde su estructuralidad — compuesta por actores sociales, relaciones, intereses, objetivos explícitos e implícitos, recursos, necesidades, etc. — puede adoptar, y de hecho adopta, diferentes configuraciones. Entre estas configuraciones, se describen implicancias políticas que conjugan factores estratégicos como el “poder social” y su distribución, así como la derivación de la “agencia” utilizada por sus actores sociales. Las implicancias políticas determinan la naturalidad del proceso político y los impactos que han de sufrir sus agentes o actores sociales participantes. Todo aspecto técnico o tecnológico que afecte directamente la multiplicidad de actores sociales con intereses igualmente diversos, se convierte en un componente del “campo político”; es por ello, que el desplazamiento y reasentamiento involuntario es considerado como producto de ese proceso político y debes ser estimado con esa configuración.

Para Pierre Bourdieu, tanto en el “campo político” como en el “campo social” general, se estaría determinando su lógica reproductiva con la posesión de bienes de capital; los cuales, otorgan poderes desiguales que son como fuerzas que en funcionamiento caracterizan relaciones con los otros. Por ejemplo, los capitales económicos, culturales, de conocimiento o, incluso, religiosos definen las posiciones de los agentes sociales en las relaciones con los otros. Además, plantea que las relaciones entre quienes forman parte de una estructura social son relaciones de lucha y de dominación, entre y de agentes sociales que ocupan posiciones desiguales y que entre ellos se relacionan a partir de esa desigualdad, algunos están arriba, otros abajo, otros en el medio. No son estructuras simples a

simple vista porque las distancias entre las posiciones, construidas en el papel, son distancias sociales que no necesariamente coinciden con las distancias en el espacio geográfico.

Es por ello que, la eficiencia de un proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario no depende únicamente de una adecuada planificación e implementación. Sino la consideración de factores correlacionales de “poderes de capital” son sustanciales para caracterizar y analizar el proceso, con agentes sociales manejando o controlando de alguna manera los medios legales, administrativos o de fuerza, que puede determinar la obediencia de otros sobre su voluntad y resignar su voluntad propia. De allí que resulte crítico para el logro de resultados positivos en un proceso de reasentamiento el hacer que el “poder” sea accesible para los afectados, especialmente para los económica y socialmente marginados. Y central para este objetivo es la manera en que se “negocie” y conduzca el proceso de reasentamiento, para lo cual se requiere no sólo provisiones para el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de la población afectada, sino también el establecimiento de mecanismos transparentes y efectivo para la defensa de sus derechos civiles.

Los poderes de capital característicos en los comuneros campesinos de Olmos, especialmente el capital económico y el capital cultural, los han definido en una posición inferior en el espacio social general, principalmente en comparación con los poderes de capital del Proyecto Especial Olmos Tinajones; lo cual, ha determinado quien ejerce mayor dominación en las fuerzas de relación durante el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. Las estructuras externas objetivas de los comuneros afectados mantuvieron inicialmente la tendencia a hacer lo que corresponde a las posiciones que ocupaban; es decir, acceder ante la presión de los medios administrativos, legales y de fuerza de los funcionarios del Proyecto Especial Olmos Tinajones sin prestar mayor resistencia a su condición. Sin embargo, requerir la intervención de instituciones u organizaciones no gubernamentales, por parte de los comuneros campesinos, en

el proceso de afectación simbolizo una reacción contraria a su condición de dominación, entendiéndose como estrategia para alterar las fuerzas en las relaciones con los funcionarios públicos; lo que Bourdieu categoriza como “milagro sociológico”.



Figura 4. Teoría del constructivismo estructuralista

Estas aseveraciones nos hacen deducir que resulta evidente que los procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario, derivadas de proyectos de desarrollo, no se configuran como un fenómeno social coyuntural sino estructural. Los problemas sociales generados tienden a ser más complejas en los contextos de las comunidades nativas, indígenas o campesinas, en tanto que constituyen campos culturales, sociales, económicos y políticos alternos a los estados y agencias que llevan a cabo los proyectos, aunque tradicionalmente han sido tratados en formas muy poco respetuosas de su diversidad. Estas malas prácticas ha incrementado el dramatismo del impacto social sobrellevado.

Son hoy en día sobradamente conocidos los resultados contradictorios de las grandes represas en términos de desarrollo social regional. Mientras que

algunos de sus logros (generados de energía, riego permanentemente) promueven el desarrollo de ciertos grupos y regiones; los sectores más pobres de la población (indígena, campesinado tradicional, marginados urbanos), son quienes ceden sus tierras para las obras y quienes menos o ningún beneficio obtienen de ellas. En ciertos casos, verdaderos ejemplos de autoritarismo, negligencia y mala planificación, como el de Cerro de Oro en México, los indígenas desplazados han resultado víctimas y no beneficiarios del proyecto de desarrollo; ya que perdieron sus tierras ancestrales, involucionaron económicamente, y entraron en un creciente proceso de pérdida cultural y descaracterización étnica, que puede ser conceptualizado como etnocidio (Bartolomé: 1990)

Desde el constructivismo estructural, se evidencia que estos proyectos de desarrollo representan fenómenos objetivos, cuyas manifestaciones concretas suponen una de las mayores evidencias tangibles de la capacidad humana para transformar la naturaleza. Sin embargo, los aspectos subjetivos influyen considerablemente en la ejecución de dichos proyectos, a pesar de que raramente son tomados en cuenta dentro del análisis global de los procesos sociales integrados.

Otro de los momentos del análisis social, es según Bourdieu, el subjetivista, la que se ocupa de la que denomina estructuras sociales interiorizadas o subjetivas, lo social hecho cuerpo. Dichas estructuras dan lugar a la existencia del *habitus* que funciona como principio de “generación y percepción” de las prácticas sociales y que se estructura como un conjunto de disposiciones.

Estas disposiciones se construyen e interiorizan a partir de las posiciones ocupadas en el espacio social y en los campos particulares, en un proceso que no es súbito sino prolongado y supone trayectorias en esas posiciones. Supone el paso del tiempo. Señala Bourdieu: “El habitus es a la vez un sistema de esquemas

(principios) de percepción y de apreciación de las prácticas. Y, en los dos casos sus operaciones expresan la posición social en la cual se ha construido”.

Estas estructuras internas, subjetivas, están compuestas por un conjunto de disposiciones relacionadas entre sí, disposiciones a ver, a pensar, a gustar, a sentir, etc., más de una manera que de otra lo que es y lo que no es para uno, lo que es posible y lo que no es posible según nuestra posición.

Dentro de la mayoría de los grandes proyectos de desarrollo, que utilizan infraestructura, encontraremos esencialmente (pero no únicamente) dos grupos de agentes sociales que interactúan, básicamente constituidos por el personal a cargo de las obras y por el conjunto de personas afectadas por las obras. Ambos grupos generan representaciones colectivas de sus circunstancias, las que tiende a configurarse en términos de lo que podríamos denominar como ideología y contra-ideologías respectivamente.

Al antropólogo brasileño Gustavo Lins Ribeiro, ha caracterizado con singular claridad algunas de las manifestaciones ideológicas del personal de los proyectos, entendiéndolas como un proceso de legitimación que articula varias construcciones ideológicas. La gran magnitud de los proyectos (el "gigantismo"), los hace aparecer como necesariamente positivos, en la medida que ofrecen numerosas oportunidades laborales. Pero al mismo tiempo generan lo que define como una *ideología de redención*, basada en la noción de progreso que hace aparecer al Proyecto como una expresión normal y deseable de la trayectoria histórica del país o de la región. Los protagonistas de estos procesos se perciben entonces como verdaderos *pioneros*; individuos excepcionales construyendo una obra excepcional contra el desafío de la naturaleza y en pos de un futuro mejor. En algunas oportunidades tal vez esta ideología se puede basar en razones atendibles, pero uno de sus resultados no deseados es considerar a los críticos como traidores a una gran causa nacional, y a los afectados y a sus demandas

como a enemigos y obstáculos para su realización. En más de una oportunidad, y en distintos países y obras, hemos podido apreciar que los afectados eran percibidos como un grupo decididamente alterno, como un Otro, cuyas conductas y propósitos responden a intereses oscuros y no entendibles: “les estamos dando cosas mejores que las que tenían antes y todavía protestan”.

Del otro lado de la moneda se ubican las construcciones ideológicas de los afectados. Resulta frecuente que las obras sean percibidas como una agresión, tanto individual como social, basada en argumentaciones no siempre entendibles y que responden a fines diferentes a los que argumentan sus responsables. Pero las presas no sólo son vividas como una agresión sino también como una transgresión: como una violación tan severa del orden de la naturaleza, que incluso requieren de prácticas sacrificiales protectivas para poder llevarse a cabo. Estos factores "subjetivos", que suelen ser minimizados por los planificadores y que tan significativos son para un antropólogo, tienden a constituirse en motivadores de conductas colectivas en contra de las obras; llegando con frecuencia a influir ideológicamente en la estructuración de los movimientos de oposición a las relocalizaciones.

La importancia del Constructivismo estructural conlleva su interpretación en que las prácticas humanas están estructuralmente abiertas a la construcción, a la invención, al cambio, y que esa apertura está presente en cada situación que obliga a los agentes a tomar decisiones. Dichas decisiones dan lugar a prácticas concretas que modifican la estructura objetiva misma, ya que quienes realizan las prácticas y construyen son los mismos agentes que ocupan posiciones, y establecen relaciones. El entendimiento constructivista estructural del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario contribuiría en la formulación de estrategias de mitigación acondicionadas. Entendiendo el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario bajo el enfoque teórico del constructivismo estructural, se hubiera interpretado las dimensiones relaciones entre los agentes, las construcciones estructurales y otros factores que

determinarían la eficiencia de un proceso de mitigación de efectos. Es por ello que, de considerarse otro enfoque teórico en el análisis del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario se invalidaría los principios generados.

3.1.2.3. Enfoque teórico del Desarrollo Humano desde la Política Social

La definición académica de la Política social parece ser un problema para las ciencias sociales. Abandonadas las viejas referencias a la *Sozialpolitik* germana, se sucede contenidos explicativos diversos, en función del campo propio objeto de estudio, de su origen intelectual, de sus usos ideológicos, de sus áreas de intervención. Así encontramos definiciones diversas: Política social, Políticas sociales, Política de la sociedad, Bienestar social; también dimensiones de actuación más o menos amplias (desde la educación hasta el sistema sanitario); o podemos atisbar conflictos genéricos en su génesis o gestión (derecho objetivoderecho subjetivo, competencia del Estado-Papel de la sociedad, poder centralautonomía regional, nivel contributivo-nivel asistencial, etc.). No obstante, podemos apuntar una serie de elementos comunes a toda noción teórica de Política social, siguiendo la definición institucional de la PNUD por medio de R.M.

Titmuss: “intervención pública con unos instrumentos, hacia unos objetivos y en el marco de un determinado modelo de Estado, el Estado social”

La política social puede definirse, en primer lugar, como una mediación histórica y epistemológica, entre la economía (el bien-estar) y la política (el biencomún) ante las fracturas sociales emergentes que provoca su dialéctica conflictiva o “procura existencial”, que originalmente se concretaron en el llamado “problema obrero” y que en el siglo XXI se engloban bajo el “desarrollo humano integral”. Una forma que concreta la mediación señalada y se funda para superar dicha fracturas sociales a través del reconocimiento jurídico de un orden social concreto (Política social general), y de la satisfacción de las necesidades y

oportunidades vitales de una población por medio de un conjunto de bienes y servicios (Política social específica). Y en tercer lugar, la Política social se concentra en un sistema jurídico e institucional de protección, previsión y asistencia de ciertas necesidades y oportunidades vitales determinadas por el orden social vigente, mediante dos grandes instrumentos:

- a. Garantía de ciertos niveles y medios materiales de existencia (Bienestar social)
- b. Fomento y apoyo a la realización personal del hombre (para alcanzar la justicia social)

Así podemos subrayar como elementos generales de toda manifestación de la Política social lo siguiente: generada en una época histórica concreta, determinada por una decisión política, realizada jurídicamente, con un estatuto científico concreto, e institucionalizada a través de dos niveles:

1. Como *Política social general* se configura, de forma general, en una “Política de la sociedad”, fundada en “formas de intervención pública en la vida social para resolver determinados problemas o cuestiones sociales”. En esta dimensión, la Política social es entendida como “la forma política del Estado social”; aunque abierta a modelos paraestatales en su gestión; en sus dos finalidades y en sus dos medios.
 - a. En sentido material, el fin de Política social pretende alcanzar el *Bienestar social*, siendo su medio la *reivindicación* sobre la protección, formación, integración y seguridad social.
 - b. En sentido formal, el fin de la Política social es la realización de la Justicia social, y su medio de derecho social que trata de formalizar el contenido mínimo del Bienestar social, englobando las “tres justicias clásicas”: conmutativa, distributiva y legal.

2. Como Política social específica se desarrolla en una “política de servicios” orientada a satisfacer necesidades y derechos ciudadanos concretos. En esta dimensión se ciñe a las diferentes políticas que tienden a gestionar la intervención pública en la vida social, que desarrolla la sociedad política, mediante dos medios:
 - a. Estado asistencial e interventor: suministro de servicios sociales que atiendan las necesidades materiales y las oportunidades vitales, reconocidas jurídicamente y establecidas administrativamente, en los seis sistemas de “protección social”: educación, vivienda, sanidad, mantenimiento de los ingresos de los trabajadores, formación para el empleo y servicios sociales generales.
 - b. Sociedad del Bienestar: conjunto de programas y servicios ofrecidos como “derechos sociales” por la administración pública, en colaboración activa de los movimientos sociales, la iniciativa privada o el Tercer sector, en busca de la “integración” colectiva.

El proceso de Desplazamiento y reasentamiento involuntario, implementado por el Proyecto Especial Olmos Tinajones en la Comunidad Campesina de Olmos, fue estructurado técnicamente bajo la denominación de Plan de Compensación y Relocalización Involuntarios (PCRI); cuyas características sustentan el argumento que la describe como un proceso inmerso en un marco político. Teniendo en cuenta que todo aspecto técnico o tecnológico que afecte directamente la multiplicidad de actores sociales con interés igualmente diversos, se convierte en un componente del “campo político”.

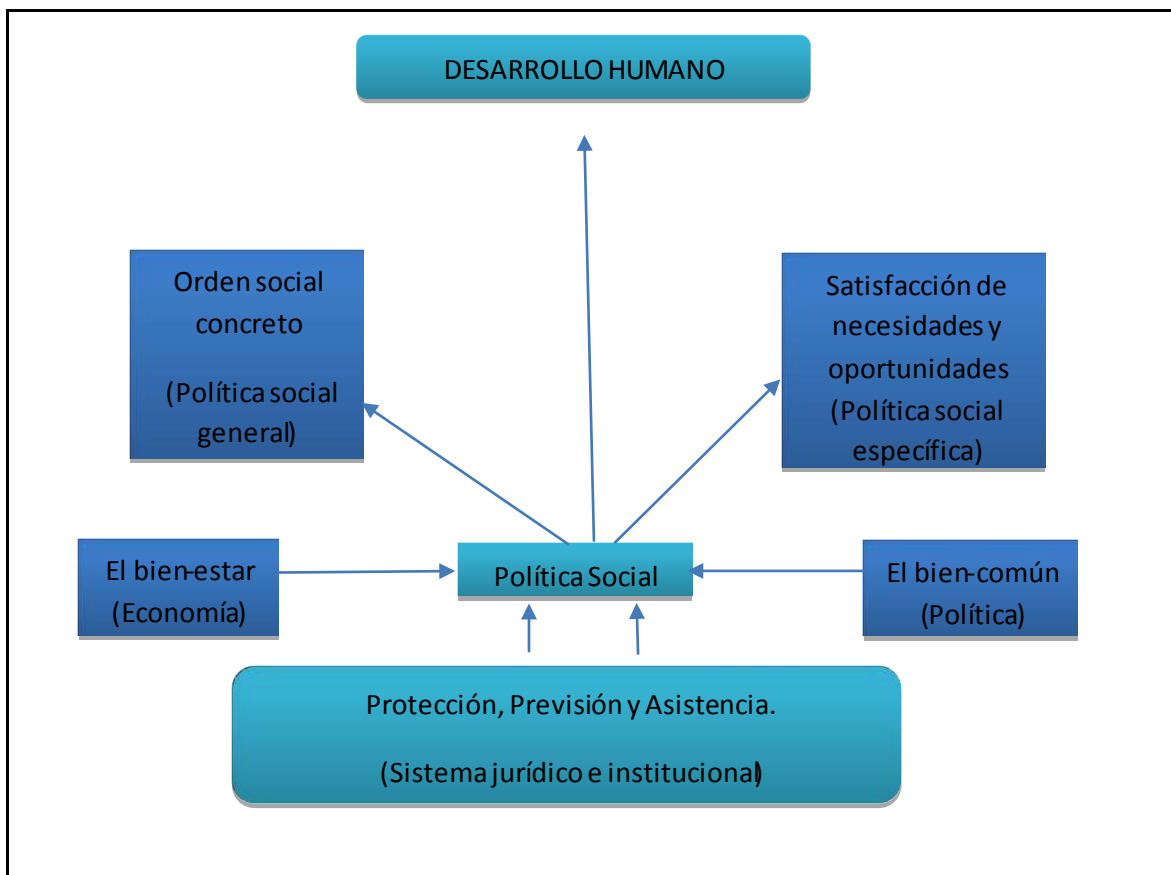


Figura 5. Política social como instrumento del desarrollo humano.

A la “procura existencial” o dialéctica conflictiva originada por la fractura social que representa la implementación del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario –generada a la vez por la ejecución de un proyecto de desarrollo (componente económico)—, al reconocerle jurídicamente un orden social concreto, la satisfacción de necesidades y oportunidades vitales a la población afectada por medio de un conjunto de bienes y servicios, y a la previsión y protección de la misma; se estaría reconociendo las características de una Política social que se implementa ante un proceso social determinado.

Los objetivos del Plan de revertir los perjuicios que se ocasionaría, de tal manera que la situación socioeconómica de la población, sea similar o mejor a la que tenían antes de la ejecución del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, y las cuestiones operativas para mitigar mencionados efectos negativos; representan la intencionalidad de un Estado Interventor y el fin de una

Sociedad del Bienestar, es decir características de los medios de una Política social específica orientada a satisfacer necesidades y derechos ciudadanos concretos.

La organización, y en este caso la comunidad como símbolo y realidad solidaria, han de participar del papel mediador de la Política social, ante las disfunciones del Mercado (lo económico) y la crisis de la Democracia (lo político).

Una “mediación político-social” emergente que sitúa al desarrollo humano sostenible como cuestión social primordial, y que busca en la comunidad el fundamento para la racionalización y mejora de los seis grandes sistemas de protección social que conforman el estado de Bienestar (enseñanza, sanidad, vivienda social, fomento de la ocupación, garantía de ingresos mínimos y servicios sociales personales).

Pero este proceso conlleva a que se integre nuevas categorías a la teoría de la actual Política social del Bienestar y al marco conceptual que la legitima, desde las categorías de la complementariedad, y que inciden en profundizar en la necesidad de un nuevo “sistema mixto” impulsado por tres claves:

- a.** La comunidad: a través de una nueva filosofía de la acción social (incorporando nuevos y diferentes agentes sociales, en especial a los comunitarios).
- b.** La participación: mediante alternativas de distribución de responsabilidades en la producción de servicios en la participación pública y en la representación político-social.
- c.** El desarrollo: por medio del análisis pormenorizado y sistemático del sistema de protección social (en la triple esfera de oportunidades, amenazas, disfunciones).

Estas categorías sólo poseen un significado dentro de un proceso amplio de transformación de la estructura de protección social, integrando los avances del modelo “residual” y del “institucional” de las políticas sociales en el sistema “mixto”. Así, del modelo residual se puede poner en valor de la familia y del propio mercado en la generación de redes alternativas de protección social; del modelo institucional, mientras, se puede subrayar la responsabilidad principal del Estado en el reconocimiento como derecho objetivo de ciertas prestaciones y derechos sociales. Con ello se puede fundamentar un “modelo mixto” que valoriza el legado a la Administración social nacida en el viejo Continente, y sus logros institucionales en el campo de la protección y previsión social (las políticas sociales generales, y los servicios sociales específicos y universales, para cubrir las necesidades de seguridad, salud, educación y vivienda). Un argumento que incide, en el nuevo siglo, en tres aspectos no siempre valorados desde una economía reducida al mero mercantilismo y una política sometida al poder de los partidos:

- a. El desarrollo humano sostenible (no sólo material)
- b. El papel central de la comunidad (no sólo del individuo)
- c. La protección social fundada en las responsabilidades (no sólo en los derechos)

Estos son los elementos centrales de la Política Social del siglo XXI, donde se configura como un “espacio de libertad”, donde se limita el Estado, se restringe el Mercado y se impulsa a la Comunidad; para ello se revalorizan públicamente las solidaridades sociales, la participación ciudadana y la responsabilidad social mediante su institucionalización. Así se redefine las posiciones teóricas de la Política social: paradigmas de partida, mecanismos institucionales, agentes sociales, sistemas de control y evaluación; y con ello se pretende lograr una interacción real:

- a. Entre el sector privado y el sector público en el desarrollo de “lo social”

- b. Entre las necesidades sociales y las posibilidades de gasto, al integrar en la financiación externa y en la producción interna de los “servicios sociales” a todos los miembros de la comunidad económica y política.

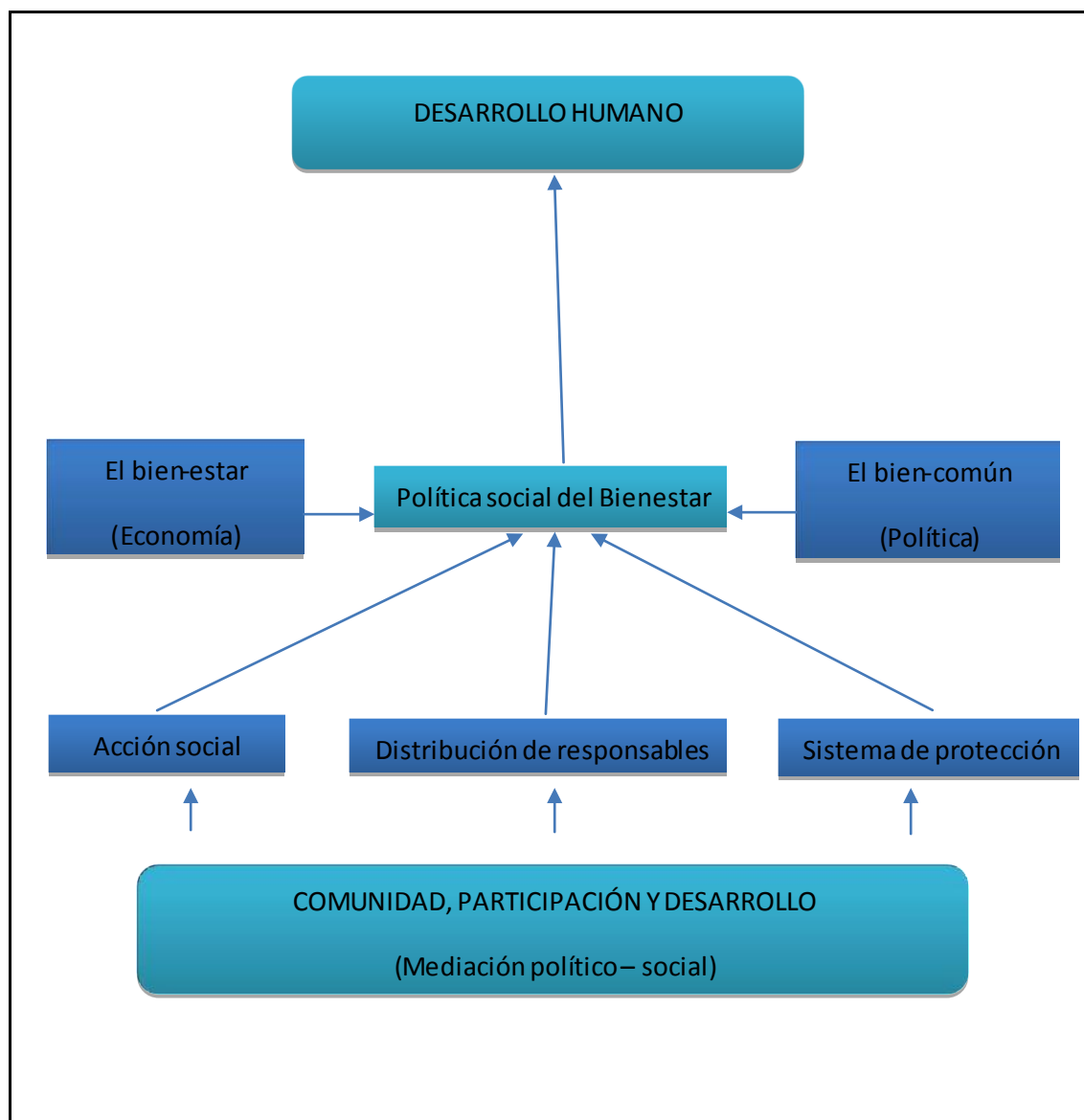


Figura 6. Sistema mixto de la política social del bienestar.

Los caseríos de La Algodonera, Abrigos de Pañala, Pan de Azúcar y Vinguar Grande, afectados por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, poseían una construcción social, cultural, política, económica e

ideológica particularmente determinados por la producción material de la acción individual y colectiva y, además, de las dimensiones simbólicas o subjetivas históricamente reconocidas y desarrolladas. El conocimiento de los comuneros de su estructura social particular sería el eje fundamental para desarrollar alternativas de reconstrucción de su estructura social, después de ser afectados por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

Considerar el conocimiento de los comuneros para generar alternativas eficientes en la reconstrucción de su propia estructura social, estaría determinada por las estrategias de participación de los comuneros (a nivel individual y comunal) en el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. Entendiendo a la comunidad (símbolo y realidad solidaria) y su participación como el papel mediador de la Política social a implementarse ante las disfunciones del Mercado (Proyecto de Desarrollo- lo económico) y la Democracia (gestión del Estado para generar Desarrollo Humano sostenible a toda la nación por igual-protección social fundada en las responsabilidades).

Sin embargo, las operaciones técnicas implementadas por el Proyecto Especial Olmos Tinajones, se han caracterizado por sus importantes limitaciones en las estrategias de participación de los afectados en el proceso de planificación, ejecución y evaluación del Plan de Compensación y Relocalización Involuntarios. Evidenciándose en que el 78% de la población afectada se enteró por primera vez que sería parte del proceso por medio de comuneros vecinos del distrito, de concluir los diálogos y negociaciones de forma prepotente y amenazante, el haberse calificado a la compensación económica de los bienes afectados como irrisorias, de violenta y abusiva en el desplazamiento, y como deficiente el proceso de reasentamiento.

El proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, implementado por el PEOT, evidencia su deficiencia al no concretar un sistema jurídico e institucional de protección, prevención y asistencia de ciertas necesidades y

oportunidades vitales determinadas por subprocesos que garanticen ciertos niveles y medios materiales de existencia y por el fomento y apoyo a la realización personal del comunero (para alcanzar la justicia social).

La participación social no se ha de limitar a los agentes sociales directamente involucrados para consolidar alternativas de desarrollo humano después de ejecutarse el proceso en estudio, sino además de organizaciones y/o instituciones especializadas en determinados aspectos del proceso de afectación a desarrollarse. Es por lo cual, los comuneros afectados tuvieron la reacción natural de solicitar la intervención de instituciones y organizaciones externas (INDER, Amnistía Internacional Perú, Defensoría del Pueblo, entre otros.) para que generarán nuevas alternativas ante el negativo escenario social concebido. La intervención de instituciones y/u organizaciones externas a la entidad encargada de la implementación del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, contribuye a entrever mecanismos-institucionales alternos para generar consenso entre las partes involucradas directamente en el proceso; propiciando la transparencia del proceso, el dialogo fluido e informado, los acuerdos consensuados por los intereses y necesidades de los agentes intervinientes, la participación activa de la comunidad, la salvaguardia de la integridad de los más vulnerables y la fiscalización del cumplimiento de las funciones de los organismos estatales en relación al proceso.

La intervención del Proyecto social de desarrollo causante del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, implementado en la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, ha visibilizado una realidad social marginal y de vulnerabilidad en la comunidad intervenida. Lo cual, debió ser un factor condicional para generar una realidad social contraria a la encontrada mediante alternativas de desarrollo humano; entretejiendo las necesidades sociales de una población afectada por determinado proceso y las posibilidades de gasto, al integrar en la financiación externa y en la producción interna de los “servicios

sociales” a los miembros de la comunidad económica y política; es decir reproducir una sociedad de bienestar.

Sin embargo, de forma concluyente se inferir que el Proyecto de desarrollo (Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos) implementado no representa una Política social del Bienestar en tanto que no cumple con las características de las categorías complementarias de un “sistema mixto”. Donde la comunidad no es considerada bajo una filosofía de acción social en la distribución de responsabilidades en la producción de servicios en la participación pública y en la representación político-social del social. Es por ello que, de considerarse otro enfoque de Política social en el análisis del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario se invalidaría los principios generados.

El desarrollo humano es el componente trascendental de la Política social; definiéndola como *“el proceso de expansión de las oportunidades del ser humano, entre las cuales las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimiento y lograr un nivel de vida decente”*. Además que *“supone la expansión de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables; y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten. Las personas son los beneficiarios e impulsores del desarrollo humano, ya sea como individuos o en grupo”*.

El núcleo constitutivo del desarrollo humano se encuentra en la capacidad de cada sociedad para definir y llevar adelante su futuro, lo que comporta un proceso colectivo de funcionamiento, y que éste responda a objetivos comunes propios del desarrollo. Esta definición enfatiza la importancia que la dimensión colectiva tiene en la propuesta del desarrollo humano, en dos sentidos:

- a. El primero, que el bienestar colectivo tiene un valor por sí mismo, no solamente como instrumento para conseguir el bienestar de las personas;

- b.** El segundo, que la dimensión colectiva supone prestar atención a las relaciones que se dan entre los distintos agentes, individuales y sociales, en la definición de sus objetivos y en la forma de alcanzarlos. El desarrollo consiste en el funcionamiento adecuado de todos los agentes involucrados en el proceso común de decisión sobre su futuro.

En otras palabras, no hay desarrollo si no hay la capacidad de poner en marcha un proceso colectivo. Por eso las relaciones entre los agentes resultan cruciales. No es posible pensar en capacidades de relación fuertes sin ellos, más bien su calidad y grado de aceptación impulsarán la creación de capacidades colectivas específicas y sustentables mediante de mecanismos de legitimación institucional.

La Política social como instrumento institucional de aplicación del Desarrollo Humano, contiene en ella el bienestar social. En un primer aspecto, el concepto de bienestar se entiende tanto como resultado de un proceso. Es, por lo tanto, un concepto dinámico y relacional que requiere que se definan sus contenidos tanto en los resultados que ocurren en las personas y en la sociedad, como en los procesos que se llevan a cabo para alcanzar esos resultados, los cuales, a su vez, forman parte del concepto mismo de bienestar. Importan los resultados, pero también importa la forma en cómo se consiguen. Cualquier procedimiento no es válido para producir desarrollo humano.

Un segundo aspecto central del concepto es determinar cómo se va a considerar la dimensión social o colectiva, si se integra dentro del concepto o si éste se limita a la dimensión individual. Para nuestra propuesta, se incluye las categorías colectivas en el concepto mismo de bienestar, eso implica que los resultados sociales forman parte del bienestar y el bienestar habrá que evaluarlo tanto en términos de logros individuales como colectivos.

El Plan de Compensación y Relocalización Involuntario reconoce que la realización de las obras del Proyecto de Desarrollo implica la afectación de los predios de personas que habitan la zona de influencia del Proyecto y que en la mayor parte de los casos, se alterarán formas de vida, vivienda, trabajo, relaciones sociales como son la familia, la educación primaria y secundaria, prácticas religiosas y culturales y, por lo cual, se justifica un plan que permita mitigar los efectos negativos del impacto social del Proyecto, el mismo que debe constituir una oportunidad de desarrollo. Es decir, la propuesta técnica del Plan tiene como fin del proceso generar bienestar social en la comunidad, como colectivo, y en las personas, como individuo, alcanzando resultados concretos en la mitigación de los impactos a producirse y, con ello, alcanzar el desarrollo humano de la comunidad a intervenir.

Los objetivos del PCRI evidencian las estrategias prácticas de contribuir al desarrollo humano de la población mediante los beneficios propuestos de: nuevas viviendas, infraestructura educativa moderna, servicio básico de agua de calidad, desagüe con sistema de biodigestión, energía eléctrica, local comunal, una compensación por bienes afectados y programas de desarrollo local; con lo cual, se pretende mejorar las condiciones sociales de vida existentes en la población antes que se implemente el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. Sin embargo, la conflictividad social generada; por una parte, los comuneros en desacuerdo con la viabilidad y deficiencia de los beneficios propuestos y por las prácticas utilizadas para convencer a los afectados ser parte voluntariamente del proceso de desplazamiento y reasentamiento; y por otra parte, los funcionarios del PEOT tratando de proceder lo antes posible con el saneamiento físico legal del hectáreas a ser cultivadas. Sin embargo, las relaciones conflictivas entre los principales agentes sociales intervinientes altero los objetivos y los resultados propuestos para alcanzar condiciones sociales de desarrollo, ocasionando un deficiente funcionamiento de los agentes en el proceso común de toma de decisiones del futuro de los comuneros proclives a los impactos negativos por el desplazados y reasentados involuntariamente. Con lo cual, se caracterizó al proceso con las actitudes prepotentes y violentas de los funcionarios

del PEOT para apresurar el saneamiento físico legal de las tierras comunales a ser subastadas y con comuneros resistiendo a ser desalojados y reasentados por su disconformidad con la valorización de sus bienes, por el incumplimiento de los acuerdos, la prepotencia de los funcionarios, por las nuevas condiciones sociales en donde no poseían medios de producción, la alteración de las redes familiares y comunales de apoyo mutuo, entre otras cosas.

Los resultados registrados en nuestro estudio dan como evidencia una deficiencia en la reestructuración de las estructuras de convivencia de las familias comuneras, debilitamiento de los medios de producción, grados importantes de vulnerabilidad y empobrecimiento de las familias comuneras. Con lo cual, se puede deducir que se ha contradicho, en la práctica, el argumento teórico del Desarrollo Humano al no proporcionar un eficiente proceso de expansión de las oportunidades del ser humano (de las y los comuneros), in-visibilizando la capacidad comunal de funcionamiento para responder a objetivos comunes propios de su Desarrollo. El entender al Plan de Compensación y Relocalización Involuntario como una Política Social que ha de reproducir el bienestar social de la lógica del Desarrollo Humano, implica que los resultados sociales forman parte del bienestar y el bienestar determinado tanto en términos de logros individuales como colectivos. Importando los resultados, pero también la forma en cómo se trató de conseguir.

La elaboración y los procedimientos del Plan, caracterizan la confluencia de los intereses del sector privado y del Estado para ejecutar un Proyecto de desarrollo que ejemplifica un instrumento importante de desarrollo económico para el país— con lo cual, se contribuirá al Desarrollo humano del mismo—. Sin embargo, generar impacto en el desarrollo particular de una población sin establecer estrategias eficientes de mitigación, bajo el argumento de generar un mayor bienestar social a una población más amplia con un costo social mínimo, no constituye una estrategia con procedimientos válidos para producir Desarrollo Humano.

Un tercer punto esencial del bienestar desde el enfoque de desarrollo humano es la sostenibilidad, entendida en su sentido de perdurabilidad, de garantía de continuidad de los logros, lo que se concentra en la categoría de Seguridad Humana (SH). El desarrollo que se pretenda social debe incluir la seguridad humana. Si no se garantiza la continuidad del proceso se desvirtúa totalmente el sentido del desarrollo. Así, la seguridad humana se convierte en un proceso central y su aceptación supone enfatizar dos ideas que conforma el bienestar. Una, plantear la predictibilidad del bienestar implica tener en cuenta de forma expresa el futuro, de manera que éste debe incluirse como uno de sus elementos y los resultados no pueden entenderse referidos a momentos concretos, sino como parte de un proceso de largo plazo. Dos, resaltar la importancia de las instituciones y procesos como categorías centrales del bienestar, ya que sin ellas no será posible conseguir esa garantía de seguridad.

La inserción de la seguridad humana en el concepto del bienestar presenta algunas connotaciones interesantes:

- a.** Implica hacer referencia al entramado institucional a través del cual las personas y los hogares encuentran el bienestar en la sociedad,
- b.** No supone debilitamiento alguno de la agencia individual o colectiva; al contrario, no sólo descarta la pasividad sino que la base de un sistema de SH eficiente se basa en la participación efectiva de las personas y los grupos;
- c.** Implica un análisis integral, donde se insertan el Estado, los grupos, organizaciones y las personas, que obliga a disponer de herramientas capaces de considerar las dinámicas de la sociedad en la consecución del bienestar;
- d.** Implica un énfasis de la acción colectiva, que reclama categorías que capten la capacidad de las instituciones, en sentido amplio, para obtener resultados de SH.

Este argumento hace referencia a la seguridad humana en la implementación de los objetivos del Desarrollo Humano que se han de implementar en una Política social. En el caso particular de análisis; el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario al generar impactos negativos en las condiciones sociales de vida de la comunidad y deficientes estrategias de mitigación y reestructuración de condiciones; evidencia no solo las limitaciones para obtener el Bienestar social, sino además, un débil sistema de Seguridad humana o Seguridad del Bienestar social del Desarrollo Humano de la población afectada. Entendiendo que la lógica práctica de los funcionarios del PEOT estaba centrado en implementar un proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario (saneamiento físico legal) en el tiempo más corto posible para poder subastar las 38,000 hectáreas comunales y proseguir con las etapas complementarias del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos; sin plantear estrategias de predictibilidad del bienestar, que consistía en tener en cuenta el futuro como un proceso construido, con elementos y resultados, no de corto plazo sino como parte de un proceso de largo plazo.

Además se debe considerar que el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario (generado por la implementación de Proyectos de desarrollo) al no poseer parámetros normativos nacionales que regulen su intervención— específicamente en territorio de comunidades originales o nativas—, se establece una débil referencia al entramado institucional a través del cual se debería inserta la agencia individual, colectiva, de organizaciones y del Estado para disponer de herramientas capaces de considerar las dinámicas de las sociedades particulares en la consecución del bienestar social. Resaltando la importancia de las instituciones y procesos como categorías centrales del bienestar, ya que sin ellas no será posible conseguir esa garantía de seguridad. La débil institucionalidad del proceso, hizo que la misma entidad encargada de implementar el Proyecto de Desarrollo (causante del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario) sea el principal agente social encargado de coordinar, regular e implementar el proceso en estudio; confundándose los intereses particulares de la institución, para continuar con la construcción del

proyecto a cargo, con los intereses colectivos de los comuneros afectados por el proceso; justificando las deficiencias en las estrategias de mitigación de impactos implementados.

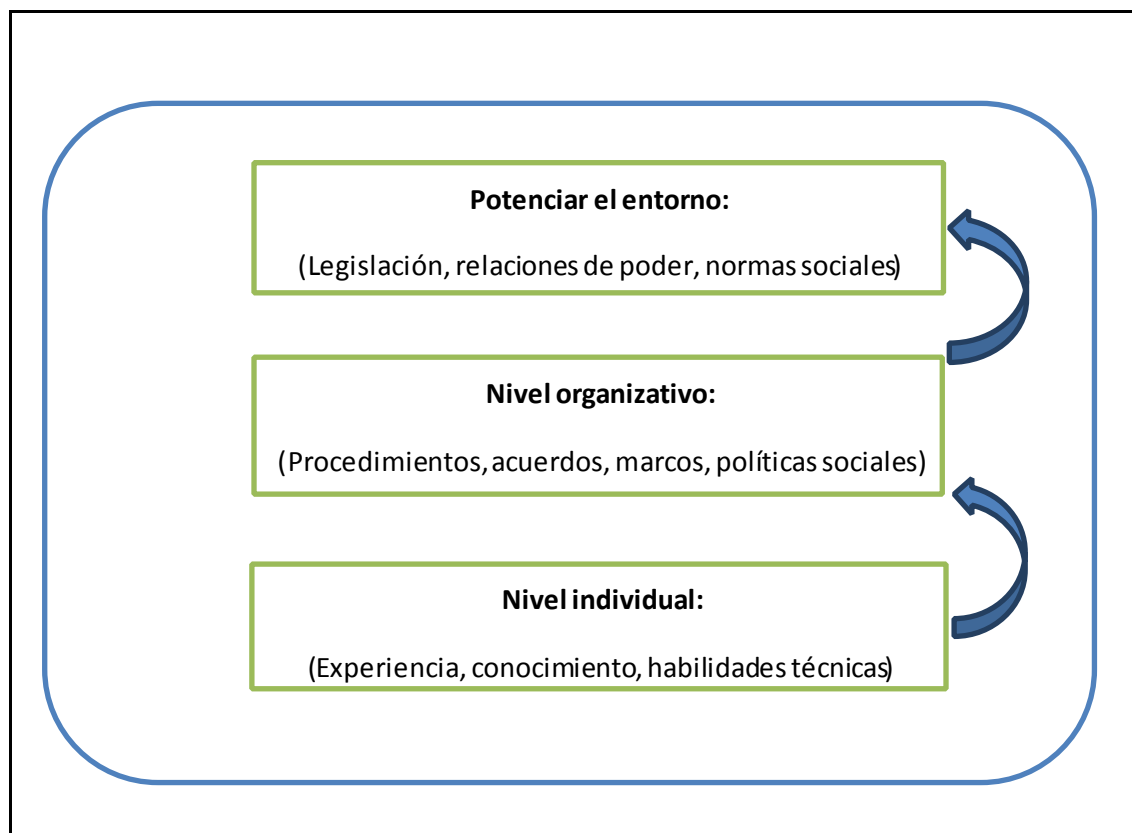


Figura 7. Desarrollo de capacidades

Por otro lado, el Desarrollo de las Capacidades contiene el potencial de ser la herramienta teórica y política clave para el análisis y la práctica de los aspectos colectivos del desarrollo humano local. Dos características centrales se desprenden de su marco teórico:

- a. El *carácter endógeno*, cuya concreción más importante se encuentra en la apropiación. Al resaltar la apropiación como característica central, no sólo

se afirma que las capacidades deben efectivamente llevarse a cabo en las personas, organizaciones, instituciones o sociedades, sino que no se imponen ni se trasladan desde fuera, sino que nace desde la persona, institución, organización o sociedad. En lo que se refiere a las sociedades, la apropiación como exigencia para cualquier estrategia de desarrollo efectiva encuentra su origen en la revisión iniciada por el Banco Mundial en 1999 con la propuesta del Marco Integral del Desarrollo donde manifiesta que la agenda del desarrollo debiera ser formulada por los países y que tan importante como las políticas eran los procesos a través de los que éstas se diseñaban y se ejecutaban. Otras fuentes, ha enfatizado la necesidad de la endogeneidad del desarrollo, destacando en esta línea diversas corrientes del desarrollo humano local.

- b. *Capacidades individuales y colectivas*, que se distinguen en tres niveles: personas, instituciones y sociedad en su conjunto. Siendo el resultado de las interrelaciones entre competencias, capacidades y el contexto, con una consecuencia que se diferencia de cada uno de los inputs o insumos.

Desde la perspectiva del desarrollo humano, hay que destacar dos connotaciones sobre la forma de entender este proceso de Desarrollo de capacidades para su adecuación al enfoque:

- a. El proceso que se contempla es un ***proceso con valor propio***, al igual que para el desarrollo humano el proceso no es sólo la vía para llegar a conseguir el objetivo, sino que supera su consideración instrumental y afirma su importancia como elemento del bienestar mismo.
- b. El carácter normativo, lo que quiere decir que no todos los procesos de Desarrollo de capacidades son valiosos sino que será necesario evaluar cuáles conducen a resultados del bienestar propio del desarrollo humano y cuáles no (incluso pueden ser negativos para conseguir esos objetivos).

Teniendo en cuenta el argumento teórico del Desarrollo de capacidades como instrumento del Desarrollo Humano en las Políticas sociales, para analizar el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario implementado en la comunidad campesina de Olmos, se pudo evidenciar que los procedimientos incorporados para fortalecer las capacidades de la población afectada, como estrategia de mitigación de impactos y promover el desarrollo en las estructuras sociales de vida, no fueron las adecuadas. Considerando que entre las estrategias de fortalecimiento de capacidades se tenía la capacitación en corte y confección, la empleabilidad en obras de construcción u otras actividades que contradecían a las capacidades y potencialidades desarrolladas habitualmente en la comunidad (crianza de ganada menor y aves de corral, la agricultura, venta de los derivados de la producción ganadera, entre otros). Es decir, no se estaba generando el fortalecimiento de capacidades desde los propios individuos y desde la comunidad en su conjunto, sino se trata de imponer desde afuera; contradiciendo el resultado de las interrelaciones entre competencias, capacidades y el contexto.

La connotación de la Seguridad del Bienestar social y el Desarrollo humano se puede encontrar, entre otras variantes, en el carácter endógeno de las capacidades individuales y colectivas. El no haber considerado éste enfoque en la implementación del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario ha contribuido al debilitamiento de la reestructuración de las condiciones sociales de vida afectadas, invisibilizando la existencia de capacidades en los comuneros y comunidad (como conjunto) para transformar la situación. Es por ello que, de considerarse otro enfoque de Desarrollo humano desde la Política social en el análisis del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario se invalidaría los principios generados.

IV. CAPITULO III

PROPUESTA PARA EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PROPUESTA: Modelo de política social para impulsar el desarrollo humano en grupos humanos de desplazados y reasentados como consecuencia de la implementación de proyectos de desarrollo social, implementado en el contexto de comunidades campesinas.

4.1. Propuesta teórica

4.1.1. Fundamentos

4.1.1.1. Desde la Teoría de la Complejidad

Considerando los aportes de Edgar Morín, con su teoría de la complejidad, que concibe a la complejidad como un tejido (*complexus*: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Es decir, se interpreta la complejidad como el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre, etc. El desplazamiento y reasentamiento involuntario de los campesinos en Olmos debe ser comprendido en su totalidad compleja, quiere decir que todos sus componentes están conformando bajo un tejido *complexus*.

De esta forma, el fenómeno social de desplazamiento y reasentamiento involuntario en comunidades campesinas describe su complejidad como objeto organizado por relaciones múltiples; primeramente desde una realidad construida históricamente de relaciones externas de las comunidades campesinas como organización o institución – con paradigmas particulares – y de interacciones

internas entre elementos, acciones o individuos de las propias comunidades campesinas. Al añadir, como interpretación y análisis, el fenómeno investigado – desplazamiento y reasentamiento involuntario – se contextualiza el escenario formado por hechos, situaciones, prácticas o conocimientos; incitando a ver como éste modifica al contexto o como le da luz diferente. Un pensamiento de este tipo se vuelve inseparable del pensamiento de lo complejo, pues no basta con inscribir todas las cosas y hechos en un “marco” u horizonte. Se trata de buscar siempre las relaciones e inter-retro-acciones entre el fenómeno y su contexto, las relaciones recíprocas entre el todo y las partes: cómo una modificación local repercute sobre el todo y cómo una modificación del todo repercute sobre las partes.

Porque el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, implica un fenómeno social que se genera en dos subprocesos. Primero, el Desarraigo de la organización social existente; entendiendo que el traslado o reubicación no es en sí el fenómeno contextual—el hecho traumático que generará en decaimiento de la calidad de vida de una población—, más bien es su efecto en las estructuras de vida económica, cultural y social de la población involucrada. La característica fundamental del desalojo involuntario es que origina un profundo y repentino desarraigo de los modelos existentes de organización social y, el cual, se reproduce en varios niveles: los sistemas de producción se desmantelan, se dispersan los grupos de parentescos, desarticulación de las vitales redes sociales informales que proporcionan ayuda mutua, interrupción y desorganización de los mercados locales, los sistemas tradicionales de autoridad y administración suelen perder sus líderes, alteración en el vínculo físico y psicológico con el pasado, alteración en la identidad cultural de la población, entre otros. El segundo subproceso es el reasentamiento como la reconstrucción planificada de la organización económica de la población afectada. En el plano económico, los proyectos de desplazamiento y reasentamiento cuya planificación fue deficiente en general no restablecieron, ni mucho menos mejoraron, la situación económica de la población desplazada, causando de esta forma su empobrecimiento. En el plano social, ha quedado constancia de que el desplazamiento traumatizó a las

poblaciones afectadas, perturbó sus hábitos de relaciones y apoyo social y menoscabó sus mecanismos de autosuficiencia.

Desde la epistemología de la complejidad el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario en la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, constituye un objeto fenoménico particularizado por un escenario social singular que, a la vez, está determinado por la auto-organización de una estructura social mayor. Es decir, la Comunidad Campesina de Olmos ha mantenido patrones estructurales-sociales históricamente legitimizados por la interacción de relaciones internas y externas a ella; que al contrastarse con la lógica de reproducción de la estructura sistémica del país determina las condiciones en que se desarrolla el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. La contrastación relacional de condiciones genera un nuevo sistema de autoorganización; la cual origina constricciones en el comportamiento de los componentes de dicho sistema. Debido a estas constricciones, no les es posible (a los componentes) interactuar de todos los modos posibles, sino que las interacciones entre estos están limitadas a ciertos tipos. De las posibles interacciones entre los componentes emergen los nuevos comportamientos que se manifiestan en una mayor complejidad del sistema relacional creado.

4.1.1.2. Desde la Teoría del Constructivismo Estructuralista

El análisis del desplazamiento y reasentamiento involuntario deben de ser concebidos como un proceso social y no como fenómeno aislado y singular; proyectado en un espacio temporal determinado, donde su estructuralidad — compuesta por actores sociales, relaciones, intereses, objetivos explícitos e implícitos, recursos, necesidades, etc. — puede adoptar, y de hecho adopta, diferentes configuraciones. Entre estas configuraciones, se describen implicancias políticas que conjugan factores estratégicos como el “poder social” y su distribución, así como la derivación de la “agencia” utilizada por sus actores sociales. Las implicancias políticas determinan la naturalidad del proceso político y

los impactos que han de sufrir sus agentes o actores sociales participantes. Todo aspecto técnico o tecnológico que afecte directamente la multiplicidad de actores sociales con intereses igualmente diversos, se convierte en un componente del “campo político”; es por ello, que el desplazamiento y reasentamiento involuntario es considerado como producto de ese proceso político y debes ser estimado con esa configuración.

Para Pierre Bourdieu, tanto en el “campo político” como en el “campo social” general, se estaría determinando su lógica reproductiva con la posesión de bienes de capital; los cuales, otorgan poderes desiguales que son como fuerzas que en funcionamiento caracterizan relaciones con los otros. Por ejemplo, los capitales económicos, culturales, de conocimiento o, incluso, religiosos definen las posiciones de los agentes sociales en las relaciones con los otros. Además, plantea que las relaciones entre quienes forman parte de una estructura social son relaciones de lucha y de dominación, entre y de agentes sociales que ocupan posiciones desiguales y que entre ellos se relacionan a partir de esa desigualdad, algunos están arriba, otros abajo, otros en el medio. No son estructuras simples a simple vista porque las distancias entre las posiciones, construidas en el papel, son distancias sociales que no necesariamente coinciden con las distancias en el espacio geográfico.

Es por ello que, la eficiencia de un proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario no depende únicamente de una adecuada planificación e implementación. Sino la consideración de factores correlacionales de “poderes de capital” son sustanciales para caracterizar y analizar el proceso, con agentes sociales manejando o controlando de alguna manera los medios legales, administrativos o de fuerza, que puede determinar la obediencia de otros sobre su voluntad y resignar su voluntad propia. De allí que resulte crítico para el logro de resultados positivos en un proceso de reasentamiento el hacer que el “poder” sea accesible para los afectados, especialmente para los económica y socialmente marginados. Y central para este objetivo es la manera en que se

“negocie” y conduzca el proceso de reasentamiento, para lo cual se requiere no sólo provisiones para el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de la población afectada, sino también el establecimiento de mecanismos transparentes y efectivo para la defensa de sus derechos civiles.

Estas aseveraciones nos hacen deducir que resulta evidente que los procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario, derivadas de proyectos de desarrollo, no se configuran como un fenómeno social coyuntural sino estructural. Los problemas sociales generados tienden a ser más complejas en los contextos de las comunidades nativas, indígenas o campesinas, en tanto que constituyen campos culturales, sociales, económicos y políticos alternos a los estados y agencias que llevan a cabo los proyectos, aunque tradicionalmente han sido tratados en formas muy poco respetuosas de su diversidad. Estas malas prácticas ha incrementado el dramatismo del impacto social sobrellevado.

Son hoy en día sobradamente conocidos los resultados contradictorios de las grandes presas en términos de desarrollo humano regional. Mientras que algunos de sus logros (generados de energía, riego permanentemente) promueven el desarrollo de ciertos grupos y regiones; los sectores más pobres de la población (indígena, campesinado tradicional, marginados urbanos), son quienes ceden sus tierras para las obras y quienes menos o ningún beneficio obtienen de ellas. En ciertos casos, verdaderos ejemplos de autoritarismo, negligencia y mala planificación, como el de Cerro de Oro en México, los indígenas desplazados han resultado víctimas y no beneficiarios del proyecto de desarrollo; ya que perdieron sus tierras ancestrales, involucionaron económicamente, y entraron en un creciente proceso de pérdida cultural y descaracterización étnica, que puede ser conceptualizado como etnocidio (Bartolomé: 1990).

Desde el constructivismo estructural, se evidencia que estos proyectos de desarrollo representan fenómenos objetivos, cuyas manifestaciones concretas

suponen una de las mayores evidencias tangibles de la capacidad humana para transformar la naturaleza. Sin embargo, los aspectos subjetivos influyen considerablemente en la ejecución de dichos proyectos, a pesar de que raramente son tomados en cuenta dentro del análisis global de los procesos sociales integrados.

Otro de los momentos del análisis social, es según Bourdieu, el subjetivista, la que se ocupa de la que denomina estructuras sociales interiorizadas o subjetivas, lo social hecho cuerpo. Dichas estructuras dan lugar a la existencia del *habitus* que funciona como principio de “generación y percepción” de las prácticas sociales y que se estructura como un conjunto de disposiciones.

Estas disposiciones se construyen e interiorizan a partir de las posiciones ocupadas en el espacio social y en los campos particulares, en un proceso que no es súbito sino prolongado y supone trayectorias en esas posiciones. Supone el paso del tiempo. Señala Bourdieu: “El *habitus* es a la vez un sistema de esquemas (principios) de percepción y de apreciación de las prácticas. Y, en los dos casos sus operaciones expresan la posición social en la cual se ha construido”.

Estas estructuras internas, subjetivas, están compuestas por un conjunto de disposiciones relacionadas entre sí, disposiciones a ver, a pensar, a gustar, a sentir, etc., más de una manera que de otra lo que es y lo que no es para uno, lo que es posible y lo que no es posible según nuestra posición.

Dentro de la mayoría de los grandes proyectos de desarrollo, que utilizan infraestructura, encontraremos esencialmente (pero no únicamente) dos grupos de agentes sociales que interactúan, básicamente constituidos por el personal a cargo de las obras y por el conjunto de personas afectadas por las obras. Ambos grupos generan representaciones colectivas de sus circunstancias, las que tiende a configurarse en términos de lo que podríamos denominar como ideología y contra-ideologías respectivamente.

Al antropólogo brasileño Gustavo Lins Ribeiro, ha caracterizado con singular claridad algunas de las manifestaciones ideológicas del personal de los proyectos, entendiéndolas como un proceso de legitimación que articula varias construcciones ideológicas. La gran magnitud de los proyectos (el "gigantismo"), los hace aparecer como necesariamente positivos, en la medida que ofrecen numerosas oportunidades laborales. Pero al mismo tiempo generan lo que define como una *ideología de redención*, basada en la noción de progreso que hace aparecer al Proyecto como una expresión normal y deseable de la trayectoria histórica del país o de la región. Los protagonistas de estos procesos se perciben entonces como verdaderos *pioneros*; individuos excepcionales construyendo una obra excepcional contra el desafío de la naturaleza y en pos de un futuro mejor. En algunas oportunidades tal vez esta ideología se puede basar en razones atendibles, pero uno de sus resultados no deseados es considerar a los críticos como traidores a una gran causa nacional, y a los afectados y a sus demandas como a enemigos y obstáculos para su realización. En más de una oportunidad, y en distintos países y obras, hemos podido apreciar que los afectados eran percibidos como un grupo decididamente alterno, como un Otro, cuyas conductas y propósitos responden a intereses oscuros y no entendibles: "les estamos dando cosas mejores que las que tenían antes y todavía protestan".

Del otro lado de la moneda se ubican las construcciones ideológicas de los afectados. Resulta frecuente que las obras sean percibidas como una agresión, tanto individual como social, basada en argumentaciones no siempre entendibles y que responden a fines diferentes a los que argumentan sus responsables. Pero las presas no sólo son vividas como una agresión sino también como una transgresión: como una violación tan severa del orden de la naturaleza, que incluso requieren de prácticas sacrificiales protectivas para poder llevarse a cabo. Estos factores "subjetivos", que suelen ser minimizados por los planificadores y que tan significativos son para un antropólogo, tienden a constituirse en motivadores de conductas colectivas en contra de las obras; llegando con frecuencia a influir ideológicamente en la estructuración de los movimientos de oposición a las relocalizaciones.

La importancia del Constructivismo estructural conlleva su interpretación en que las prácticas humanas están estructuralmente abiertas a la construcción, a la invención, al cambio, y que esa apertura está presente en cada situación que obliga a los agentes a tomar decisiones. Dichas decisiones dan lugar a prácticas concretas que modifican la estructura objetiva misma, ya que quienes realizan las prácticas y construyen son los mismos agentes que ocupan posiciones, y establecen relaciones. El entendimiento constructivista estructural del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario contribuiría en la formulación de estrategias de mitigación acondicionadas. Entendiendo el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario bajo el enfoque teórico del constructivismo estructural, se hubiera interpretado las dimensiones relaciones entre los agentes, las construcciones estructurales y otros factores que determinarían la eficiencia de un proceso de mitigación de efectos. Es por ello que, de considerarse otro enfoque teórico en el análisis del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario se invalidaría los principios generados.

4.1.1.3. Teoría de la acumulación primitiva

La historia ha descrito al desplazamiento y reasentamiento involuntario como un fenómeno con diferentes causales, pasando desde factores naturales (inundaciones, terremotos, sequías, etc.) hasta sociales y demográficos (guerras, sobrepoblaciones, conflictos sociales, pobreza, etc.), en donde las personas son obligadas a abandonar sus hábitas de desarrollo.

Desde una percepción marxista, Arturo Escobar concibe como mérito a Marx el haber formulado la primera teoría del desplazamiento en relación con la historia de la modernidad capitalista. Encontrando la configuración de su argumento en la teoría sobre la acumulación primitiva, exhibiéndose al desplazamiento a gran escala como el factor que desarraiga a los campesinos de sus tierras productivas, bajo la causal de una apropiación externa.

Uno de los autores que mejor interpreta las obras del marxismo es David Harvey, quien explica que en la concepción de Marx la acumulación originaria revela un rango amplio de procesos. Estos llegan a incluir la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzada de las poblaciones campesinas; generando la conversión de diversas formas de derechos de propiedad (comunales, colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes. Es decir, se da un proceso de enajenación de la propiedad comunal o colectiva mediante un proceso de mercantilización y privatización de estas, que han de conjugar su originalidad en condiciones políticas, económicas y socialmente determinadas.

Harvey diferencia como modalidad general de reproducción del capital a la acumulación por desposesión que apunta a la expansión por despojo sobre campos fronterizos a la matriz capitalista. Ya sobre ámbitos internos del capitalismo, como la privatización de tierras, servicios y bienes públicos del Estado, ya sobre ámbitos externos a él, como despojos legales o facultades de patrimonios de uso común de tribus, etnias, comunidades, cooperativas. En tal sentido, la acumulación por desposesión será el momento de la economía política propiamente dicha.

4.1.1.4. Enfoque teórico del Desarrollo Humano desde la Política Social.

La definición académica de la Política social parece ser un problema para las ciencias sociales. Abandonadas las viejas referencias a la *Sozialpolitik* germana, se sucede contenidos explicativos diversos, en función del campo propio objeto de estudio, de su origen intelectual, de sus usos ideológicos, de sus áreas de intervención. Así encontramos definiciones diversas: Política social, Políticas sociales, Política de la sociedad, Bienestar social; también dimensiones de actuación más o menos amplias (desde la educación hasta el sistema sanitario); o podemos atisbar conflictos genéricos en su génesis o gestión (derecho objetivoderecho subjetivo, competencia del Estado-Papel de la sociedad, poder centralautonomía regional, nivel contributivo-nivel asistencial, etc.). No obstante,

podemos apuntar una serie de elementos comunes a toda noción teórica de Política social, siguiendo la definición institucional de la PNUD por medio de R.M.

Titmuss: “intervención pública con unos instrumentos, hacia unos objetivos y en el marco de un determinado modelo de Estado, el Estado social”

La política social puede definirse, en primer lugar, como una mediación histórica y epistemológica, entre la economía (el bien-estar) y la política (el biencomún) ante las fracturas sociales emergentes que provoca su dialéctica conflictiva o “procura existencial”, que originalmente se concretaron en el llamado “problema obrero” y que en el siglo XXI se engloban bajo el “desarrollo humano integral”. Una forma que concreta la mediación señalada y se funda para superar dicha fracturas sociales a través del reconocimiento jurídico de un orden social concreto (Política social general), y de la satisfacción de las necesidades y oportunidades vitales de una población por medio de un conjunto de bienes y servicios (Política social específica). Y en tercer lugar, la Política social se concentra en un sistema jurídico e institucional de protección, previsión y asistencia de ciertas necesidades y oportunidades vitales determinadas por el orden social vigente, mediante dos grandes instrumentos:

1. Garantía de ciertos niveles y medios materiales de existencia (Bienestar social).
2. Fomento y apoyo a la realización personal del hombre (para alcanzar la justicia social).

Así podemos subrayar como elementos generales de toda manifestación de la Política social lo siguiente: generada en una época histórica concreta, determinada por una decisión política, realizada jurídicamente, con un estatuto científico concreto, e institucionalizada a través de dos niveles:

1. Como *Política social general* se configura, de forma general, en una

“Política de la sociedad”, fundada en “formas de intervención pública en la vida social para resolver determinados problemas o cuestiones sociales”. En esta dimensión, la Política social es entendida como “la forma política del Estado social”; aunque abierta a modelos paraestatales en su gestión; en sus dos finalidades y en sus dos medios.

- a. En sentido material, el fin de Política social pretende alcanzar el *Bienestar social*, siendo su medio la *reivindicación* sobre la protección, formación, integración y seguridad social.
 - b. En sentido formal, el fin de la Política social es la realización de la Justicia social, y su medio de derecho social que trata de formalizar el contenido mínimo del Bienestar social, englobando las “tres justicias clásicas”: conmutativa, distributiva y legal.
2. Como Política social específica se desarrolla en una “política de servicios” orientada a satisfacer necesidades y derechos ciudadanos concretos. En esta dimensión se ciñe a las diferentes políticas que tienden a gestionar la intervención pública en la vida social, que desarrolla la sociedad política, mediante dos medios:
- a. Estado asistencial e interventor: suministro de servicios sociales que atiendan las necesidades materiales y las oportunidades vitales, reconocidas jurídicamente y establecidas administrativamente, en los seis sistemas de “protección social”: educación, vivienda, sanidad, mantenimiento de los ingresos de los trabajadores, formación para el empleo y servicios sociales generales.
 - b. Sociedad del Bienestar: conjunto de programas y servicios ofrecidos como “derechos sociales” por la administración pública, en colaboración activa de los movimientos sociales, la iniciativa privada o el Tercer sector, en busca de la “integración” colectiva.

El proceso de Desplazamiento y reasentamiento involuntario, implementado por el Proyecto Especial Olmos Tinajones en la Comunidad Campesina de Olmos, fue estructurado técnicamente bajo la denominación de Plan de Compensación y Relocalización Involuntarios (PCRI); cuyas características sustentan el argumento que la describe como un proceso inmerso en un marco político. Teniendo en cuenta que todo aspecto técnico o tecnológico que afecte directamente la multiplicidad de actores sociales con interés igualmente diversos, se convierte en un componente del “campo político”.

A la “procura existencial” o dialéctica conflictiva originada por la fractura social que representa la implementación del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario —generada a la vez por la ejecución de un proyecto de desarrollo (componente económico)—, al reconocerle jurídicamente un orden social concreto, la satisfacción de necesidades y oportunidades vitales a la población afectada por medio de un conjunto de bienes y servicios, y a la previsión y protección de la misma; se estaría reconociendo las características de una Política social que se implementa ante un proceso social determinado.

Los objetivos del Plan de revertir los perjuicios que se ocasionaría, de tal manera que la situación socioeconómica de la población, sea similar o mejor a la que tenían antes de la ejecución del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, y las cuestiones operativas para mitigar mencionados efectos negativos; representan la intencionalidad de un Estado Interventor y el fin de una Sociedad del Bienestar, es decir características de los medios de una Política social específica orientada a satisfacer necesidades y derechos ciudadanos concretos.

La organización, y en este caso la comunidad como símbolo y realidad solidaria, han de participar del papel mediador de la Política social, ante las disfunciones del Mercado (lo económico) y la crisis de la Democracia (lo político).

Una “mediación político-social” emergente que sitúa al desarrollo humano sostenible como cuestión social primordial, y que busca en la comunidad el

fundamento para la racionalización y mejora de los seis grandes sistemas de protección social que conforman el estado de Bienestar (enseñanza, sanidad, vivienda social, fomento de la ocupación, garantía de ingresos mínimos y servicios sociales personales).

Pero este proceso conlleva a que se integre nuevas categorías a la teoría de la actual Política social del Bienestar y al marco conceptual que la legitima, desde las categorías de la complementariedad, y que inciden en profundizar en la necesidad de un nuevo “sistema mixto” impulsado por tres claves:

- a.** La comunidad: a través de una nueva filosofía de la acción social (incorporando nuevos y diferentes agentes sociales, en especial a los comunitarios).
- b.** La participación: mediante alternativas de distribución de responsabilidades en la producción de servicios en la participación pública y en la representación político-social.
- c.** El desarrollo: por medio del análisis pormenorizado y sistemático del sistema de protección social (en la triple esfera de oportunidades, amenazas, disfunciones).

Estas categorías sólo poseen un significado dentro de un proceso amplio de transformación de la estructura de protección social, integrando los avances del modelo “residual” y del “institucional” de las políticas sociales en el sistema “mixto”. Así, del modelo residual se puede poner en valor de la familia y del propio mercado en la generación de redes alternativas de protección social; del modelo institucional, mientras, se puede subrayar la responsabilidad principal del Estado en el reconocimiento como derecho objetivo de ciertas prestaciones y derechos sociales. Con ello se puede fundamentar un “modelo mixto” que valoriza el legado a la Administración social nacida en el viejo Continente, y sus logros institucionales en el campo de la protección y previsión social (las políticas

sociales generales, y los servicios sociales específicos y universales, para cubrir las necesidades de seguridad, salud, educación y vivienda). Un argumento que incide, en el nuevo siglo, en tres aspectos no siempre valorados desde una economía reducida al mero mercantilismo y una política sometida al poder de los partidos:

- a.** El desarrollo humano sostenible (no sólo material).
- b.** El papel central de la comunidad (no sólo del individuo).
- c.** La protección social fundada en las responsabilidades (no sólo en los derechos).

Estos son los elementos centrales de la Política Social del siglo XXI, donde se configura como un “espacio de libertad”, donde se limita el Estado, se restringe el Mercado y se impulsa a la Comunidad; para ello se revalorizan públicamente las solidaridades sociales, la participación ciudadana y la responsabilidad social mediante su institucionalización. Así se redefine las posiciones teóricas de la Política social: paradigmas de partida, mecanismos institucionales, agentes sociales, sistemas de control y evaluación; y con ello se pretende lograr una interacción real:

- a)** Entre el sector privado y el sector público en el desarrollo de “lo social”
- b)** Entre las necesidades sociales y las posibilidades de gasto, al integrar en la financiación externa y en la producción interna de los “servicios sociales” a todos los miembros de la comunidad económica y política.

Por otro lado, el Desarrollo de las Capacidades contiene el potencial de ser la herramienta teórica y política clave para el análisis y la práctica de los aspectos colectivos del desarrollo humano local. Dos características centrales se desprenden de su marco teórico:

- a. El *carácter endógeno*, cuya concreción más importante se encuentra en la apropiación. Al resaltar la apropiación como característica central, no sólo se afirma que las capacidades deben efectivamente llevarse a cabo en las personas, organizaciones, instituciones o sociedades, sino que no se imponen ni se trasladan desde fuera, sino que nace desde la persona, institución, organización o sociedad. En lo que se refiere a las sociedades, la apropiación como exigencia para cualquier estrategia de desarrollo efectiva encuentra su origen en la revisión iniciada por el Banco Mundial en 1999 con la propuesta del Marco Integral del Desarrollo donde manifiesta que la agenda del desarrollo debiera ser formulada por los países y que tan importante como las políticas eran los procesos a través de los que éstas se diseñaban y se ejecutaban. Otras fuentes, ha enfatizado la necesidad de la endogeneidad del desarrollo, destacando en esta línea diversas corrientes del desarrollo humano local.

- b. *Capacidades individuales y colectivas*, que se distinguen en tres niveles: personas, instituciones y sociedad en su conjunto. Siendo el resultado de las interrelaciones entre competencias, capacidades y el contexto, con una consecuencia que se diferencia de cada uno de los inputs o insumos.

Desde la perspectiva del desarrollo humano, hay que destacar dos connotaciones sobre la forma de entender este proceso de Desarrollo de capacidades para su adecuación al enfoque:

- a. El proceso que se contempla es un ***proceso con valor propio***, al igual que para el desarrollo humano el proceso no es sólo la vía para llegar a conseguir el objetivo, sino que supera su consideración instrumental y afirma su importancia como elemento del bienestar mismo.

- b. El carácter normativo, lo que quiere decir que no todos los procesos de Desarrollo de capacidades son valiosos sino que será necesario evaluar cuáles conducen a resultados del bienestar propio del desarrollo humano y cuáles no (incluso pueden ser negativos para conseguir esos objetivos).

4.1.2. Los componentes de la propuesta

4.1.2.1. Marco normativo

En definitiva, diversos autores han analizado los procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario en poblaciones nativas, indígenas o campesinas, desde una perspectiva normativa. Entre ellas, resalta la participación de Alicia M. Barabas quien resalta que el derecho positivo (internacional y nacional) no ha elaborado instrumentos específicos en los que se determine cuáles son los derechos indígenas, nativos o campesinas (individuales y colectivos) afectados por las relocalizaciones compulsivas, ni cuáles deben ser las formas precisas en que el derecho internacional y las legislaciones nacionales tienen que salvaguardar esos derechos. En ello incide el no reconocimiento de la autonomía y autodeterminación a los pueblos indígenas afectados. No obstante, algunos elementos susceptibles de integrar una legislación al respecto, se pueden extraer del articulado de distintos documentos.

Indiscutiblemente en la última década se han dado importantes pasos para la legislación sobre derechos indígenas y/o campesinos a nivel internacional y, dentro de ellos, se va perfilando un campo especial: los derechos de los afectados por reacomodos. Este tópico ya es objeto de discusión y recomendaciones de procedimiento en los países participantes de Naciones Unidas; pero aún no existe como tal en las legislaciones nacionales.

La experiencia demuestra que la promulgación de legislaciones sobre derechos de las personas no implica garantía de cumplimiento; pero es un paso fundamental para lograrlo. En ese contexto, en varios países (Nicaragua, Argentina, Brasil, Paraguay, etc.), se han elaborado ya legislaciones específicas (nacionales o provinciales) para grupos indígenas, nativos o campesinas en especial referentes a derechos jurídicos y lingüísticos, en proceso de desplazamiento y reasentamiento.

Entre otras cosas la autora describe que tradicionalmente el Estado se ha reservado el derecho casi incuestionable de expropiar las tierras indígenas para obras de “interés general”, aunque éstas hayan sido muchas veces perjudiciales para los comuneros o nativos. En no pocas ocasiones la construcción de presas y otras grandes obras en regiones indígenas y/o campesinas parece haber sido decidida sin explorar otras opciones; sin considerar en profundidad los costos sociales y culturales del desalojo y la reubicación. En relación con poblaciones afectadas por proyectos de desarrollo, la legislación nacional sólo reconoce hasta ahora el derecho a la indemnización agraria y monetaria. Se compensa a cada ejidatario, comunero o propietario con tierra “equivalente” a la expropiada, pero no existen instrumentos legales orientados a proteger derechos territoriales y culturales de grupos sociales singulares, que no son indemnizados con la sola restitución de parcelas y pago de bienes inmuebles. De allí que sean urgentes las propuestas de la antropología jurídica en torno al estatus legal de los indígenas, campesinas u originarias como “pueblo” y de sus tierras como “territorio étnico”.

Existen muchos intentos para mejorar el marco jurídico del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario; sin embargo, aún quedan pendientes muchos puntos relevantes. Uno de los principales se refiere a la capacidad de los pueblos afectados (y otras organizaciones) de cuestionar la “utilidad pública” de algunas obras y de oponerse a su construcción cuando implican el desalojo permanente de sus territorios históricos. Otros tienen que ver directa o indirectamente con la definición del estatus de “afectados”, con la

redefinición de las condiciones indemnizatorias, y con la participación de los afectados en los procesos de relocalización entendidos como proyectos de desarrollo propio.

4.1.2.2. Institucionalidad

La teorización respecto a la institucionalidad esta descrita desde diferentes perspectivas; entre ellas resalta la de North que la define como las normas de juego que modelan la interacción humana en una sociedad. Voigt y Engerer, distinguen dos componentes de las instituciones, la regla y la imposición o sanción, para definir a las instituciones como las reglas conocidas comúnmente para estructurar situaciones de interacción del componente de la regla se sancione.

Prats (2002) puntualiza que las instituciones son las reglas del juego formales e informales que pautan la interacción entre los individuos y las organizaciones. Las instituciones no son cosas, su existencia es meramente abstracta, no tienen objetivos, aunque importantes funciones sociales. Son el marco de constricciones e incentivos en el que se produce la interacción social. Se corresponden con determinadas correlaciones o equilibrios de poder y viven y se apoyan en nuestros modelos mentales, valorativos y actitudinales. La institucionalidad son reglas de acción, expectativas y normas que determinan parcial o totalmente mediante incentivos y sanciones el comportamiento de los individuos en sociedad. El diseño institucional eficaz incentiva las conductas que maximizan los resultados y que repercute en el desempeño económico y social.

El fortalecimiento institucional requiere del conocimiento de nuevas técnicas en la administración pública y privado, y el desarrollo institucional exige un gran conocimiento científico de la naturaleza de los procesos, las actitudes de las personas y las comunidades. Así, este es un desafío de la modernización y la modernidad que exige actores públicos y privados más calificados y con mejor

conocimiento de la realidad, cuyos ámbitos se sitúan más allá del funcionamiento del mercado, pues implican la creación de nuevas redes de colaboración, la explotación de complementariedades y el estímulo a la participación y la iniciativa social.

Desafortunadamente, el Estado peruano no ha discutido seriamente ni ha hecho una reflexión consistente sobre el tipo de institucionalidad requerido para atender la problemática generada por el desplazamiento y reasentamiento y sobre las condiciones institucionales que garanticen una estabilidad en el crecimiento y el desarrollo de las poblaciones afectadas.

La desinstitucionalización es uno de los fenómenos más graves que ha generado en el desplazamiento y reasentamiento forzado, tanto por responsabilidad del sector público como privado, un medio conductor de vulnerabilidad, marginalidad y miserabilidad. Teniendo en cuenta resultados como la desestructuración a las comunidades afectadas y sus organizaciones sociales, han destruido el capital social y ha hecho perder la confianza en las instituciones públicas y en su capacidad de responder a las demandas de los pobladores.

El desafío es triple, recuperar y reestructurar lo bueno que se destruyó durante el proceso de desplazamiento y reasentamiento, replantear el campo institucional para el desarrollo de las poblaciones afectadas y repensar la institucionalidad para las afectadas familias que deben encarar el desafío de mantenerse conservando las identidades existentes y las que se pueden construir socialmente en medio de la diversidad y la unidad nacional.

4.1.2.3. Prácticas de desplazamiento y reasentamiento involuntario

Uno de los autores a resaltar en la investigación es a Leopoldo B., quien señala que desde el lado de quienes promueven la ejecución de los proyectos de

desarrollo, que generan a la vez el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, argumentan que los proyectos infraestructurales de gran escala, tales como las represas, resultan imprescindibles para el desarrollo económico nacional, en la medida en que proveen de energía, irrigación y otros factores necesarios no sólo para el crecimiento económico sino para el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores postergados. Por lo tanto, tales proyectos sirven al “bien público” en el sentido más estricto. Ahora, si para concretar estos objetivos de bien público se hace lamentablemente necesario el desplazamiento de personas, tal desplazamiento resulta un componente “legítimo” del proyecto. A partir de este reconocimiento, el problema central es cómo minimizar ese desplazamiento y mitigar sus posibles impactos negativos. Asimismo se admite la posibilidad de que si el proyecto es adecuadamente planificado e implementado la población afectada por el mismo puede beneficiar e inclusive mejorar su situación con respecto a la situación previa.

Para el autor, considera que los desplazamientos poblacionales no son ni deben ser consecuencias inevitables del desarrollo y que, de resultar necesario, el reasentamiento de los desplazados no tiene por qué constituir en una experiencia degradante. Cree firmemente que el desarrollo debe posibilitar a sus eventuales afectados el acceso a un auto sostenimiento mejoramiento de sus a) circunstancias materiales, b) opciones para el reasentamiento y c) control sobre las circunstancias de su vida cotidiana. Indudablemente, estos beneficios pueden ser logrados a través de una variedad de medios y no solo a través de intervenciones técnicas de gran escala pero las mismas deben estar sólidamente ancladas en el conocimiento y el respeto a las estructuras sociales y las prácticas culturales de la población afectada.

4.1.2.4. Prácticas de interculturalidad

La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, favoreciendo su integración y manejando los conflictos existentes. En las relaciones

interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo.

La interculturalidad tiene que ver con problemas comunicativos entre personas de diferentes culturas y en la discriminación de etnias, principalmente. Según Almaguer, Vargas y García (2007), la interculturalidad del siglo XXI tiene referentes preciosos en los modelos de comunicación de masas en la segunda mitad del siglo XX, la integración europea, los modelos de comunicación intercultural y migración. Otro elemento presente en los modelos y los procesos de gestión intercultural, son los desarrollados por los pueblos indígenas. Según el sociólogo y antropólogo Tomás Millán, la interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferentes culturas. Si a uno o varios de los grupos en interacción mutua se les va a llamar etnias, sociedades, culturas o comunidades es más bien materia de preferencias de escuelas de ciencias sociales y en ningún caso se trata de diferencias epistemológicas.

Otras variables a las que se expone son: inserción e integración. En la primera se asume la presencia física de las personas en un determinado espacio donde prevalece la cultura dominante o mayoritaria. En el segundo caso, no solo se acepta sino que entra en juego la disposición a interactuar de manera intelectual, psicológico y culturales, al no solo dar por aceptados los nuevos elementos culturales; sino además disponerse a conocer, respetar y aprender en interacción mutua entre mayorías y minorías culturales, dando como resultado un proceso intercultural (entre culturas). Una de las posiciones sobre la interculturalidad es planteada desde el seno de las teorías críticas, y es ver a la interculturalidad como movimiento social.

Para el autor, la interculturalidad se consigue a través de tres actitudes: visión dinámica de las culturas, considerando de una amplia ciudadanía y sólo aceptada con la igualdad de derechos como ciudadanos.

El enfoque intercultural tiene tres etapas: negociación, que es la simbiosis, comprensión y avenencias para evitar la confrontación; la conversión, salirse del lugar de uno, para tomar el punto de vista del otro; y la Descentralización, como la perspectiva en la que unos alejamos de uno mismo, a través de una reflexión de sí mismo.

Es por ello, en la propuesta a ser implementada en nuestra política de intervención en procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario en comunidades campesinas, es necesario mantener como categoría transversal la interculturalidad; entiendo la diversidad cultural que ha de encontrarse en los escenarios donde pueden intervenir proyectos de desarrollo. Este factor, ha de permanecer con prioridad desde el diseño, planificación y ejecución del plan de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

4.2. Modelo práctico

4.2.1. Marco normativo

La normativa legislativa, internacional y nacional, referido al contexto de estudio y considerada para la propuesta diseñada es la siguiente:

4.2.1.1. Internacional

a. Declaración universal sobre derechos indígenas (ONU, 1988)

Parte II: 3, 4, 5, 6: Señalan el derecho colectivo a existir y a ser protegidos del genocidios y del etnocidio. Esta última prevención comprenderá toda forma de integración forzada que pueda privarlos del derecho a preservar y desarrollar su identidad étnica, sus tradiciones y bienes culturales, así como del derecho a llevar adelante su propio desarrollo cultural.

Parte III: 12, 13, 14, 15, 16, 17; señalan el derecho de propiedad, y posesión de las tierras que han ocupado tradicionalmente, así como el deber de los Estados de obtener de las poblaciones indígenas el “consentimiento libre, fundamentado y corroborado por un tratado”, antes de emprender ninguna acción que pueda privarlos de sus tierras y del control de los recursos de superficie (agua, flora, fauna, etc.) pertenecientes a sus territorios. Se indica, sin embargo, que cuando por cuestiones de interés nacional sus tierras deban ser afectadas, aun sin su consentimiento, tienen derecho a ser indemnizadas con tierras de calidad y condición jurídica al menos iguales a las de su propiedad anterior.

b. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 1989.

Parte I: artículos 2, 5: se refiere a los derechos de los pueblos indígenas a mantener valores e institucionales y realizar prácticas culturales y religiosas propias.

Artículo 6: se indica que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, medios procedimientos participativos, cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, con el fin de que sus instituciones e iniciativas alcancen pleno desarrollo.

Artículo 7: señala el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus prioridades de desarrollo, en la medida que éste afecte sus vidas, tierras, creencias, instituciones, etc.; y a controlar su propia desarrollo participando en la formulación, aplicación y evaluación de los planes que los afecten directamente. Los gobiernos, en cooperación con los interesados, deberían tomar medidas para la protección y preservación del medio ambiente de los territorios indígenas.

Parte II: artículo 13; señala que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que reviste para las culturas indígenas su relación colectiva con la tierras o territorios que ocupan o utilizan. Aclara que la utilización del término “tierras”

deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del *hábitat* que los pueblos interesados ocupan o utilizan.

Artículo 16: es especialmente importante ya que alude concretamente a traslados y reubicaciones de pueblos indígenas. Establece que los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan; pero agrega: a reserva de que el Estado lo considere necesario. En estos casos el Estado buscará el consentimiento de los afectados y si no lo obtiene, deberá recurrir a la legislación nacional para obtener aprobación. Específicamente que cuando el retorno a sus tierras tradicionales no sea posible, los pueblos deberán recibir tierras de calidad y estatuto jurídico al menos equivalentes a las que tenían. Se refiere también a las indemnizaciones monetarias por bienes inmuebles y muebles afectados por el traslado; elementos que han servido de base para establecer los tipos de compensaciones en casos concretos de relocalización.

c. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Artículo XI: Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

Artículo XXIII: Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.

➤ Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.

Sección I, II, III y IV: Los Principios Rectores contemplan las necesidades específicas de desplazamiento interno de todo el mundo. Defienden los derechos y garantías pertinentes para la protección de las personas contra el

desplazamiento forzado y para su protección y asistencia durante el desplazamiento y durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración de la población afectada.

4.2.1.2. Nacional

d. Norma Constitucional y Legislación del Perú.

La Constitución Política de Perú.

El Artículo 20 considera como uno de los derechos fundamentales de la persona es el derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado.

En el Capítulo III De la Propiedad, la constitución establece que el derecho de propiedad es inviolable y que nadie puede privarse de su propiedad, sino, exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por Ley, previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluye compensación por el eventual perjuicio.

Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública.

La reparación de daños y perjuicios deberá estimarse de acuerdo a la finalidad a que estaba destinado el bien al disponerse la expropiación. De lo expuesto se puede colegir que la reparación de daños y perjuicios habrá de reconocerse en aquellos caso en que la expropiación afecte a las actividades comerciales, productivas, de servicios, o cualquier otra de naturaleza similar, es decir, teniendo en cuenta la finalidad a que está destinado el bien.

e. El Código Procesal Civil y el Código del Medio Ambiente

f. La Ley 27446

Que crea un sistema coordinado de identificación, coordinación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos.

El Artículo 3º establece la obligatoriedad de la Certificación Ambiental, que equivale a una Licencia a ser formalizada mediante Resolución del órgano competente después de concluido el proceso de análisis del estudio de Impacto y es indispensable para poder iniciar las obras.

g. La Ley 27117 – Ley General de Expropiaciones publicada 20-05-1999.

La ley de expropiaciones establece las disposiciones asociadas a la transferencia del derecho de propiedad a favor del estado, incluyendo temas asociados al pago en efectivo de indemnizaciones, incluidas compensaciones por eventuales perjuicios.

h. Ley de desplazamiento interno.

Establece las disposiciones referidas a los casos de poblaciones desplazadas involuntariamente, por causas diversas, entre ellas: por conflicto armado, por proyectos de desarrollo, desastres naturales, entre otros.

i. Ley general de Comunidades Campesinas.

Artículo 1: Declárese de necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. El Estado las reconoce como instituciones democráticas fundamentales, autónomas en su organización, trabajo

comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, la presente ley y disposiciones conexas.

Artículo 7°: Las tierras de las Comunidades Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y Titulación y son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables. Por excepción podrán ser enajenadas, previa acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por ley fundada en el interés de la Comunidad y deberá pagarse el precio en dinero por adelantado.

4.2.2. Institucionalidad

Las leyes actualmente existentes comenzaron un proceso de intervención exógena (en la medida en que se hace por exigencia legal y no por evolución sociocultural), para la búsqueda de mejoras en la prestación de diversos servicios que permitan restituir los derechos vulnerados y permitan lograr la superación de la marginación y vulnerabilidad extremas que son causadas por el desplazamiento forzado.

Además de buscar el cambio en la conciencia social, la Ley también contiene en su gran mayoría artículos que buscan establecer las responsabilidades del Estado frente a la atención a esta población, así como también asegurar que se encaminarán esfuerzos tanto a reducir o prevenir sus causas, como a disminuir los efectos mismos sobre la población.

Para este fin, la Ley establece la responsabilidad del Estado peruano para formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento y reasentamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización estructural de los reasentados por este proceso. Y es por ello que, se debe crear

un sistema cuya única función en última instancia es la de ejercer esta responsabilidad del Estado y permitir que la política pública incluya un enfoque de desarrollo humano hacia la población desplazada y reasentada involuntariamente. La propuesta de nuestro estudio refiere al Sistema Nacional de Atención inclusiva a la Población Desplazada Involuntariamente con sus respectivos componentes.

4.2.2.1. Sistema Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente

El Sistema Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada Involuntariamente debería ser creado para alcanzar los siguientes objetivos:

- a. Atender de manera integral a la población desplazada forzosamente para que, en el marco del reasentamiento, logre su reincorporación a la sociedad peruana; priorizando características específicas para comunidades campesinas, originarios e indígenas.
- b. Neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y dinámicas que provocan el desplazamiento, mediante el fortalecimiento del desarrollo integral y sostenible de las zonas expulsoras y receptoras, y la promoción y protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
- c. Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las situaciones de desplazamiento y reasentamiento forzado por causas de proyectos de desarrollo; bajo un enfoque intercultural del desarrollo humano.
- d. Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de las situaciones que se presenten por causa del

desplazamiento involuntario por proyectos de desarrollo. Para garantizar un adecuado reasentamiento.

Para el logro de los objetivos descritos, el Estado contará con el Plan Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente.

El sistema estará constituido con el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención inclusiva de la población desplazada y reasentada involuntariamente.

4.2.2.2. Consejo Nacional de Atención inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente

El Consejo Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente será el órgano responsable de la administración del Sistema Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente. Encargado de aprobar el Plan Nacional de Atención Inclusiva para la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente, directrices para condiciones sociales específicas, los proyectos propuestos para conformar el Plan Nacional, aprobar y conformar los Comités inter-sectoriales y la asignación de partidas presupuestales. El Consejo Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente estará integrada por representantes de las instituciones:

- a. Presidente del Consejo de Ministros (quien lo presidirá el consejo)
- b. Ministerio del Interior.
- c. Ministerio de Economía y Finanzas
- d. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

- e. Ministerio de Educación.
- f. Ministerio de Salud.
- g. Ministerio de Agricultura y Riego.
- h. Ministerio de Energías y Minas.
- i. Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
- j. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- k. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- l. Ministerio del Ambiente.
- m. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
- n. Defensoría del Pueblo.

4.2.2.3. Comités inter-sectoriales zonales

El Gobierno Nacional promoverá la creación de comités inter-sectoriales zonales para la atención inclusiva a la población desplazada y reasentada Involuntariamente, encargados de prestar apoyo y brindar colaboración al Sistema Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada Involuntariamente, que estará conformados por:

- a. El Alcalde municipal. (quien lo presidirá el comité)
- b. Representante de la presidencia del Gobierno regional.
- c. Comandante de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción.
- d. Representante de Defensoría del Pueblo.
- e. Representante de Defensa Civil.
- f. Representantes de la población a ser afectada.
- g. Representantes de la institución o empresa que requiere la implementación de desplazamiento involuntario.

Los comités inter-sectoriales zonales, por decisión mayoritaria podrán convocar a representantes o delegados de organizaciones, instituciones, colectivos o personas natural que se consideren relevantes para efectivizar la

gestión del Sistema Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada Involuntariamente.

En relación de los representantes de la población afectada; si se trata de poblaciones indígenas, nativas o campesinos se incluirá a los comités, sus instituciones y organizaciones de representación; teniendo en cuenta sus costumbres y tradiciones culturales de representación.

4.2.2.3.1. Acciones de los comités inter-sectoriales zonales

Las acciones de prevención que deberán emprender los comités intersectoriales serán:

- a.** Los miembros del comité tratarán de prevenir los procesos embrionarios de desplazamiento involuntario proponiendo mecanismos alternativos al proceso que pueda generar conflictos.
- b.** Acciones jurídicas: los comités deberán orientar a las comunidades que puedan verse afectadas por el hecho del desplazamiento y reasentamiento involuntario, en la solución, por vías jurídicas e institucionales, de los conflictos que puedan generar tal situación. Así mismo, analizarán la viabilidad de las acciones jurídicas y recomendarán o decidirán la interposición oportuna de los recursos constitucionales o legales pertinentes que permitan minimizar o erradicar procesos embrionarios de conflicto.
- c.** Acciones asistenciales. Los miembros del comité deberán evaluar las necesidades insatisfechas de las personas y/o comunidades originarias que eventualmente puedan precipitar en un proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. Deberán, con base en dicha evaluación, tomar medidas del caso.
- d.** Participará en la Planificación, ejecución y evaluación de los programas específicos que serán implementados en su marco territorial, teniendo en

cuenta el Plan Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente.

4.2.2.4. Red Nacional de Información para la Atención a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente

La Red Nacional de Información para la Atención a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente será el instrumento que garantizará al Sistema Nacional una rápida y eficaz información nacional y regional sobre los conflictos por desplazamientos involuntarios producidos o por producirse, la identificación y el diagnóstico de las circunstancias. Producirá informes semestrales sobre la magnitud y tendencias que presentan el desplazamiento y reasentamiento involuntario, y los resultados de las políticas estatales en favor de la población desplazada involuntariamente.

La Red Nacional estará bajo la administración del Observatorio del Desplazamiento y Reasentamiento Involuntario para fortalecer la conjugación de la elaboración de propuestas estratégicas para mitigar los impactos de los procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

4.2.2.5. Observatorio del Desplazamiento y Reasentamiento Involuntario

El Gobierno Nacional creará un Observatorio del Desplazamiento y Reasentamiento Involuntario, siendo el órgano encargado de elaborar y proponer al Consejo Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente el Plan Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente, las directrices y programas para condiciones sociales específicas para que sean aprobadas. Contará con la participación de expertos y centros académicos de reconocida trayectoria para ejecutar los programas del Plan Nacional determinadas por las

condiciones geográficas donde se desarrolla el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

Además, estará a cargo de la Red Nacional de Información para la Atención Inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente; lo cual, le permitirá evaluar la magnitud de los problemas, tomar medidas para la atención inmediata, elaborar estrategias de acción para la consolidación y estabilización de los desplazados y formular alternativas de solución para la atención a la población desplazada y reasentada involuntariamente.

4.2.2.6. Fondo Nacional para la Atención Inclusiva a la Población desplazada y Reasentada Involuntariamente

El Gobierno Nacional creará el Fondo Nacional para la Atención Inclusiva a la Población Desplazada Involuntariamente, que funcionará como una cuenta espacial sin personería jurídica administrada por el Ministerio del Interior, como un sistema separado de cuentas.

La Consejería Presidencial para los Desplazados y Reasentados Involuntariamente coordinará la ejecución de los recursos de este Fondo. El Fondo tiene por objetivo financiar y/o cofinanciar los programas de prevención del desplazamiento y reasentamiento, asistencia al proceso de desplazamiento involuntario y para mitigar los efectos generados por el proceso (reconstrucción de las condiciones sociales de vida de la población afectada) y la instalación y operación de la Red e Información

La participación del Fondo Nacional en la financiación y/o cofinanciación de los programas mencionados, no exime a las instituciones y entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales involucradas en la atención integral a la población desplazada y Reasentada involuntariamente; es decir para dar

sostenibilidad al Sistema Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada Involuntariamente.

Los recursos del Fondo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente estarán constituidos por:

- a. Los recursos que se le asignen del Presupuesto General de la Nación.
- b. Las donaciones en dinero que ingrese directamente al Fondo, previa la incorporación al Presupuesto General de la Nación y las donaciones en especie legalmente aceptadas.
- c. Los recursos de crédito que contrate la Nación para atender el objeto y funciones del Fondo, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación.
- d. Los aportes en dinero proveniente de la cooperación internacional, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación.
- e. Los demás bienes, derechos y recursos adjudicados, adquiridos o que adquiera a cualquier título de conformidad con la ley.

4.2.3. Plan Nacional de Atención Inclusiva para la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente

4.2.3.1. Objetivos

- a. Elaborar diagnósticos de las causas y agentes que generen el desplazamiento y reasentamiento involuntario, de las zonas del territorio nacional donde se produce los mayores flujos de población, de las zonas receptoras, de las personas y comunidades que son víctimas de esta situación y de las consecuencias sociales, económicos, jurídicos y políticas que ello genere.

- b.** Diseñar y adoptar medidas sociales-culturales, económicos, jurídicos, políticas y de seguridad, orientadas a la prevención y mitigación de los efectos que generarán el desplazamiento y reasentamiento involuntario.
- c.** Diseñar y adoptar medidas que garanticen a la población desplazada y reasentada involuntariamente su acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para que cree sus propias formas de subsistencia, de tal manera que su reincorporación a la vida social, laboral y cultural, se realice evitando procesos de segregación o estigmatización social.
- d.** Garantizar atención y protección eficaz a las comunidades campesinas del país, sometidas al desplazamiento y reasentamiento involuntario en correspondencia con sus usos y costumbres, y propiciando la reconstrucción.

El Plan Nacional de Atención Inclusiva para la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente como estructura práctica del Sistema Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente; estará conformada por proyectos conjugados en tres programas. El primer es el Programa de Información y comunicaciones, conformado por proyectos referidos a intercambio de información y promoción de la participación. El segundo es el Programa de desplazamiento y reasentamiento, conformado por proyectos referidos a marco de indemnización, asistencia para el restablecimiento de los medios de subsistencia, presupuesto y calendario de ejecución, y consulta y participación. Y finalmente, el Programa de monitoreo y evaluación conformado por proyectos referidos a seguimiento y evaluación, y resolución de quejas.

4.2.3.2. El marco de indemnización

El marco de indemnización especifica todas las formas de propiedad o derecho de uso de los bienes de la población afectada por el proyecto y la

estrategia para indemnizar a esas poblaciones por la pérdida parcial o total de esos bienes. El marco de indemnización debe incluir una descripción de los siguientes elementos:

a) todas las directrices sobre indemnización establecidas por el Gobierno Nacional, b) a falta de directrices en vigor, la metodología que se utilizará para valorar las pérdidas, c) los tipos y niveles de indemnización que se propone pagar, d) los criterios para establecer el derecho a la indemnización y asistencia, y e) cómo y cuándo se pagará la indemnización.

Además, se debe incluir métodos de consulta con representantes de las comunidades afectadas para evaluar la adecuación y aceptabilidad de la indemnización propuesta. Esas consultas son especialmente importantes cuando los valores del mercado de los bienes no están bien establecidos (mercados inmobiliarios) o son intangibles (valores sociales o culturales que no se presentan fácilmente a cuantificación monetaria). Se debe calcular y adjudicar los pagos de indemnización de conformidad con los siguientes principios:

- a)** Las tasas de indemnización se deben calcular en consulta con representantes de la población afectada para asegurarse sean justas y adecuadas.
- b)** La indemnización por la tierra, cultivos, árboles y otros bienes inmuebles debe ser suficiente para que las personas después puedan recuperar su nivel de vida después del reasentamiento.
- c)** La indemnización por estructuras debe ser por el costo total de reposición, excluida la depreciación e incluidos todos los derechos (como los permisos de construcción y los derechos de pago por el título) y los gastos de mano de obra.

Los promotores deben establecer y divulgar los criterios para considerar el derecho a las personas afectadas a recibir indemnización y otras modalidades de asistencia para el desplazamiento y reasentamiento involuntario. Las personas

desplazadas de los dos grupos que se mencionan seguidamente tienen derechos a indemnización por pérdida de tierras u otros bienes, como la vivienda y los cultivos expropiados para los fines del proyecto de desarrollo, y a asistencia para el reasentamiento:

- a)** Los que tienen derechos jurídicos formales sobre la tierra u otros bienes afectados (incluidos los derechos consuetudinarios y tradicionales al uso de la tierra u otros bienes).
- b)** Los que no tienen derechos jurídicos formales sobre la tierra u otros bienes en el momento del censo, pero que pueden reclamar esos derechos en virtud de la ocupación o el uso de esos bienes.

Dicho de otro modo, la ausencia de un título legal de propiedad sobre la tierra u otros bienes no es, en sí misma, un obstáculo a la indemnización por bienes perdidos u otra asistencia para el reasentamiento. Las personas incluidas en el segundo grupo pueden o no estar en la zona del proyecto en el momento del censo. Los usuarios estacionales del recurso, como los comuneros campesinos u originarios, pueden tener relación económica, social o cultural interdependiente con la zona a sanear.

Una vez establecidas unas tasas de indemnización aceptables, éstas se remiten por los Comités Inter-sectoriales al Consejo Nacional de Atención Inclusiva a la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente; quien preparará un presupuesto de pagos de indemnización y para seguir los progresos de la liquidación de reclamaciones de indemnización.

Quienes tengan derecho a indemnización deben ser notificados por adelantado, mediante un anuncio público, de la fecha, hora y lugar en que se efectuarán los pagos. Todos los que reciban pagos de indemnización deberán firmar recibos, que se archivarán para fines de auditoría. Los pagos en concepto

de indemnización deben ser vigilados y verificados por el Comité Inter-sectorial zonal.

Una de las premisas fundamentales de la política de desplazamiento y reasentamiento involuntario es que, cuando sea viable y las personas lo acepten, se deben ofrecer opciones de reasentamiento basadas en la tierra a las personas desplazadas cuyos medios de subsistencia dependen del uso de tierras (por ejemplo, agricultores y pastores). Estas opciones pueden incluir el reasentamiento en la tierra adquirida o comprada a tal fin, o el acceso a ella. Esa compensación de tierra por tierra debe ajustarse a las siguientes premisas:

- a) Las nuevas tierras deben tener un potencial productivo equivalente o superior al de las tierras que desalojarán las personas desplazadas.
- b) Las nuevas tierras deben estar ubicadas razonablemente cerca de las tierras que desalojarán las personas desplazadas.
- c) Las nuevas tierras deben otorgar sin “gasto de transacción”, como gastos de registros, impuestos sobre transferencia de propiedad o gravámenes acostumbrados.
- d) Las nuevas tierras deben estar preparadas (despejadas, niveladas y accesibles) para alcanzar niveles productivos similares a los de las tierras desalojadas (de preferencia, el proyecto debe remunerar a los afectados para que hagan estos trabajos).

4.2.3.3. Asistencia para el restablecimiento de los medios de subsistencia.

Siempre que sea posible, se debe evitar o reducir al mínimo el desplazamiento y reasentamiento de poblaciones estudiando otro diseño posible del proyecto. Cuando el desplazamiento y reasentamiento involuntario es

inevitable, se debe planificar y realizar el desplazamiento y reasentamiento involuntario como una iniciativa de desarrollo que dé a las personas afectadas la oportunidad de participar en la planificación y ejecución de las actividades de restablecimiento y mejorar sus medios de subsistencia. Se debe adaptar las siguientes medidas en favor de todas las poblaciones afectadas, incluidas si se da el caso, los miembros de las comunidades de acogida en que se establecen las personas desplazadas:

- a)** Informar a la población afectada de sus opciones y derechos en relación con el desplazamiento y reasentamiento.
- b)** Ofrecer opciones de reasentamiento económica y técnicamente viables a partir de los resultados de las consultas con las poblaciones afectadas y de la evaluación de alternativas de reasentamiento.
- c)** En la reubicación física, proporcionar ayuda para sufragar los gastos de traslado (subsídios de mudanza, transporte, asistencia especial y atención de la salud para los grupos vulnerables).
- d)** Proporcionar sitios para viviendas permanentes y recursos (en efectivo o en especie) para la construcción de viviendas; incluidos todos los derechos, impuestos, tributos y derechos de conexión a servicios públicos o, según sea el caso, tierras agrícolas o de pastoreo cuya combinación de potencial productivo, ventajas de ubicación y otros factores sea por lo menos equivalentes a la que tenía el sitio desalojado.
- e)** Proporcionar a la población afectada apoyo financiero para la transición (como empleo a corto plazo, ayuda de subsistencia o mantenimiento salarial).
- f)** Proporcionar a la población afectada asistencia para el desarrollo además de la indemnización por bienes perdidos, como preparación de las tierras, insumos agrícolas, facilidades de créditos y oportunidades de capacitación y empleo.

El desplazamiento y reasentamiento involuntario de comunidades afectadas por el proceso, tendrán los siguientes componentes:

a) Selección y preparación del sitio de reasentamiento:

El sitio del reasentamiento debe escogerse en consulta con todas las poblaciones desplazadas. Se deben evaluar los recursos y los planes para el uso de la tierra. La selección del lugar y las opciones de vivienda e infraestructura en los nuevos sitios deben reflejar tanto las preferencias de las poblaciones afectadas como las mejores oportunidades para el restablecimiento oportuno de los medios de subsistencia. La selección de sitios de reasentamientos que proporciones a la población acceso fiable a recursos productivos (tierras de labranza y pastoreo, agua y bosque), empleo y oportunidades comerciales fundamentales para restablecer los medios de subsistencia. Se debe evitar a toda costa el desmembramiento de las comunidades, ya que el mantenimiento de las redes sociales que vinculan a los miembros de la comunidad afectada es fundamental para la adecuada adaptación de la población a las nuevas condiciones sociales de vida.

Se precisará con precisión los siguientes requerimientos: descripción del lugar seleccionado (incluido los sitios alternativo), describir la evaluación preliminar del sitio (incluidos los resultados de la evaluación ambiental del emplazamiento y de la evaluación social de la población), y describir las opciones de vivienda, las necesidades de preparación de la tierra y la infraestructura servicios (caminos y senderos de acceso, suministro de agua, electricidad, alumbrado, drenaje y gestión de desastres).

Además, se entregará en un tiempo mínimo un título saneado sobre los nuevos sitios, libres de derechos de registro o licencia o gravámenes acostumbrados.

b) Calendario de reubicación y asistencia:

Se detallará el desplazamiento físico de las personas que se han de instalar en los sitios de reasentamiento. Se incluirán la fecha y hora del traslado, la forma en que se comunicará la información sobre el desplazamiento y reasentamiento a los comuneros afectados, los aspectos logísticos de transporte las personas y sus bienes al sitio, las disposiciones sobre viviendas y servicios temporarios (alimentación, agua, atención médica de emergencia y gestión de desechos) tanto durante el desalojo como a la reubicación al sitio. Se documentará y justificará todos los subsidios de mudanza que se paguen en el lugar de la asistencia para el reasentamiento.

Cuando el desplazamiento y reasentamiento involuntario afecte la capacidad de obtener ingresos a la comunidad afectada, la indemnización por sí sola no garantizará el restablecimiento o le mejora de las condiciones sociales de vida.

Por lo cual, se tomará en cuenta los siguientes considerandos:

a) Medios de subsistencia basados en la tierra:

Cuando se afecte a comunidades campesinas, nativas o indígenas o poblaciones en general que tengan una relación interdependiente con recursos naturales; se tendrá acceso fiable a tierras de pastoreo, bosques y recursos hídricos; la preparación física de tierras agrícolas (desmontes, nivelación, rutas de acceso y estabilización del suelo); cercado de pastizales o tierras de cultivo, insumos agrícolas (semillas, plántulas, fertilizantes, riego); servicios veterinarios, crédito de pequeña escala y acceso a los mercados.

b) Medios de subsistencia basados en el trabajo asalariado:

La capacitación y la ayuda para obtener trabajo, las disposiciones de los contratos celebrados con subcontratistas del proyecto relativas al empleo de trabajadores locales calificados, el seguro de desempleo y el crédito en pequeña

escala para financiar la creación de empresas podrían beneficiar a los asalariados de la comunidad. Se asignará tiempo suficiente a la capacitación de las personas afectadas, a fin de que puedan competir por los puestos de trabajo relacionados con el proyecto.

c) Medios de subsistencia basados en el trabajo empresarial:

Los empresarios y artesanos establecidos e incipientes podrán beneficiarse de préstamos o capacitaciones (planificación comercial, comercialización, levantamiento de inventarios y control de calidad) para ampliar sus empresas y generar puestos de trabajo local. Se fomentará el establecimiento de empresas locales adquiriendo de proveedores locales bienes y servicios para su proyecto.

d) Preservación de los bienes culturales:

Se documentará todas las actividades necesarias para proteger, trasladar y restablecer bienes culturales de todas las poblaciones afectadas. La complejidad de los afectados del proyecto puede hacer necesario un plan de gestión de bienes culturales separado. El desplazamiento de bienes culturales se realizará en consulta a las comunidades y en colaboración con los organismos gubernamentales designados. La reubicación de artefactos y estructuras relacionales con el culto religioso sólo se puede tener lugar después de celebrar consultas y de incluir indemnización por los rituales conexos. Se pagará a los familiares por los gastos logísticos y rituales de exhumación de tumbas y trasladar los restos a nuevos sitios.

4.2.3.4. Presupuesto y calendario de ejecución.

Se detallará los costos del desplazamiento y reasentamiento involuntario por categorías de efectos, prestaciones y otros gastos de reasentamiento y desplazamiento, incluidos los correspondientes a capacitaciones, gestión de proyectos y actividades de seguimiento. Los resultados se presentarán en la forma

de un cuadro que muestre los gastos durante todo el período del proyecto. Para asegurar que se tenga en cuenta todos los efectos negativos, las partidas presupuestales se deben comprobar en relación con categorías de efectos negativos y prestaciones.

Se incluirá todos los supuestos hechos al calcular las tasas de indemnización y otros gastos, y debe tener en cuenta imprevistos físicos y de costo. El valor de en efectivo de las medidas de indemnización se debe reajustar en relación al dólar de las E.U. u otra moneda estable para proteger a quienes tienen derecho de indemnización en efectivo contra la inflación o la devaluación de la moneda local.

El presupuesto estará vinculado a un calendario de ejecución detallado de todas las actividades clave de desplazamiento y reasentamiento. Este calendario, a su vez, debe estar sincronizado con el calendario de construcción de obras civiles del proyecto. El cumplimiento del calendario en el terreno, es fundamental: la iniciación de las actividades sobre el terreno mucho antes de que comience el proyecto puede crear expectativas a nivel local y atraer a nuevos pobladores; la iniciación de las actividades mucho después del inicio del puede inferir en su ejecución, por lo cual se iniciará antes. Se prestará atención a los ciclos de agrícolas y laborales de las personas afectadas y se evitará la planificación de actividades de desplazamiento y reasentamiento en momentos en que puedan perturbar estos ciclos.

4.2.3.5. Consultas y participación.

Para lograr una planificación eficaz del desplazamiento y reasentamiento involuntario se realizará consultas periódicas con diversos partes interesadas del proyecto. En general, se entenderá como parte interesada a toda persona o grupo afectado o que se considere afectado por el proyecto; y toda persona o grupo que puede cumplir una función importantes en el diseño del proyecto, o influir en él de

manera positiva o negativa, incluida la comunidad de acogida. Las consultas servirán a los promotores y a los representantes de la población afectada por el proyecto la oportunidad de negociar el conjunto de medidas de indemnización y los requisitos que se deben cumplir para tener derecho a recibir indemnización, la asistencia para el desplazamiento y reasentamiento involuntario, las características del restablecimiento de las condiciones sociales de vida de la población y el calendario de las actividades de desplazamiento y reasentamiento.

En los casos de ser los afectados comuneros campesinos, indígenas o nativos; se debe de precisar metodologías que estén acorde con usos y costumbres culturales, teniendo en cuenta su institucionalidad y organización.

4.2.3.6. Intercambio de información.

El libre intercambio de información con las partes interesadas será fundamental para promover consultas públicas y una participación que resulte eficaz, y para realizar los objetivos de la planificación del desplazamiento y reasentamiento involuntario. Es por lo cual, se elaborará un Programa de Sensibilización e Información que contendrá los siguientes enunciados:

- a)** Identificar a todas las partes interesadas.
- b)** Informar tan pronto que sea posible a los dirigentes y organizaciones de las comunidades locales acerca del plan y pedirles que transmitan esa información a las personas que representan.
- c)** Informar a los interesados acerca de los efectos previstos del proyecto y de las medidas para mitigar esos efectos.
- d)** Después de terminar el censo y notificadas públicamente la fecha límite para determinar el derecho a recibir indemnización y asistencia para el desplazamiento y reasentamiento; se emitirá una notificación oficial por la que se prohíbe la construcción o la aprobación de la construcción de nuevos edificios o mejoras físicas en la zonas afectadas por el proyecto.

- e) Preparar folletos ilustrados con información sobre el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, detalles sobre los requerimientos para poder recibir indemnización, asistencia y las estrategias de mitigación de efectos, tasas de indemnización u otros derechos, un calendario de ejecución y todos los procedimientos de presentación de quejas.
- f) Preparar y publicar periódicamente información actualizada sobre las actividades desarrolladas.

La transmisión constante de información actualizada a las personas afectadas acerca de sus derechos y responsabilidades es fundamentales para el éxito de la planificación del desplazamiento y reasentamiento involuntario. Para lograr éste objetivo, la información debe ser accesible e inteligible. La información debe estar traducida a los dialectos y los idiomas autóctonos y transmitir por los medios de difusión que sean accesibles tanto a los que saben leer y escribir como a los analfabetos (radio, televisión, transmisiones de video móviles, tableros de anuncios públicos, periódicos, folletos y volantes, voceros municipales, y encuestas de puerta a puerta). Se especificará estrategias específicas para llegar a los grupos vulnerables que carezcan de acceso a medios públicos de comunicación y de intercambio de información.

4.2.3.7. Promoción de la participación.

Se facilitará una serie de consultas con las partes interesadas durante todo el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, tanto en la planificación y ejecución. La finalidad de estas consultas es informar a las partes interesadas acerca del proyecto y sus efectos y dar a la población la oportunidad de expresar sus preocupaciones y proponer alternativas.

La deliberación debe estar centrada en la atención en los efectos del proyecto y las medidas para mitigar los efectos. Habida cuenta que puede haber

discriminación en sus sociedades, las mujeres y los miembros de otros grupos vulnerables pueden tener dificultad a para defender sus intereses en un foro público. Por esta razón, se administrará estrategias suficientes para incluir a esta población. Los funcionarios pueden realizar actividades de extensión, como consultas con grupos de discusión, para tomar conocimiento de las preocupaciones de los grupos vulnerables y transmitirlos a los planificadores del proceso de desplazamiento y reasentamiento.

El objetivo de estas consultas es asegurar la participación de todas las personas afectadas en la planificación y ejecución del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. Particularmente en las siguientes esferas:

- a)** Diseño de proyectos alternativos.
- b)** Evaluación de los efectos del proyecto.
- c)** Estrategias de mitigación y restablecimiento de las condiciones sociales de vida.
- d)** Tasas de indemnización y derecho a recibir prestaciones.
- e)** Seleccionar el sitio del reasentamiento y fechas de la reubicación.
- f)** Iniciativas y oportunidades de desarrollo.
- g)** Formulación de los procedimientos para atender reclamaciones y resolver controversias.
- h)** Mecanismos de seguimiento y evaluación y para la aplicación de medidas correctivas.

Las consultas periódicas a la población afectada tienen como objetivo fiscalizar la eficiencia y adecuación del conjunto de medidas de indemnización por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, las actividades de restablecimiento de condiciones sociales de vida y las iniciativas de desarrollo.

Se documentará la divulgación de información y sus actividades de consulta pública. Esta documentación identificará a las personas y/o entidades consultadas, las cuestiones examinadas y las actividades complementarias requeridas.

4.2.3.8. Resolución de quejas.

El proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario da lugar inevitablemente a quejas de la población afectada relativas a cuestiones que van desde las tasas de indemnización y los criterios para establecer el derecho a recibir indemnización y asistencia hasta la ubicación. Por tales razones, se establecerá todos los procedimientos necesarios para que las personas afectadas puedan registrar sus quejas o una reclamación, con la seguridad de obtener una resolución oportuna y satisfactoria de su queja o reclamación. Además, se adoptara medidas necesarias para la atención de mujeres y miembros de poblaciones vulnerables (indígenas, campesinos o nativos), a fin de asegurar que tengan acceso a los procedimientos de resolución de quejas.

Los canales de mediación pueden incluir a instituciones tradicionales y consuetudinarias de solución de controversias. Se procederá a hacer todo lo necesario para resolver las quejas en el plano comunitario. El recurso a la justicia debe evitarse, y utilizarse sólo como último recurso.

El sistema de resolución de quejas contendrá las siguientes descripciones:

- a)** Los arreglos institucionales.
- b)** Los procedimientos de registro y tramitación de quejas.
- c)** Los mecanismos de adjudicación y apelación de fallos.
- d)** Un calendario, con indicación de plazos, para todo el proceso de resolución de quejas.

4.2.3.9. Seguimiento y evaluación.

Se elaborará un informe detallado de la eficiencia del Plan Nacional ejecutado, donde se incluye los procesos físicos del reasentamiento y las actividades de restablecimiento de condiciones de vida, el desembolso de los pagos en concepto de indemnización, la eficacia de las actividades de consulta pública y participación, y la sostenibilidad del restablecimiento de los ingresos y las actividades de desarrollo implementadas con la población para mitigar los efectos del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. El objetivo del seguimiento es informar e identificar los problemas y los aspectos positivos y negativos de las estrategias de mitigación implementadas; para ajustar oportunamente las disposiciones relativas a la ejecución.

El seguimiento de los resultados será una función interna que permitirá cuantificar los progresos físicos en relación con las metas establecidas. Los progresos se informarán en relación con un calendario de medidas requeridas. Como por ejemplo de metas de resultados se pueden citar los siguientes:

- a)** Celebración de reuniones públicas.
- b)** Terminación de los censos, inventarios de bienes, evaluaciones y estudios socioeconómicos.
- c)** Establecimiento y puesta en práctica de los procedimientos de resolución de quejas.
- d)** Desembolso de los pagos en concepto de indemnización.
- e)** Asignación de recursos de restablecimiento de condiciones de vida.
- f)** Terminación de las viviendas y la infraestructura conexa.
- g)** Finalización de la reubicación de la población.
- h)** Iniciación de las actividades de restablecimiento de los ingresos y actividades de desarrollo.
- i)** Presentación de los informes de seguimiento y evaluación.

El seguimiento de resultados se estará integrado en la gestión integral del proyecto para asegurar que las actividades del plan de desplazamiento y reasentamiento involuntario estén sincronizadas con todas las actividades de ejecución del proyecto. Los informes de seguimiento de los resultados se deben preparar a intervalos regulares (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) comenzando con la iniciación de cualquier actividad relacionada con el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

El seguimiento de los efectos es un instrumento obligatorio que tiene como finalidad evaluar los efectos del desplazamiento y reasentamiento involuntario, verificar los seguimientos de los resultados y determinar los ajustes necesarios para una adecuada mitigación de efectos. Las personas afectadas deben participar en todas las fases del seguimiento de los efectos, incluida la identificación y medición de los indicadores básicos.

Los efectos registrados se compararán con las condiciones sociales de vida de la población antes del desplazamiento y reasentamiento. Estos datos básicos se establecerán mediante censo, los inventarios de bienes, las evaluaciones del uso de tierras y los estudios socioeconómicos de la población. Se establecerán indicadores que se puedan verificar de manera objetiva para medir los efectos del desplazamiento y reasentamiento sobre las condiciones sociales de vida. Además, la evaluación contará con indicadores cuantitativos y cualitativos; éste último para evaluar el grado de satisfacción de la población afectada.

La evaluación continuará durante cinco años después de haberse implementado el Plan para velar que las estrategias de mitigación de efectos sean eficaces y para verificar que el restablecimiento de las condiciones sociales de vida sean las adecuadas.

3.2.4. Directrices de gestión para comunidades campesinas.

A nivel nacional e internacional, se ha prestado mucha atención a estos procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario, sin embargo aún no se ha logrado la adopción de un marco normativo-institucional que garantice el respeto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos vinculantes con la humanidad.

No obstante, esta Directiva— como parte del Plan Nacional de Atención Inclusiva para la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente— pretende ser una propuesta de carácter persuasivo que proporcione una orientación práctica y sea al mismo tiempo un instrumento de política educativa y de concientización. Del mismo modo, pueda desempeñar una función preventiva en la respuesta tan necesaria para el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

En los últimos años, las situaciones de desplazamiento y reasentamiento involuntario al interior de nuestro país han generado un aproximado de 12 millones de personas afectadas y expuestas a la vulneración de sus derechos fundamentales; siendo las comunidades campesinas las poblaciones con mayor índice de afectación a sus estructuras sociales de vida.

En la presente directriz se establecen los criterios políticos para lograr que las comunidades campesinas consientan los beneficios del Proyecto de desarrollo como parte de su modelo de desarrollo y evitar o mitigar los impactos adversos a las comunidades campesinas. De esta manera se crea medidas especiales cuando los procesos de desplazamiento y reasentamiento involuntario, originados por Proyectos de desarrollo de gran escala, afecten a las comunidades campesinas de nuestro país, cuya condición social y económica limita su capacidad para establecer sus intereses y derechos a la tierra y otros recursos productivos, políticos y culturales.

3.2.4.1. Reconocimiento de comunidades campesinas.

Los términos de “pobladores de comunidades nativas o campesinas”, “pueblos indígenas”, “nativos de etnias” y “tribus inferiores” refieren a grupos sociales cuya identidad social y cultural es diferente a la sociedad mayor, lo cual los puede hacer vulnerables a ser desfavorecidos en el proceso de desarrollo.

Entendiendo que las condiciones de estas comunidades son diversas y cambiantes, no es posible captar su diversidad en una única definición. Usualmente, las comunidades campesinas constituyen uno de los segmentos más pobres de la población nacional, su la lógica de producción estaba orientada a la satisfacción de necesidades de consumo familiar y de producción de las parcelas, con particularidades sociales y culturales, y en relación con el uso predominante de la fuerza de trabajo familiar, un nivel tecnológico elemental, y una dotación escasa, en la mayoría de los casos fragmentada y dispersa. Además de entenderse como un conjunto de colectivos con intereses diversos sobre los que inciden de manera particular un vínculo territorial y vínculo de parentesco y residencia que configuran espacios de vida; con un territorio usufructuado familiar y comunalmente, grupos de familias identificados comunalmente, dirigentes comunalmente, interacción entre comunidades campesinas y un, limitado, reconocimiento estatal. De categórica se puede decir que son poblaciones:

- a)** Con un fuerte apego a los territorios ancestrales y a los recursos naturales de las zonas donde habitan;
- b)** El de que se identifiquen a sí mismas, y sean identificadas por terceros, como miembros de un grupo cultural bien definido;
- c)** Un idioma indígena que, con frecuencia, es diferente al idioma nacional;
- d)** La existencia de instituciones sociales y políticas usuales, y
- e)** La producción enfocada principalmente hacia la subsistencia.

El enfoque político que se adoptará para el tratamiento de las poblaciones de comunidades campesinas consistirá en abordar la cuestión estructuralmente

trascendental de la participación razonada de esas poblaciones. Por lo cual, la identificación de las preferencias locales a través de las consultas directas, la incorporación de los conocimientos comunales e indígenas a los métodos del proyecto, y la correspondiente utilización de especialistas con experiencia son actividades esenciales para todo proyecto que afecte a los pobladores de comunidades campesinas y sus derechos a los recursos naturales y económicos.

3.2.4.2. Consentimiento libre, previo e informado de las comunidades campesinas.

La conjugación del marco normativo nacional e internacional coinciden al establecer que los Proyectos de desarrollo podrán ser autorizados por el gobierno siempre que se cuente previamente con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos interesados y además se cuente también con un acuerdo respecto a una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible, la opción de retornar. Es decir, que en el caso de Proyectos de desarrollo que se pretendan ejecutar donde habiten comunidades campesinas se deberá considerar que estas poblaciones previamente deberán consentir el Proyecto como parte de su modelo de desarrollo. Las características fundamentales de este proceso de consulta son las siguientes:

- a)** Constituye un proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades campesinas.
- b)** El proceso no debe ser entendido sólo como un proceso de información sino que debe asegurar un verdadero intercambio de información entre las partes.
- c)** El proceso deberá ser llevado a cabo de buena fe buscando lograr el consentimiento; a través de los mecanismos culturalmente adecuados respetando de este modo las costumbres culturales de las comunidades campesinas a consultar.

En tal sentido, antes de que el Estado decida emprender en territorio habitado por comunidades campesinas actividades de desarrollo de gran envergadura, sería necesario que se lleve a cabo un proceso de consulta cuyo resultado necesariamente deberá ser el consentimiento para la ejecución de dichos Proyectos; el supuesto anterior también es válido aun cuando dicho proyecto de desarrollo haya sido declarado de interés público superior o primordial, toda vez que ningún Estado puede justificar el incumplimiento de normas internacionales amparándose en normas internas.

3.2.4.3. Consideraciones de los programas para las comunidades campesinas.

El Plan Nacional de Atención Inclusiva para la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente contiene como especificidad programas que se diseñan teniendo en cuenta las particularidades de las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas de la población a ser afectada. Los tres programas son: Programa de información y comunicación, Programa de desplazamiento y reasentamiento involuntario y Programa de monitoreo y evaluación.

Para el diseño de los programas que se implementarán en las comunidades campesinas, que contendrán el Plan Nacional, se debe considerar las siguientes condiciones:

- a) La medida esencial en el diseño de los programas es la consideración en su formulación procedimientos de desarrollo culturalmente apropiado que se base en la consideración de todas las opciones preferidas por las comunidades campesinas afectadas por el Proyecto de desarrollo.

- b)** En los estudios, se debería poner el mayor empeño para prever las tendencias adversas que podría ocasionar el Proyecto y para desarrollar los medios que permitan evitar o atenuar los perjuicios.
- c)** El Observatorio de Desplazamiento y Reasentamiento Involuntario, órgano responsable de la relación entre el gobierno y las comunidades campesinas, deberían poseer los conocimientos sociales, técnicos y jurídicos necesarios para llevar a cabo las actividades de desarrollo propuestas.
- d)** Se tomará en cuenta, en el diseño de los programas, las estructuras locales de organización social, las creencias religiosas y el uso de los recursos.
- e)** Las actividades de desarrollo debería servir de apoyo a los sistemas de producción que se adapten a las necesidades y el entorno de las comunidades campesinas, y deberían contribuir al logro de niveles sostenibles en los sistemas de producción sometidos a la afectación.
- f)** Las actividades de desarrollo que conformen los programas deberían evitar crear o agravar la dependencia a las comunidades campesinas en las entidades del Proyecto. La planificación debería fomentar el traspaso, a la brevedad posible, de la administración de lo proyectado a las personas de la comunidad. Las proyecciones de desarrollo incluirán la enseñanza y capacitación general de las comunidades campesinas, originaras e indígenas en los temas de administración desde el comienzo de los programas.
- g)** La eficiencia de los resultados de la planificación para las comunidades campesinas exige, con frecuencia, largos periodos de gestación, así como disposiciones para efectuar un seguimiento prolongando. Las zonas alejadas o desatendidas respecto de las cuales se dispone de poca experiencia previa requieren, con frecuencia, investigaciones adicionales y programas piloto para pulir las propuestas de desarrollo.

3.2.4.4. Requerimientos de los Programas del Plan Nacional.

Los programas que conformarían el Plan Nacional de Atención Inclusiva para la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente, deberán considerar la protección adecuada de los derechos de las comunidades campesinas exigirá la aplicación de elementos especiales que no podrían ser ajenos a las metas principales del Plan Nacional. Esos elementos esenciales serían incluidos en actividades relacionadas con la salud y la nutrición, la infraestructura productiva, la preservación lingüística y cultural, el derecho a los recursos naturales, y la educación. Los elementos de los programas que se deben considerar para generar el desarrollo de las comunidades campesinas, son los siguientes:

a) Consideración institucional.

Los departamentos del Observatorio del Desplazamiento y Reasentamiento Involuntario deben mantener la información acerca de las tendencias en las políticas gubernamentales y no gubernamentales y las instituciones que se ocupan de las comunidades campesinas. Las cuestiones relativas a las comunidades mencionadas deben ser abordadas explícitamente en los estudios sectoriales y sub-sectoriales y deben ser incorporadas al diálogo con las poblaciones a ser afectadas. Con frecuencia es necesario fortalecer el marco de la política de desarrollo nacional y las instituciones para las comunidades campesinas a fin de establecer una base firme para el diseño y la implementación de los componentes, programas, del Plan Nacional de Atención Inclusiva para la Población Desplazada y Reasentada Involuntariamente.

El Consejo Nacional de Atención Inclusiva a Poblaciones Desplazadas y Reasentadas Involuntariamente proporcionará la asistencia técnica necesaria para desarrollar las capacidades de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para abordar las cuestiones relativas a las comunidades campesinas. Entre las instituciones que conformaran de manera permanente en el

proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, es el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA).

Las cuestiones institucionales que se deben abordar son i) la disponibilidad de fondos para inversiones y operaciones; ii) la capacidad de las organizaciones de las comunidades campesinas, las entidades no gubernamentales para relacionarse con las instituciones gubernamentales especializadas; iv) la capacidad del organismo de ejecución para movilizar a otros organismos que participan en implementación de los programas del Plan Nacional.

b) Consideraciones básicas.

Los componentes básicos que se han de considerar son i) mapas y fotos aéreas exactos y actualizados de la zona de influencia del Proyecto de desarrollo y de las zonas habitadas por las comunidades campesina; ii) un análisis de la estructura socio-cultural, organizacional y de las fuentes de ingresos de la población; iii) inventarios de los recursos que utilizan las comunidades campesinas, y los datos técnicos acerca de sus sistemas de producción; y iv) la relación entre las poblaciones afectadas y otro grupos locales y nacionales. Es muy importante que los estudios de los datos básicos capten todas las actividades relacionadas con la salud y la nutrición, la preservación lingüística y cultural, el derecho a los recursos naturales, y la educación de las comunidades campesinas. Los expertos sociales y técnicos calificados deberían realizar visitas *in situ* para verificar y actualizar las fuentes secundarias.

c) Consideraciones en la tenencia de la tierra.

Se considerará las normas internas de las comunidades campesinas, para establecer la posesión o tenencia de las hectáreas productiva para ser incluidas en el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario. En los casos en que las hectáreas de producción tradicionales de las comunidades campesinas, hayan sido incorporadas por ley al dominio público y cuando no sea apropiado convertir los derechos de propiedad legal, se deberían instrumentar acuerdos alternativos para otorgar derechos renovables a largo plazo de custodia y uso a

las comunidades campesinas. Esas medidas se deberían adoptar antes de la iniciación que podrían estar condicionadas al reconocimiento de los títulos de propiedad de las tierras.

d) Consideraciones para la participación comunal.

Se implementaran diseños específicos para efectivizar la participación de las comunidades campesinas en la toma de decisiones durante la planificación, implementación y evaluación de los programas. En la participación se incluirá a las organizaciones representativas de las comunidades afectadas en los Comités inter-sectoriales zonales, proporcionando los canales eficaces para comunicar las preferencias locales. Además, de diseñar de las estrategias de participación directa de los comuneros a nivel individual. No existe, sin embargo, un método infalible para garantizar la plena participación a nivel local; por ello, es necesario recurrir al asesoramiento sociológico y técnico proporcionado a través de las divisiones del Observatorio de Desplazamiento y Reasentamiento Involuntario. Todo diseño estará proporcionado a las condiciones socio-culturales de la población; donde de ser necesario se incluirán traductores lingüísticos.

e) Consideraciones técnicas para la mitigación de impactos.

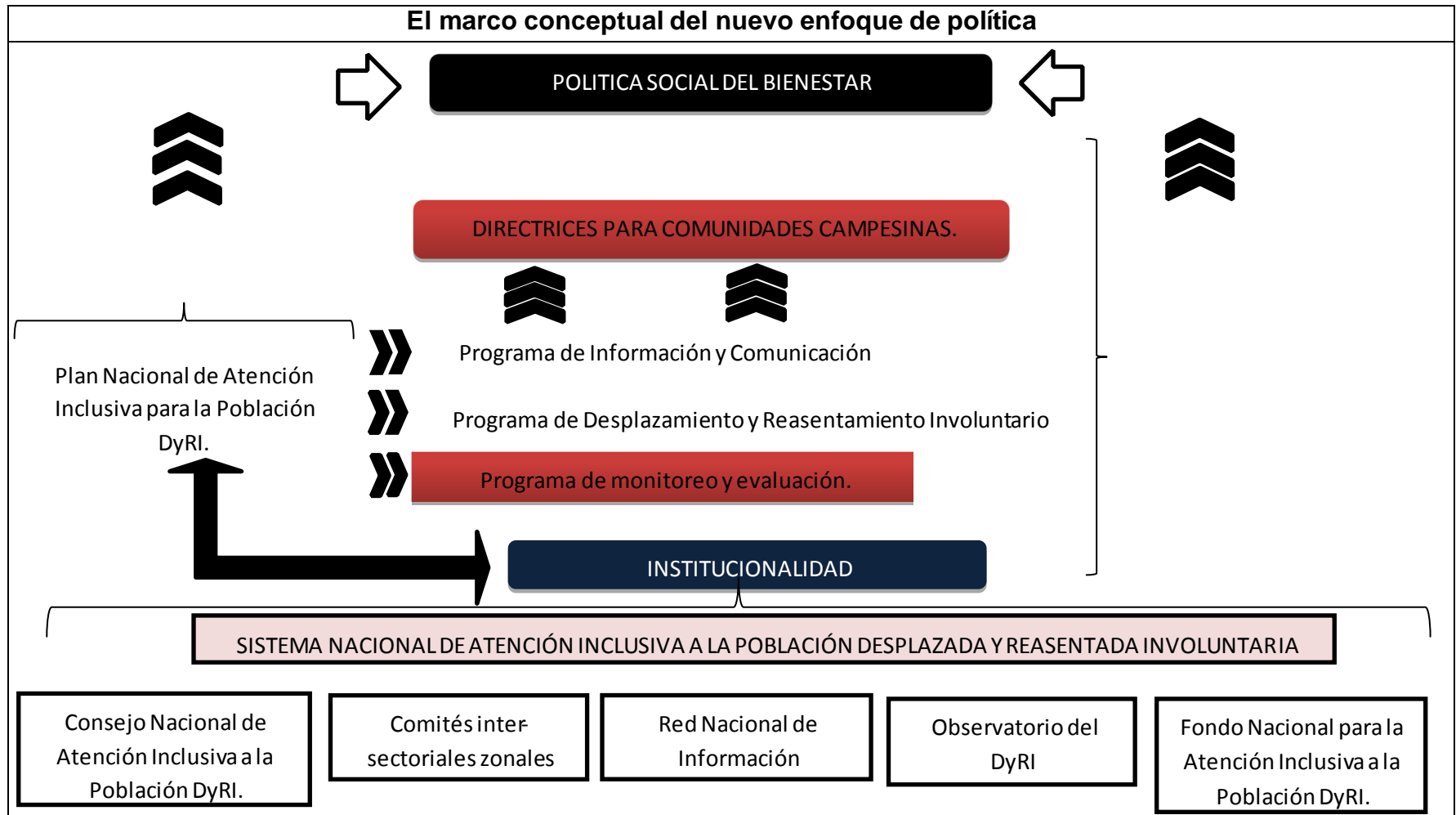
Para generar eficiencia en las propuestas técnicas se debe partir de investigaciones in situ efectuado por profesionales calificados por el Observatorio de Desplazamiento y Reasentamiento Involuntario, y especialmente por el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA). Se elaboraran y evaluarían las descripciones detalladas de los servicios propuestos en esferas tales como la educación, la salud, el crédito y la asistencia legal; manteniendo una metodología transversal de fortalecimiento de capacidades comunitarias e individuales. Se deberían incluir descripciones técnicas para las inversiones planificadas en la infraestructura productiva. Además, se debe considerar que los planes que aprovechen los conocimientos de las comunidades campesinas, originarios e indígenas, con frecuencia, tienen más éxito que aquellos que introducen principios e instituciones totalmente nuevos.

Los componentes deberán incluir estrategias de ejecución con puntos de referencias que permitiesen medir los avances a intervalos apropiados. Será necesario instrumentar programas pilotos que proporcionen información relativa a la planificación a fin de escalar el componente del Plan Nacional relativo a las comunidades campesinas. Los programas de desarrollo y/o mitigación deberán generar la sostenibilidad a largo plazo de las actividades del Plan Nacional.

d) Consideraciones para el seguimiento y evaluación.

El seguimiento por parte de los representantes de las comunidades campesinas se realizara de forma institucional por medio de los Comités intersectoriales; además de las instituciones que las conforman. Es decir, el seguimiento y la evaluación no debe limitarse a las poblaciones afectadas directamente, sino también a las instituciones y organizaciones especializadas con el desarrollo de los diferentes componentes de los programas del Plan Nacional. El personal calificado profesionalmente deberán estar integrado por profesionales en el ámbito de las ciencias sociales que tengan experiencia, y se debería establecer el formato de los informes y el calendario para su presentación de acuerdo con las necesidades del Plan Nacional y de las comunidades campesinas a ser afectadas por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

3.3. Representación gráfica.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN.

En Perú, los grandes proyectos de desarrollo han traído aparejados beneficios pero también inevitables impactos negativos en determinadas poblaciones. Las experiencias acumuladas de la implementación de proyectos, especialmente los hidroeléctricos, que implicaron movilizaciones humanas involuntarias, han hecho patente el drama social para los afectados, resultado de tal proceso.

Tomado como modelo el supuesto éxito del Proyecto Especial Olmos Tinajones en la implementación del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario en la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos; se evidencia las implicancias que puede generar estos proyectos en las condiciones sociales de vida de las familias comunales implicadas.

Los comuneros que habitaban los caseríos de La Algodonera, Pan de Azúcar, Abrigos de Pañala y Vingar Grande; pertenecientes a la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos; se caracterizaban por presentar las peculiaridades de las familias extensas del ámbito rural. Es decir, la convivencia comunal se articulaba bajo parentesco familiar y relaciones simbólicas de cooperación comunal, representados por una organización comunal (institucionalidad), con costumbres que estaban determinadas por las condiciones relacionales con sus recursos naturales (relación hombre-naturaleza y hombre-hombre), como por ejemplo: el mapa mental de recursos aptos para ser explotados, el conocimientos tradicional de cómo explotar esos recursos y las redes sociales construidas a ese efecto.

Poseían una lógica de producción que estaba orientada a la satisfacción de necesidades de consumo familiar, de producción parcelas y crianza de ganado, con el uso predominante de la fuerza de trabajo familiar, un nivel de tecnología insipiente y con dotaciones familiares de tierras o parcelas fragmentadas y dispersas, situadas en zonas agroecológicamente pobres en determinadas épocas del año. Y habitaban zonas de difícil acceso, carentes de infraestructura física e institucional y donde la participación del Estado era practicante inexistente.

En conclusión se puede inferir que la familias comunales antes de ser afectadas por el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario mantenían una particular complejidad en su producción y reproducción social, económica, política y cultural; en donde los roles de cada miembro familiar y comunal estaban definidos a contribuir con la sostenibilidad de sus estructuras particulares de desarrollo comunal.

El Plan de Compensación y Relocalización Involuntario, diseñado por el Proyecto Especial Olmos Tinajones para el saneamiento físico legal de las hectáreas de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, no solo ha implementado deficientes estrategias de interacción y/o relación con la producción material de la acción individual y colectiva, sino también con las dimensiones simbólicas o subjetivas que recrean el contexto y que determina la externalización de las acciones propias de la comunidad. Es decir, no se consideró el complejo conjunto de reglas, valores, flujos internos de información y las relaciones estructurales de organización de las personas a ser afectadas.

En consecuencia, se generan nuevas condiciones sociales de vida en los comuneros campesinos reasentada en La Algodonera. Entre sus nuevas características se reconoce: familias extensas desarticuladas, pérdidas constantes de los medios de producción generadores de los recursos económicos familiares, reducción geográfica de su ámbito de desarrollo humano, una infraestructura moderna no condicionada al modelo de desarrollo comunal, modificación de los roles de familiares— especialmente, los roles de producción están centralizados únicamente en los jefes de familia y/o hijos mayores—, las redes de solidaridad, los sistemas tradicionales de autoridad y organización sociales formales e informales, las concepciones de pertenencia, entre otras.

El proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario implementado en la comunidad campesina de Olmos constituye un fenómeno que ocurre en un marco temporal significativo en términos de procesos históricos, que ha generado evidentes modificaciones estructurales en los sistemas sociales, económico, político y culturales.

En tanto que implica, la movilización de la población para el aprovechamiento del área geográfica saneada físicamente y, con ello, somete a dura prueba los mecanismos tradicionales de supervivencia, altera los parámetros básicos de las estrategias de adaptación de los afectados y a una inseguridad de sus nuevas condiciones. Además, de la ejecución planificada de la reestructuración del sistema social, mediante estrategias de mitigación de efectos deficientes; resultando como consecuencia final el empobrecimiento de la población afectada por el proceso de estudio.

Las teorías de la Complejidad, el Constructivismo estructural, de La acumulación primitiva y el enfoque teórico del Desarrollo Humano desde la Política Social constituyen el marco teórico que interpreta el proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, implementado en la Comunidad Campesina de Olmos, como un objeto fenoménico relacional particularizado por un escenario social singular y, a la vez, está determinado por la auto-organización de una estructura social mayor. Llegando a incluir la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzada de comunidades campesinas u originarias; generando la conversión de diversas formas de derechos de propiedad colectiva en derechos de propiedad exclusiva. Un proceso de enajenación que conlleva relaciones de lucha de poderes de capital, entre y de agentes que ocupan posiciones desiguales, dando como resultado la dominación sobre los económica y socialmente marginados y un impacto desproporcional en sus estructuras culturales, sociales, económicos y políticos. El desplazamiento y reasentamiento involuntario aumenta su dramatismo cuando los impactos a generarse no se le contraponen estrategias de mitigación, resultando el empobrecimiento constante de la población afectada.

RECOMENDACIONES.

Como se ha evidenciado en la investigación, los objetivos del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos plantea una paradoja entre los requerimientos del desarrollo económico de una región (o de un país) y los costos sociales en determinadas poblaciones, lo que ha convertido su política de desplazamiento y reasentamiento involuntario en el elemento más controvertido de dicho proyecto.

Esta investigación sociológica ha permitido conocer y comprender las consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas, identificando patrones de comportamiento que se manifiesta en el proceso involuntario del desplazamiento y reasentamiento. A partir de esta comprensión es posible recomendar al Estado peruano la creación e implementación de un marco políticoinstitucional referido a la orientación del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario, implementado en comunidades campesinas del país, que estén centradas en la protección, prevención y asistencia de los derechos humanos, necesidades y oportunidades vitales de las familias afectadas, mediante instrumentos que garanticen ciertos niveles y medios materiales de existencia y el fomento y apoyo a la realización individual y colectiva según sus parámetros particulares de desarrollo humano.

Es por ello que, la propuesta de nuestro estudio refiere al Sistema Nacional de Atención inclusiva a la Población Desplazada Involuntariamente con sus respectivos componentes, como una alternativa para la implementación de un eficiente proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario en comunidades campesinas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Alejandro Diez (1999). Comunidades mestizas, tierras, elecciones y rituales en la sierra de Pacaipampa (Piura). PUCP (Fondo editorial) y CIPCA.
2. BARTOLOME Leopoldo
 1983: "El papel de los programas de acción social en los procesos de relocalización compulsiva de población", en *Revista Interamericana de Planeación*, vol. XVII, núm. 68, México.

 1984: "Forced Resettlement and Survival Systems of the Urban Poor", en *Ethnology*, vol XXIII, núm. 3, University of Pittsburgh, USA.

 1984 "Aspectos sociales de la relocalización de la población afectada por la construcción de grandes represas", en *Efectos Sociales de las Grandes Represas en América Latina*, Suárez, Franco y Cohen Comp., CIDES-ILPES, Buenos Aires, Argentina.
3. BARTOLOME Leopoldo (comp.) (1985) *Relocalizados: Antropología Social de las Poblaciones Desplazadas*, Colección Hombre y Sociedad, Ediciones del IDES, Buenos Aires, Argentina.
4. BARTOLOME, Miguel y Alicia Barabas 1990 *La Presa Cerro de Oro y el Ingeniero el Gran Dios: relocalización y etnocidio chinanteco en México*, 2 Tomos, Colección Presencias, núms. 19 y 20, Instituto Nacional

Indigenista Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, México.

5. Bruno Revesz. Catacaos (1992): una comunidad en la modernidad. En: Debate Agrario No. 14. Lima, CEPES, 75-105 pp.
6. Bourdieu, Pierre. (2002). Campo de poder, campo intelectual. Montessor. Barcelona, (127) 74-85.
7. Bourdieu, Pierre et al. (1993). La miseria del mundo, Paris: Ed du Seull.
8. Busso G. (2001). *Vulnerabilidad social: Nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI*. Santiago de Chile: CELADE.
9. Berríos C, Alva M. y Zambrano A. (2012): *Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos (impacto y consecuencias)* (79) 50-67.
10. Cernea, M.

(1999). "Riesgos de empobrecimiento y reconstrucción: un modelo para el desplazamiento y la relocalización de poblaciones", en Revista Antropología N°5, Universidad Nacional de Misiones, Argentina.

(2000). *Reasentamiento de población y estudios sociales*. Washington, Estados Unidos: Banco Mundial.

11. Enríquez I. (2010). *La construcción social de las teorías del desarrollo*, México: Miguel Ángel Porrúa.
12. Earls J. (2011). *Introducción a la teoría de sistemas complejos*, Perú: Fondo editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.
13. Fernando Eguren (1993). *Comunidades Campesinas y su protección*. 59 p. En: *Comunidades campesinas y nativas en el nuevo contexto nacional*. CAAAP, SER. Lima-Perú. Editor Máximo Gallo. 230 pp.
14. Guitierrez, Gino (1973). *Prácticas sociales: una introducción a Pierre Bourdieu*, Madrid: Tierra de nadie. (72).
174-179.
15. Gonzáles O. (1994). *Economía de la Comunidad Campesina*. En *Aproximación Regional*. Lima, IEP.
16. Giddens, A. (1999). *La tercera vía: la renovación de la socialdemocracia*. Madrid, Taurus.
17. Gonzáles A., García H. y Vargas V. (2007). *Interculturalidad: elementos para la construcción de sus bases conceptuales*. Revista antropológica. Chile, 131(9):106-5.

18. Granada, J. (2012). Acción colectiva y oportunidades políticas en escenarios de políticas públicas: el caso de desplazados forzado en Medellín. (47). 76-97.
19. Herrán, Carlos (1972). La cultura de la Pobreza, en Transformaciones nº 47, CEPAL. Buenos Aires, pp. 4-57.
20. Morin, Edgar. (1986). *El Método III: El conocimiento del conocimiento*. Cátedra, Madrid, pp. 45-51.
21. Marchioni, M. (1990). Comunidad, participación y desarrollo: teoría y metodología de la intervención comunitaria. Madrid. Ed. Popular.
22. Morin, Edgar. (1990). *Introducción al Pensamiento Complejo*. Reimpresión N° 4. Gedisa, Barcelona.
23. Mejía, M. (1999). Economic Dimensions of Urban Resettlement: Experiences from Latin America. En: Cernea (1999).
24. Morin, Edgar. (2008). *Epistemología de la complejidad*. Biblioteca virtual participa de la complejidad, 2004b. 19-30.
25. Oslender, U. (2010). *La banalidad del desplazamiento: de peleas estadísticas y vacías en la representación étnica del desplazamiento forzado en Colombia*. Universistas humanistas (69). 139-161.
26. Ortiz I. (2007). *Política social*. New York: UNDESA. (76) 25-49.
27. Portugal, J. (1999). *Hacia un sistema peruano rural*.

Puno: Escuela Normal de Puno, pp. 210.

28. Prats, Joan. (2002). *Instituciones y desarrollo en América Latina ¿Un rol para la ética?* E.E.U.U: Oxford University Press (204) 120-129.
29. Ramos. I, Sevillano, M. y Santillán A. (2010). *El desplazamiento forzado interno: El caso de proyectos de desarrollo. Programa social de indígenas* (50), 14.
30. Ramón P. (2000). Imágenes de la comunidad: indígenas, campesinas y antropólogos del Perú, en Compendio de Antropología Peruana. Ed. Carlos Degregori.
Lima, PUC, p. 443.
31. Reynoso, Carlos. (2006). Complejidad y caos. Una exploración de la complejidad de Edgar Morin. 1º ed. Editorial SB, Buenos Aires.
32. Real academia de la lengua española. *Diccionario de la lengua española*. Madrid, 2007.
33. Rodríguez, F. (1979). *Introducción en la Política Social*. Vol. I. Madrid. Cíttas.
34. Rodríguez, G. (1985). Tendencia actual del intervencionismo estatal y su influencia en los modos de estructuración social, en Reis, N° 31, pp. 79-104.
35. Lins, Gustavo. (1985). Proyectos en gran escala: hacia un marco conceptual para el análisis de una forma de producción temporaria, en Relocalizados: Antropología Social de las Poblaciones Desplazadas, Leopoldo

Bartolomé (comp.). Colección Hombre y Sociedad, Ediciones del IDES, Buenos Aires, Argentina.

36. Lucas, A. y Donati, P. (1987). La política social en el estado de bienestar: el desafío de los sistemas complejos. Reis, N° 37, pp. 57-68.
37. Titmuss, R. (1981). *Política social*, Barcelona, Ariel.
38. Linkografía: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/alvamarinas>

ANEXO N°1: registro fotográfico.

Fotografía N° 1



Área rural de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos grafica la productividad de sus tierras.

Fotografía N° 2



Comuneros después de producirse el desalojo forado.

Fotografía N° 3



Comunera Norma Inoñan H. mostrando los vestigios que quedaron después del desalojo forzoso, implementado por funcionarios del PEOT.

Fotografía N° 4



Familia More Monja mostrando su noria que fue destruida y enterrada por el personal del PEOT durante el proceso de desalojo forzado.

Fotografía N° 5

Viviendas destruidas por los funcionarios del Proyecto Especial Olmos Tinajones.

Fotografía N° 6**Comunero Félix More Monja mostrando el nuevo centro de reubicación, La Algodonera.****Fotografía N° 7****Instituto Educativo Primario N° 11602 "Ricardo Palma" Del Centro Poblado de La Algodonera.**

Fotografía N° 8

El ganado caprino de los comuneros desplazados y reasentados involuntariamente, desplazándose entre las nuevas viviendas.

Fotografía N° 9

Comunero recolectando leña para producir carbón, después del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

Fotografía N° 10

Comunera Reidelinda Peña C. dando agua al ganado caprino que aún posee en el caserío de Pan de Azúcar, después del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario.

Fotografía N° 11

Reunión entre el PEOT, INDER, FEDECAL, Defensoría Pueblo y comuneros de La Algodonera (23/01/2013).

Fotografía N° 12

La Industria

AMNISTÍA INTERNACIONAL

(51) (1) 241 9625 / (51) 1

Para Amnistía Internacional se violaron derechos de comuneros

La ONG —que vela por el respeto de los derechos humanos— acogió las denuncias por violencia que sufrieron olmanos durante el proceso de saneamiento de las tierras del proyecto agroindustrial Olmos, donde ellos antes vivían.

Amnistía Internacional toma bandera por los desplazados por proyecto Olmos

Advierte que el proceso habría sido violento y no se respetaron derechos humanos de comuneros

La ONG Amnistía Internacional, que vela por el respeto de los derechos humanos, acogió las denuncias de violencia de la que habrían sido víctimas los comuneros olmanos durante el proceso de saneamiento de las aborígenes tierras del proyecto agrícola Olmos, donde antes vivían.

El director ejecutivo de la organización, Juan la Puente, señaló que Amnistía ya se había contactado con la Defensoría del Pueblo, tanto de Lambayeque como de Lima, para saber qué acciones tomó a raíz de las denuncias de atropellos a los campesinos durante la migración desde sus terrenos hacia los nuevos que les ofreció el Proyecto Especial Olmos Tinajones (Peot). Pues anotó que, según información que maneja, hay indicios que señalan que el proceso habría sido violento, sin respetar los derechos de las personas.

Aunque no precisó fecha, indicó que Defensoría les iba a alcanzar un informe sobre este tema.

Aclaró que la participación de Amnistía no era para ver si las partes involucradas en este caso, o sea,

La Industria

AMNISTÍA INTERNACIONAL

ONG solicitó informe a Defensoría por acciones que tomó a raíz de denuncias de desplazados.

los comuneros y el Peot, cumplieron o no los acuerdos a los que se comprometieron en el marco de la salida de los campesinos de sus predios, sino exclusivamente tratar acerca del respeto a los derechos humanos, pues el objetivo es que el Estado implemente dispositivos legales para este tipo de circunstancias.

Por su parte, el docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Pedro Alva Marín, quien asesora a los campesinos, contó que durante los trabajos académicos

que, junto a un grupo de universitarios, realizó sobre este tema, visitó in situ las comunidades afectadas por el proyecto Olmos, registrando testimonios de los comuneros.

Subrayó que, en efecto, el desalojo no fue civilizado sino que grupos de desconocidos, en ausencia de los campesinos, llegaban hasta las viviendas de los comuneros y los desmantelaban, destruían los pozos de agua, los bebederos de los animales, etcétera, con tal de obligarlos a que abandonaran los predios.

La República

Amnistía Internacional solicitó al Estado peruano atender caso La Algodonera

OLMANOS. Comuneros desplazados a la fuerza por el PEOT acudieron a organismo mundial que acogió su demanda por haberse vulnerado sus derechos humanos.

Amnistía Internacional

Lo que pide las Naciones Unidas

Correo

LÍTICA Y ECONOMÍA

NG AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE IMPLEMENTACIÓN DE LEY PERUANA

Desalojados denuncian abandono del Estado

Responsabilizan al Proyecto Especial Olmos Tinajones

SWALDO CARRERA
guberna@grupoepa.pe

RICILAYO. Las 30 familias de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, que fueron desalojadas durante la ejecución del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), no han recibido ningún apoyo por parte del Estado.

Lo reveló el director de la ONG Amnistía Internacional en Perú, Juan la Puente, quien instó a las autoridades del poder legislativo a implementar medidas que permitan prevenir desalojos forzados.

«Estas personas no han recibido ningún apoyo de las autoridades competentes para compensar a familias por incumplimiento de acuerdos».

Los medios de comunicación muestran las declaraciones de Amnistía Internacional Sección Perú.

Fotografía N° 13.



Carne del comunero José S. que lo identifica como miembro de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, con sus respectivos beneficios.

Fotografía N° 14.




La comunera Norma I. muestra uno de sus elaboraciones textiles y la preparación de pan casero, como actividades habituales en su comunidad.

ANEXO N° 2: Registro documentario.

Registro N° 1

2013/05/09



**GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE**

Proyecto Especial Olmos Tinajones

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Chiclayo, **09 MAY 2013**

OFICIO No. 622 -2013/GR.LAMB/PEOT-GG

Señor
FELIX MORE MONJA
Presidente de la Junta de Administración Local de La Algodonera
La Algodonera, Olmos, Lambayeque

Presente:-

Asunto	RESPUESTA A SOLICITUD DE CONSIDERACIÓN DE VALORIZACIÓN DE PARTE
Referencia	Carta s/n de fecha 09 de abril del 2013

Por el presente, tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y, a la vez, para dar respuesta a su solicitud de consideración de valorizaciones alternativas de los daños, remitida mediante Carta s/n de fecha 09 de abril del 2013, en los siguientes términos:

Que, como es de su conocimiento, en el caso de la creación del Centro Poblado y/o Habitación Urbana La Algodonera, el mismo formó parte del Plan de Compensación y Relocalización Involuntaria, que incluyó el pago, a través de valorización, de los bienes de los afectados, además de la reubicación de quienes hayan poseído vivienda. Dicha reubicación comprendió la construcción de viviendas, local comunal, centro educativo, entre otras instalaciones de utilidad y necesidad comunal, así como el traslado de los afectados a la zona de reubicación -CP. y/o HU. La Algodonera-. Por tanto, mal hace usted en señalar que dicho proceso se ejecutó en el marco de un proceso mayor de "desalojo", debido a que como puede advertirse a cada afectado se le indemnizó los daños, en ninguna instancia se ha desplazado sin antes haber compensado; ni mucho menos se ha realizado procedimientos arbitrarios, coactivos y/o coercitivos, por el contrario cada afectado ha manifestado, libremente, su conformidad con el monto de las valorizaciones comerciales, que posteriormente fue cancelado como compensación.

De otro lado, es menester señalarles que, conforme al Informe de la Unidad de Gestión y Desarrollo Económico de la GPI del PEOT, las valorizaciones presentadas por usted mediante documento de la referencia no corresponden a la realidad evidenciada durante el proceso de compensación y relocalización, sino por el contrario responde a aspiraciones personales sin sustento técnico, por lo que solicito sujetarse a lo señalado por la UGESDE a efectos de comprender el análisis del PEOT sobre cada aspecto de las nuevas valorizaciones sometidas a consideración.

Sin otro particular que informarle, quedo de usted.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Proyecto Especial Olmos Tinajones

[Firma]
Francisco Gayoso Rivalles
Gerente General

cc. archivo

Chiclayo, Las Violetas 148 urb. Los Libertadores
Teléfono: (074) 225743 - 227080 - 229719 Telefax: (074) 235826
Oficina Litina: calle Larrabure y Unanue 299 Ofic. 701 - Jesús María
Teléfono: (011) 3322743
Página Web: www.peot.gob.pe

OLMOS, IRRIGACIÓN
ENERGÍA PARA EL DESARROLLO
PARA LA REGIÓN

OFICIO N° 622-2013/G.R.LAMBAYEQUE/PEOT-GG.

Respuesta por parte del PEOT a la solicitud remitida por el comunero Félix Monja.

ANEXO N° 3: Guía de encuesta y entrevista.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICAS SOCIALES Y EDUCACIÓN

EPECIALIDAD DE SOCIOLOGÍA

Encuesta

Nombre del encuestador:

Departamento: Provincia: Caserío:

Fecha:

1.- Información sociodemográfica

	Nombre y Apellido.	Relación de parentesco con el Jefe de familia.	Edad	sexo	¿Sabe leer o escribir?	¿Cuál es el último año y nivel de estudio?
01		Jefe de familia.				
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						

Relación de parentesco: cónyuge (1), hijo/hija (2), yerno/nuera (3), nieto (4), padre (5), madre (6), suegro (7), hermano (8), cuñado (9), sobrino

2.- Información socioeconómica:

Miembros del hogar que trabajan.	¿Cuál es su ocupación principal?	¿Cada que tiempo recibe dinero? Y ¿Cuánto recibe?		¿Cómo es su situación laboral? Estable (1) Eventual (2) Desocupado (3)	¿Lo que gana le alcanza para cubrir todas sus necesidades?
		Tiempo	Monto S/.		
01					
02					
03					
04					
05					
06					

2.1.- Información en producción agrícola:

¿U.D o alguien que vive en su hogar ha cosechado algún tipo de cultivo para la venta o consumo?

SI..... NO.....

¿Qué cultivo cosecharon en la última campaña?	Lugar donde está ubicada sus hectáreas de cultivo	¿Cuál fue la producción total del cultivo? (en hectáreas)	Destino de la producción		
			1	2	3
01					
02					
03					

2.2.- Información en producción ganadera:

¿U.D o algún miembro de su hogar posee algún tipo de ganado?

SI:..... NO:.....

¿Qué tipo de ganado posee o cría actualmente?	Cantidad de animales	Destino de la producción del ganado.		Si quisiera vender su ganado a cuanto lo vendería.	¿Dónde vende su ganado? Chacra (1) Chiclayo(2) Otro lugar(3)	Lugar en donde se ubica el ganado.
		Consumo.	Venta.			
1						
2						
3						
4						
5						

¿Desarrolla alguna otra actividad económica secundaria?

¿Cuál?:.....

¿Recibe algún apoyo económico por parte del Estado?

¿Cuánto?:.....

3.- Información sobre servicios básicos:

¿De dónde proviene el agua que utiliza?

.....
.....

¿Qué tipo de alumbrado tiene en su vivienda?

- a) Eléctrica b) Kerosén c) Petróleo d) Vela
e) Leña f) otro:.....

¿Qué tipo de servicio sanitario tiene en su casa?

- a) Desagüe b) Letrina c) Pozo ciego
e) otro:.....

4.- Información sobre servicio de salud:

En caso de enfermarse o de una emergencia,
¿Dónde se atiende?

.....

¿Se cuenta con un centro o puesto de salud en la su localidad?

.....

El síntoma, enfermedad y/o accidente que tuvo en los últimos 15 días

- a) Diarrea b) Tos y dificultad para respirar
c) Tos persistente de más de 15 días
d) Paludismo, Terciana, Malaria (Diagnostico por el médico, enfermera

5.- Información sobre el servicio de educación:

¿ En su localidad se brinda el servicio educativo?

.....

¿Dónde y a que distancia de su localidad se brinda el servicio educativo?

.....

.....



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICAS SOCIALES Y EDUCACIÓN

EPECIALIDAD DE SOCIOLOGÍA

Guía de entrevista

Entrevistador:.....

Departamento:..... Provincia:

Caserío:

Fecha:

1.- Condiciones sociales de vida antes del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario:

1.1.- ¿Cómo describiría su forma de vida antes de ser parte del proceso de desplazamiento y reasentamiento involuntario?

.....

1.2.- ¿Cómo compartían las tareas en el hogar y en la comunidad?

.....

1.3.- ¿Cómo se relacionaban con los caseríos de vecinos?

.....

2.- Información sobre el proceso de desplazamiento:

2.1.- ¿Cómo Ud. Se enteró de su calidad de afectado por el proceso de desplazamiento forzado?

a) funcionarios del Estado b) Por las noticias radiales o televisivas c) Por comentarios de vecinos d) Autoridades de su localidad e) otros,

2.5.- ¿considera que los mecanismos utilizados para tasar sus bienes afectados han sido adecuados? ¿Por qué?

.....

2.6.- ¿Cómo considera el proceso de compensación de sus bienes afectados? ¿Por qué?

.....

2.7.- ¿Cómo ha sido afectado durante el proceso de desplazamiento?

.....

2.7.- ¿Cómo fue el momento en que dejaron sus viviendas para ser reasentados?

.....

2.8.- ¿Cómo califica el proceso de desplazamiento? ¿Por qué?

.....

3.- Información sobre el proceso de reasentamiento:

3.1.- ¿Cómo describiría el proceso de reasentamiento?

.....

3.2.- ¿Cómo fue la asistencia o apoyo recibido durante el proceso de reasentamiento?

.....

3.3.- ¿Cómo es la convivencia en ésta zona de reubicación?

.....

3.4.- ¿Cuáles son las características de su nueva condición social de vida?

.....

3.5.- ¿Cuáles son los cambios que se han dado en su forma de vida con éste proceso?

.....

